

**La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico** fue creada por la Ley 142 de 1994 como Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico, con autonomía administrativa, técnica y patrimonial.

Esta Ley le señaló a la Comisión, en la aplicación de las normas de su competencia, como prioridad, el objetivo de mantener y extender la cobertura de los servicios, sin sacrificio de las mejoras en la eficiencia, competencia y calidad. Asimismo, le fijó como funciones y competencias generales la de regular los monopolios en la prestación de los servicios, cuando, de hecho, no sea posible la competencia, y la de promover ésta entre quienes prestan los servicios públicos, con el objeto de que sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante y produzcan servicios de calidad.

La Comisión está integrada por los siguientes miembros:

PRINCIPALES      DELEGADOS

*Presidente de la Comisión*

Ministro de Desarrollo Económico  
RODRIGO MARÍN BERNAL

Viceministro de Vivienda, Desarrollo Urbano Agua Potable y Saneamiento Básico  
FABIO GIRALDO ISAZA

*Ministro de Salud*

ALONSO GÓMEZ DUQUE

Viceministro de Salud  
IVÁN MORENO ROJAS

Director Departamento Nacional de Planeación  
JOSÉ ANTONIO OCAMPO GAVIRIA

Subdirector Departamento Nacional de Planeación  
JUAN CARLOS RAMÍREZ JARAMILLO

*Coordinador General*

Experto de la Comisión  
JAIME SILDARRIAGA SANÍN

*Invitado Permanente*

Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios  
JOSÉ FERNANDO CASTRO CAYCEDO

*Experta de la Comisión*

MARGARITA DURÁN ARIZA

*Invitado Especial*

Director Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Desarrollo Económico  
LUZ ÁNGELA MONDRAGÓN

# REGULACION

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Revista de la Comisión de Regulación  
de Agua Potable y Saneamiento Básico

FRANCISCO JAVIER OCHOA FRANCO

Editor

*Ex-experto de la Comisión de Regulación  
de Agua Potable y Saneamiento Básico*

JOHN BRIAN CUBAQUE REY

Diseño general y carátula

EDISOMA Ltda.

Edición Electrónica

\*\*\*\*\*

Impresión

*Santafé de Bogotá, marzo de 1995*

*Carrera 15 No. 95-98, interior 4, Santafé de Bogotá*

*Teléfonos: 616 7962/65/69/70/71/72/73*

*Fax: 218 1546*



# Contenido

---

|   |    |
|---|----|
| <i>Editorial</i> .....  | 5  |
| <i>Senado de la República. Ponencias</i> .....  | 6  |
| <i>Cámara de Representantes. Ponencias</i> .....  | 25 |
| <i>Exposición de motivos</i> .....  | 29 |
| <i>Ley 142/94. Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios</i> .....                    | 48 |
| Título Preliminar   |    |
| Capítulo I. Principios Generales .....  | 48 |
| Capítulo II. Definiciones Especiales .....  | 54 |
| Título I. De las personas prestadoras de servicios públicos .....                           | 57 |
| Capítulo I. Régimen Jurídico de las Empresas de Servicios Públicos .....                    | 58 |
| Capítulo II. Participación de Entidades Públicas<br>en Empresas de Servicios Públicos ..... | 63 |
| Capítulo III. Los bienes de las Empresas de Servicios Públicos .....                        | 65 |
| Título II. Régimen de Actos y Contratos de las Empresas .....                               | 65 |
| Capítulo I. Normas generales .....  | 65 |
| Capítulo II. Contratos Especiales para la Gestión de los Servicios Públicos .....           | 67 |
| Título III. Régimen Laboral .....   | 69 |
| Título IV. Otras Disposiciones .....  | 71 |
| Capítulo I. Del Control de Gestión y Resultados .....                                       | 71 |
| Capítulo II. Información de las Empresas de Servicios Públicos .....                        | 73 |
| Capítulo III. De las Expropiaciones y Servidumbres .....                                    | 73 |
| Capítulo IV. Toma de posesión de las Empresas de Servicios Públicos .....                   | 75 |
| Capítulo V. Liquidación de las Empresas de Servicios Públicos .....                         | 75 |

|   |     |
|---|-----|
| Título V. Regulación, control y vigilancia del Estado en los Servicios Públicos _____                             | 76  |
| Capítulo I. Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios _____  | 76  |
| Capítulo II. De los Ministerios _____   | 78  |
| Capítulo III. De las Comisiones de Regulación _____   | 79  |
| Capítulo IV. De la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios _____                                     | 85  |
| Capítulo V. Presupuesto y Contribuciones<br>para las Comisiones y la Superintendencia de Servicios Públicos _____ | 88  |
| Título VI. El Régimen Tarifario de las Empresas de Servicios Públicos _____                                       | 90  |
| Capítulo I. Conceptos Generales _____   | 90  |
| Capítulo II. Fórmulas y Prácticas de Tarifas _____  | 92  |
| Capítulo III. De los Subsidios _____  | 97  |
| Capítulo IV. Estratificación Socioeconómica _____   | 98  |
| Título VII. Organización y Procedimientos Administrativos _____   | 100 |
| Capítulo I. Principios y Reglas _____   | 100 |
| Capítulo II. De Los Procedimientos Administrativos Para Actos Unilaterales _____                                  | 100 |
| Capítulo III. Las Expropiaciones y Servidumbres _____   | 102 |
| Capítulo IV. Toma de Posesión y Liquidación _____   | 103 |
| Capítulo V. Las Formulas Tarifarias _____   | 104 |
| Título VIII. El Contrato de Servicios Públicos _____  | 105 |
| Capítulo I. Naturaleza y Características del Contrato _____   | 105 |
| Capítulo II. De la Prestación del Servicio _____  | 108 |
| Capítulo III. El cumplimiento y la prestación del Servicio _____  | 109 |
| Capítulo IV. De los Instrumentos de Medición del Consumo _____  | 111 |
| Capítulo V. De la Determinación del Consumo Facturable _____  | 112 |
| Capítulo VI. De las Facturas _____  | 113 |
| Capítulo VII. Defensa de los Usuarios en Sede de la Empresa _____   | 114 |
| Título IX. Normas Especiales para Algunos Servicios _____   | 115 |
| Capítulo I. Agua Potable y Saneamiento _____  | 115 |
| Capítulo II. Energía Eléctrica y Gas Combustible _____  | 117 |
| Título X. Régimen de Transición y otras Disposiciones _____   | 120 |
| <b>Índice Analítico</b> _____   | i   |



# La cultura de la regulación

*Con el presente número se inicia la publicación de la revista de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico que busca crear un vínculo permanente de comunicación con las empresas reguladas, las entidades territoriales y los usuarios.*

*La Ley 142 de 1994 creó las comisiones de regulación como el instrumento básico para crear y preservar unas condiciones que permitan asegurar una prestación eficiente de los servicios públicos. Le corresponde a las comisiones de regulación establecer las normas que permitan el libre ejercicio de la competencia en la oferta de los servicios públicos. Cuando la competencia no sea posible, o esté restringida, como es el caso de los servicios de acueducto y alcantarillado, las comisiones deberán tomar las medidas que eviten abusos de posición dominante sobre los usuarios. Asimismo, le corresponde establecer el régimen de tarifas y las normas de calidad del servicio, así como la definición de los criterios de eficiencia y el desarrollo de los indicadores y modelos para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos.*

*La revista tendrá las siguientes secciones permanentes: una dedicada a los aspectos jurídicos, en la cual se recogerán las resoluciones de la Comisión, las sentencias y jurisprudencias sobre los servicios públicos y los decretos reglamentarios de la Ley. Otra estará dedicada a publicar los estudios realizados por la Comisión. Existirá también una sección donde se publicarán las opiniones y colaboraciones de las empresas y personas conocedoras de la problemática de los servicios públicos. El análisis didáctico de la Ley 142 de 1994 será una de las tareas prioritarias, máxime en un sector tan estrechamente vinculado al desarrollo municipal.*

*Sin lugar a dudas, la Ley 142 de 1994 está llamada a jugar un papel fundamental en la vida cotidiana de los habitantes del país, no sólo porque introduce una vigorosa normatividad para inducir una gestión eficiente de los servicios públicos domiciliarios, sino porque crea un riguroso sistema de vigilancia y control, en el que los usuarios serán actores principales a través de los Comités de Desarrollo y Control Social. A lo anterior habría que agregar la incidencia que tendrá la aplicación de la tutela en los servicios públicos.*

*Nuestra Constitución Política, promulgada en el año de 1991, consagró como inherentes a la finalidad social del Estado los servicios públicos, y le señaló como deber su prestación eficiente a todos los habitantes del Territorio Nacional.*

*Por ser el punto de partida de las transformaciones que se avecinan, el primer número de la revista está dedicado de manera especial a la divulgación de la Ley 142 de 1994. Para facilitar la consulta, se incluye un índice analítico. También se incluye la exposición de motivos y las ponencias que se presentaron en el Congreso de la República durante el trámite de esta Ley, las cuales pueden resultar de gran utilidad en saber cuál fue la voluntad del legislador, especialmente en algunos artículos de difícil interpretación.*

---

# Senado de la República

---

## PONENCIA PARA PRIMER DEBATE<sup>1</sup>

---

### Exposición de motivos del pliego de modificaciones

---

**A**l rendir esta ponencia sobre el Proyecto de Ley Número 197 de 1992, «por la cuál se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios», estamos cumpliendo con la obligación constitucional, responsabilidad que asumimos por la honrosa designación que nos entregara el señor Presidente de la Comisión Sexta, el honorable Senador Juan Guillermo Angel Mejía.

Desde la pasada legislatura, cuando un proyecto con el mismo propósito fue entregado a

nuestra Comisión Sexta bajo al número 035 de 1992 -con la inmensa responsabilidad que ello conllevaba, por las implicaciones y alcances de un tema con tan múltiples dimensiones y efectos-, comenzamos un arduo y complicado proceso de intercambio de ideas con los sectores del Gobierno, en especial el DNP, directamente involucrados y más interesados en el proyecto; con los gremios profesionales, como Acodal, las asociaciones de ingenieros de las diversas especialidades; con los representantes de las empresas que prestan diversos servicios públicos en varias regiones, incluidos los empresarios privados que prestan el servicio público del gas combustible; con diversos usuarios de los servicios; con empresarios potencialmente interesados en convertirse en inversionistas de los servicios públicos domiciliarios,

---

<sup>1</sup> Gaceta del Congreso, Año II - N° 121, viernes 7 de mayo de 1993

SPD; en fin, llevamos a cabo un verdadero, interesante y productivo proceso que condujo al Gobierno Nacional al proyecto de ley que, bajo el número 197 de 1992, ha sido sometido a nuestra consideración.

El Proyecto de Ley número 197 de 1992 es una versión que recoge favorablemente muchas de las inquietudes que recibimos; sin embargo, adolece aún de puntos susceptibles de mejorar y posee varios otros que merecen replantearse a fondo e inclusive, algunos que no pueden permanecer, si se quiere una ley coherente, sólida y que cumpla con su función-objetivo.

En el Proyecto número 197/92, se mejoraron muchos elementos que, en la anterior versión, aparecían confusos o impracticables. Igualmente, el Gobierno Nacional introdujo, gracias a nuestra gestión y trabajo conjunto, novedosos y más acertados desarrollos institucionales que, como la elevación del actual-casi marginado- status del sector agua potable y saneamiento básico a la categoría del Viceministerio o como él, en nuestra opinión, adecuado posicionamiento institucional de los mecanismos de regulación y control, significan un verdadero redimensionamiento y un indudable avance en la estructura de la administración y la gestión de los servicios públicos en Colombia.

## **I. ANTECEDENTES QUE LLEVAN A LA NECESIDAD DE UNA LEY DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**

### *1.1. El modelo actual de prestación de servicios públicos entró en crisis*

1.1.1. El Estado colombiano atraviesa una difícil encrucijada. La ciudadanía poco cree que éste pueda enfrentar, mucho menos resolver los graves problemas que afronta el país. En ésta visión del Estado juegan un papel importante los servicios públicos domiciliarios. Ellos son parte esencial de nuestra vida cotidiana, y como tal, su eficiente o deficiente

prestación incide en la percepción que los ciudadanos tienen de sus gobernantes.

1.1.2. Los servicios públicos han absorbido y continúan absorbiendo la mayor parte de los recursos públicos. Puesto en perspectiva histórica, no era posible que sin una decidida intervención estatal hubiésemos podido desarrollar el sector. Hacia el futuro, la ampliación de coberturas urbanas y el cubrimiento de las zonas rurales, además del ingente esfuerzo en saneamiento básico y recuperación de nuestros ríos y fuentes de agua que debemos llevar a cabo requiere la presencia estatal.

1.1.3. El sector enfrenta una crisis financiera profunda, que no solamente se traduce en la imposibilidad de ampliar la cobertura, sino que produce serios cuellos de botella a la actividad económica en general, como lo vivimos en el reciente apagón. Esta crisis tiene raíces profundas y diversas.

1.1.4. La crisis combina elementos de incapacidad de planeamiento, deficiencia administrativa, restricción de mercados y estructura tarifaria. Frente a ella, la inyección de nuevos recursos vía presupuesto o tarifas en las actuales condiciones, se constituye en un costo muy grande para la sociedad; la simple aplicación de disciplina fiscal afecta primero las nuevas inversiones y el mantenimiento, como ya ocurrió en el sector eléctrico y torna muy vulnerable al sistema.

1.1.5. Se requiere entonces una gran reestructuración organizacional. Los enormes sobrecostos del sector se encuentran en las malas decisiones de inversión, donde por razones políticas no se escogen los proyectos más rentables; en la pésima capacidad de contratación, que termina produciendo inmensos sobrecostos tanto en el contrato mismo como en su ejecución. En su incapacidad operativa, que se refleja en una baja productividad y grandes pérdidas negras, además de un mal servicio al usuario.

1.1.6. El proyecto del Gobierno plantea elementos interesantes de esta reestructuración:



eliminación de la restricción de los mercados, vinculación del sector privado tanto a través de recursos de inversión como a través de contratos de gestión con las empresas públicas; reordenamiento de las tarifas y los subsidios; fortalecimiento y separación de las funciones de regulación, y control y vigilancia.

1.1.7. Si bien todos estos elementos son posibles y necesarios, en nuestro sentir son insuficientes. En la práctica, no todas las empresas adolecen del mismo grado de ineficiencia, y por lo tanto el proyecto desaprovecha la oportunidad de permitirle a las empresas públicas una reestructuración al interior, es decir, la aplicación de un modelo de gestión que remueva las trabas que han incidido en la ineficiencia. Ello es importante si se tiene en cuenta que el sector privado entrará al sector lentamente y que, mientras se consolida la estructura de regulación y control, la interacción de los sectores público y privado es benéfica. No darle los elementos al sector público de reestructurarse equivale a darle la partida de defunción anticipada y limitarnos a esperar la vinculación del sector privado.

1.1.8. Se requiere además la reestructuración financiera de las empresas. Se debe buscar el saneamiento de las empresas utilizando mecanismos financieros para asumir las pérdidas patrimoniales del pasado. Y unas empresas más sólidas que puedan acometer las grandes inversiones que requiere el sector en el futuro, aprovechando las economías de escala. La empresa municipal, tal como la conocíamos, no será viable en el futuro.

1.1.9. El esquema de vigilancia y control del proyecto de ley, aunque bien concebido, requiere mayor contundencia. La historia de la Superintendencia

de Sociedades ha demostrado lo difícil que es esta labor. El esquema colombiano de revisorías fiscales que debería servir de soporte al control, es muy débil en un sector tan delicado como el de los servicios públicos.

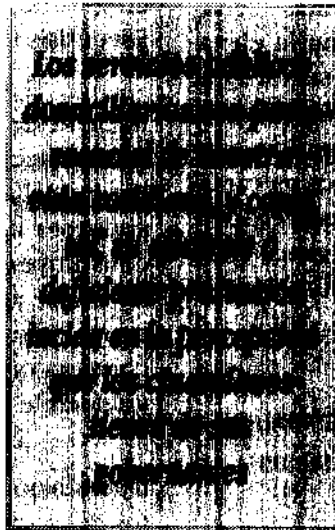
## *1.2. Búsqueda de eficacia y eficiencia mediante cambios en la organización y en los modelos de gestión*

1.2.1. Los gobiernos del mundo entero se están reestructurando. El propósito de la reestructuración no es privatizar, descentralizar o desmantelar el Estado; estos pueden ser o no medios para el logro del propósito de la reestructuración: el mejoramiento de la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

1.2.2. La vía corriente para lograr eficacia y eficiencia, en los ámbitos privado y público es la reforma organizacional, el desarrollo institucional. Los cambios en la teoría de la organización y sus aplicaciones en la práctica, sus ensayos y sus errores, son en efecto, la gran revolución del último cuarto del siglo XX.

1.2.3. Los cambios en la organización penetraron primero en el sector privado y se concentraron en las unidades de gestión directa de la producción y la distribución de bienes y servicios. El común denominador de

las reformas fue imprimir flexibilidad en la organización para hacerla más receptiva, más fácilmente adaptable a las demandas del usuario. El demandante, usuario o beneficiario comenzó a guiar invisiblemente a la organización; el buen gerente pasó a ser aquél que detecta las quejas o las preferencias de los usuarios y responde a ellas con prontitud. Los modelos de gestión de la organización pasaron a ser "guiados por la demanda", es decir, conducidos por los





destinatarios de sus productos y sus servicios; apareció entonces un nuevo modelo de gestión.

1.2.4. La primacía del usuario o consumidor hizo indispensable ampliar los receptáculos de la unidad de gestión. Cada dependencia de la organización tendría que prestar atención a las exigencias de sus respectivos usuarios o destinatarios. Surgieron teorías y prácticas ampliamente conocidas y experimentadas hoy en día en el sector privado; los círculos de calidad, la calidad total.

1.2.5. Cuando se aproxima el siglo XXI, el sector privado del mundo entero crea y recrea con avidez formas organizacionales, reclamando para cada una de ellas las virtudes de la flexibilidad y la adaptabilidad. Estas virtudes conducen a la reducción de las pérdidas y a la elevación de la eficiencia y la competitividad.

### *1.3. El sector público asume rezagadamente los retos organizacionales*

1.3.1. El sector público del mundo entero se hallaba impreparado para tan vasta y dinámica reforma de la organización. Sus rigideces eran mayores y más férreas que las de las organizaciones privadas; su inercia institucional demostró ser considerablemente mayor.

1.3.2. Una salida utilizada por muchos gobiernos fue la privatización. Como el sector público presentaba más resistencias a las medicinas para lograr eficiencia, la supresión de parte de aquél y su sustitución por organizaciones del sector privado pareció una receta fácil para el logro de la flexibilidad y la elevación de la competitividad nacional.

1.3.3. La vía de la privatización no fue siempre exitosa ni siempre posible. Como lo están experimentando los países de Europa del Este el capital disponible para invertir en empresas estatales es marginal, más si éstas empresas atraviesan una situación económica difícil. Además, sin una estructura

regulatoria y de control adecuada, pueden presentarse abusos, especialmente en campos donde existen monopolios de hecho.

1.3.4. La otra vía ampliamente socorrida en ocasiones paralela y en ocasiones entrecruzada con la privatización, fue la descentralización del Estado. Como descentralizar en teoría, es aproximar los costos y los beneficios de un servicio a los usuarios, esta vía ofrecía una mayor concordancia entre el objetivo final (la consecución de mayor eficiencia) y el medio (redistribución de competencias y recursos).

1.3.5. Por razones todavía difíciles de establecer, privatización y descentralización se convirtieron, en muchos países, en fines en sí mismos. Tan ardua y compleja era la tarea de llevarlas a cabo que se perdió de vista el objetivo final del logro de la eficiencia. Privatización se hizo libremente equivalente, cuando no idéntica a mercado, competitividad y eficiencia; descentralización se equiparó gratuitamente con adecuación a las demandas de los usuarios y asignación de recursos según las preferencias ciudadanas.

1.3.6. Esto limitó la aplicación de reformas organizacionales en el Estado y por el contrario impulsó su ineficiencia, no permitiéndole atraer el elemento humano necesario para cumplir su tarea. Tampoco se explotaron caminos conjuntos, que permitiesen al sector público fortalecer su capacidad de gestión y de atraer nuevos recursos al sector. Estos caminos conjuntos se encuentran limitados nuevamente por la estructura misma del sector público.

### *1.4. Colombia perdió su rumbo: Los medios se volvieron fines*

1.4.1. Diversas misiones presidenciales aclimataron en el país la idea de la ineficiencia del sector público y la necesidad de retornar a los criterios de mercado mediante la privatización y la descentralización. A pesar de que nuestro sector privado apenas

despertaba a los nuevos desarrollos organizacionales, poco hicieron estas misiones para promover entre nosotros modalidades organizacionales que aseguraran la eficiencia en la gestión, ya fuera dentro del sector público o del sector privado. Los gobiernos vienen tratando de atraer empresas y capital privado a los servicios públicos, pero ello sucede lentamente prefiriendo los inversionistas el sector de telecomunicaciones y pequeños proyectos de generación eléctrica.

1.4.2. La descentralización se convirtió también en un fin en sí misma. Objeto de debates predominantemente ideológicos -cuando no marcados por tintes populistas de todos los orígenes- no ha logrado hasta ahora la unión entre el usuario o el beneficiario y el servicio prestado por los niveles local o regional. Aunque parezca paradójico, la participación ciudadana (individual o comunitaria, de consumidores o productores) es el ingrediente más esencial y al mismo tiempo el más descuidado de la estrategia descentralizadora seguida por Colombia. Al sector de agua potable y saneamiento básico se le aplicó la descentralización, desmontando el Infopal sin conseguir mejoras en la eficiencia en el servicio.

1.4.3. La década de los 80 encontró a unas empresas sobre endeudadas dentro de un ambiente macroeconómico más restringido. La disciplina fiscal impuesta desde arriba los obligó a recuperar, al menos parcialmente, su atrasada estructura tarifaria y a reducir en alguna medida sus costos. Pero las empresas continuaron con estructuras gerenciales y administrativas ineficientes.

1.4.4. El país no utilizó los recursos de quienes en nuestro medio seguían más de cerca los desarrollos mundiales de la organización: algunas facultades de administración de empresas e ingeniería industrial y algunos gremios y sociedades privadas.

1.4.5. En síntesis, seguimos siendo herederos de la administración y la modernización "por ley

o decreto", desconociendo el difícil y dinámico campo de la administración, especialmente de la organización. Nuestras normas no indican siquiera cómo o bajo la inspiración de qué modelos habrá de hacerse más eficiente el Estado moderno, en su creciente interacción con la sociedad.

## II. LOS PROPÓSITOS DE ESTA LEY

### 2.1. *El propósito central de esta ley*

2.1.1. Decíamos, en uno de esos tantos foros en los que se discutía el proyecto de ley sobre el régimen de los SPD, que el propósito de gobernantes y gobernados, políticos y administradores, dirigentes y ciudadanos, ante la crítica situación a la que llegaron los servicios públicos domiciliarios, tenía que apuntar a "... *la búsqueda de una solución (que) estaba en las estructuras mismas de las empresas oferentes de los servicios públicos, en sus estructuras institucionales, en sus mecanismos de financiación, en sus instrumentos de regulación y control, en fin, en toda la trama que se unde sobre su administración y sobre su ordenamiento gerencial y que le permite cumplir con su fin único y último: llevarle al ciudadano unos servicios públicos en la calidad y cantidad que él los necesita ...*" .

2.1.2. Vistas las anteriores consideraciones resulta fácil deducir el propósito central de esta ley: estimular formas de gestión que, por hallarse supeditadas a las preferencias de los usuarios, aseguren la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

2.1.3. Tratándose de los servicios públicos domiciliarios, la eficacia dice relación con el cumplimiento de las metas trazadas en materia de cobertura y calidad. La eficiencia toca con la relación entre los costos sociales y los beneficios alcanzados.

2.1.4. La ley busca crear las vías institucionales que lleven al florecimiento de formas de gestión capaces de incorporar los mejores recursos públicos y privados disponibles para la prestación de los servicios públicos domiciliarios en una localidad o en varias localidades. Es una ley para el desarrollo institucional, no para la limitación de éste.

2.1.5. La ley no se casa entonces con la privatización; ella será conveniente cuando conduzca realmente a mayor eficiencia y eficacia. La ley se casa únicamente con el control de los usuarios y este podrá ejercerse, bien por vías del mercado, cuando hubiere condiciones de competencia; bien por vías de expresión no monetarias de las preferencias de los usuarios, cuando no hubiere condiciones de competencia. En uno y otro caso, los usuarios de menores ingresos deberán ser provistos de la capacidad de pago necesaria para sufragar los precios de los servicios mínimos indispensables.

2.1.6. Tampoco se casa la ley con la centralización ni con la autonomía local extremas. Desde el punto de vista del gasto, las relaciones intergubernamentales son convenientes y necesarias para fines de la coordinación, la asistencia técnica y gerencial, la supervisión, la información, la búsqueda de economías de escala, los planes de desempeño y los controles de gestión y resultados. Esas mismas relaciones son indispensables, desde el punto de vista de los ingresos públicos, para una adecuada financiación de los niveles subnacionales en vista de las limitaciones estructurales de las bases imponibles manejadas autónomamente en estos niveles, para el estímulo del esfuerzo fiscal propio y para la armonización y hasta la cogestión de los impuestos, tasas y contribuciones. De manera que la autonomía absoluta de cada nivel es, como lo hallaron los brasileros después de la Constitución

Municipalista de 1988, una entelequia que conduce al desorden y la ineficiencia.

2.1.7. Del otro lado de la moneda, la centralización extrema anula la proximidad de los usuarios al servicio y, por ende, la posibilidad de participación y de control por parte de éstos en la mayor parte de los servicios públicos domiciliarios.

2.1.8. La ley parte de la premisa del respeto a la soberanía del beneficiario (consumidor, demandante, usuario) de los servicios públicos domiciliarios. El respeto a tal soberanía apela entonces a una interacción entre los distintos niveles de gobierno, de suerte que se de un balance equilibrado entre las manifestaciones de soberanía que son mejor identificadas y reconocidas en el plano local, las que sólo pueden serlo en el orden regional y aquellas que requieren de la orientación y la consagración en el orden nacional.

## *2.2. Propósitos complementarios de la Ley*

2.2.1. Además de imprimir eficacia y eficiencia a los servicios públicos domiciliarios, la ley busca facilitar la vinculación de capitales privados con el fin de allegar nuevos recursos, tanto financieros como administrativos a estos servicios. Se parte de la premisa de la insuficiencia de los recursos actuales para promover adecuadamente los servicios. Al mismo tiempo, se establecen modalidades y regulaciones de gestión a las cuáles deben someterse los capitales particulares (como también los públicos) con el fin de alcanzar la eficiencia mediante el control del mercado o de expresiones de preferencia sustitutivas del mercado.

2.2.2. La ley consagra el carácter esencial de los servicios públicos domiciliarios. De este carácter

nace el deber de intervención del Estado previsto en la Constitución del 91. La ley puntualiza entonces los objetivos que el Estado debe buscar y las prioridades que debe observar en el ejercicio de esta intervención.

### *2.3. Otros alcances de esta Ley*

2.3.1. Esta ley constituye un ejercicio pionero en nuestro país en materia de normas de contenido administrativo. No se trata ya de ordenar que se haga sino de entender las implicaciones políticas y económicas de las distintas modalidades administrativas, tomar partido por unas u otras, crear efectivamente las condiciones para que ellas se den y asegurar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la norma. La ley es, en consecuencia, un primer ejemplo que intenta dar al desarrollo organizacional público, y a las relaciones de éste con sus semejantes en el sector privado, todo el peso y la jerarquía que tiene dentro del concurso de los instrumentos para el desarrollo económico y político de los pueblos.

2.3.2. La ley apunta a desarrollar efectivamente los mecanismos indispensables para la aplicación del control de gestión y del control de resultados de que hablan la Carta del 91 y la ley de Control Fiscal aprobada por el congreso del pasado mes de diciembre. Esos controles no operan por decreto; están íntimamente ligados a la concepción contemporánea de la gerencia y de la organización y requieren de ellas para encontrar terreno fértil para su aplicación. No puede aplicarse control de gestión donde no existen, por ejemplo, responsabilidades individuales claramente delimitadas, lo que supone a su vez un plan de operaciones y un plan de desempeño. Tampoco cabe aplicar controles de resultados cuando no se han identificado metas acordes con la misión institucional y se han reflejado tales metas, de manera clara y transparente, en el presupuesto de la organización. De donde se colige que la aplicación

de los controles de gestión y resultados presupone una reforma de las organizaciones públicas en los campos de la planeación, la información, la presupuestación, la responsabilidad de los individuos y los grupos de individuos, la coordinación entre ellos, etc.

2.3.3. Esta ley desarrolla también el concepto de participación ciudadana establecido en la Constitución del 91. Existen ya suficientes canales de participación representativa: las juntas administradoras locales, los concejos, las asambleas y el Congreso. La participación en la base debe ser más autónoma y dinámica, responder a las necesidades cambiantes de la comunidad. Por ello la ley permite una total autonomía de organización a la comunidad y establece el canal a través del cuál ésta participa en la gestión y fiscalización de las empresas. La ley también responsabiliza a las autoridades de la instrumentación de esta participación.

### **III. NUESTRA PROPUESTA AL PROYECTO DE LEY**

Con las explicaciones que planteamos a continuación, pretendemos sintetizar la manera como se plasman la orientación y el sentido de la nueva ley en sus libros, títulos y capítulos específicos. Naturalmente, aquí sólo se hará referencia a los artículos más importantes, aquellos que contienen los puntos sobre los cuáles conviene llamar la atención.

### **IV. SOBRE LAS DEFINICIONES BÁSICAS DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 197 DE 1992**

Como punto de partida del análisis que proponemos sobre el Proyecto de ley número 197 de 1992, "régimen de los servicios públicos domiciliarios, SPD", debemos recordar que nuestra Corporación legislativa, -como lo afirma la exposición de motivos del proyecto en mención-, en virtud de la

cláusula general de competencia que le otorga la Constitución Política, en el inciso primero del artículo 50, está facultado para regular el tema de los SPD y el de los servicios públicos en general. En consecuencia, el Congreso puede regularlo en la forma que estime más conveniente para el país, sin sujetarse a más límites que los que le impongan las normas de la Constitución; ésta, deja a la ley la tarea de fijar los límites precisos de las orientaciones que ella señala. Al respecto, compartimos la opinión expresada en la exposición de motivos en el sentido de que *"...la Constitución no quiso establecer en esta materia, ni en otras, rígidas camisas de fuerza (...)".*

Uno de los puntos axiales del proyecto apunta a la diferenciación -con un sano principio de responsabilidad social- entre lo que son los servicios públicos domiciliarios básicos y los servicios públicos domiciliarios que no lo son. Los primeros involucrarán a los servicios de acueducto, saneamiento básico y energía eléctrica. Los segundos a los de telefonía local fija o convencional y los de gas combustible. En el primer caso, el de los servicios públicos domiciliarios básicos, es evidente la obligación social que tiene el Estado de garantizar su prestación y expansión de la cobertura.

En este punto, vale la pena anotar un aparente error de forma en la redacción del numeral 14.21 del proyecto de ley: allí se les otorga la categoría de domiciliarios, a pesar de que en la "exposición de motivos" se anuncia que no tendrán esa clasificación.

Apuntando en esta dirección y aceptando la intención anunciada en la exposición de motivos, consideramos conveniente conservar la concepción explícita en el proyecto al clasificar a la telefonía local fija o convencional como un servicio público domiciliario, lo cuál le conservaría la competencia de su prestación a los entes territoriales.

El caso del gas combustible es más complejo. Aunque por definición debe ser considerado un servicio domiciliario, el desarrollo de este servicio público en el país ha sido lento, atendiendo principalmente a las posibilidades del recurso natural. No cabe duda que los nuevos yacimientos encontrados permitirán al Estado la posibilidad de una gran expansión de este servicio público, con una buena confiabilidad, y permitiendo la sustitución de energía eléctrica para cubrir parte de la demanda de energías, lo que haría más eficiente el sector de energéticos. Es importante que la expansión de este servicio se haga de manera ordenada sustituyendo consumos de energía eléctrica tanto en los estratos altos como bajos, evitando que, debido a la estructura tarifaria actual del sector, se cause grave perjuicio a las empresas de energía a través del descreme del mercado. Debido a esto y a la necesidad de hacer una expansión del servicio acorde con la disponibilidad del recurso natural, de las prioridades de sustitución y de los recursos disponibles para inversión, consideramos conveniente que por ahora se mantenga la actual estructura de manejo del gas, a través del Ministerio de Minas.

En el mismo sentido, es plausible conservar la "intención" de darle una concepción integral a los SPD: de este modo, no solo se involucra en su definición al componente de distribución, el cuál implica el "último tramo" de los SPD, sino que se incluyen -en su concepción y definición- desde las actividades que permiten la generación o producción del servicio, su procesamiento o transformación, su transporte o transmisión y su entrega, en condiciones adecuadas, al usuario final o consumidor. Sin embargo, muchas de estas actividades complementarias no requieren que se les obligue a organizarse como empresas de servicios públicos. Es así como

13

proponemos que sea la Comisión de Regulación respectiva la que establezca cuándo considera que una actividad complementaria debe organizarse como tal.

## V. LA PROTECCIÓN AL USUARIO

Uno de los aspectos que propone el proyecto de ley es la creación de los comités de desarrollo de los servicios públicos domiciliarios, los cuáles deben organizarse en todos los municipios y que -según el Proyecto número 197 de 1992- permiten, al usuario, una participación en la gestión y fiscalización de todas las empresas que prestan servicios públicos. En este caso, nos parece que su concepción va más allá de lo que establece la norma constitucional en su artículo 369 que afirma:

*"La ley determinará los derechos y deberes de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio".*

Por otra parte, vemos casi impracticable el procedimiento que propone el proyecto para la elección de los representantes de los usuarios de los distintos servicios públicos en los mencionados comités de desarrollo. Aunque consideramos que es indispensable la implementación de un instrumento democrático de gestión ciudadana y fiscalización, creemos que debe instituirse un esquema que garantice, además de la participación, la agilidad y la eficacia del control, características estas últimas que no creemos se cumplan a cabalidad con el sistema propuesto en el proyecto.

Es saludable y consideramos que es indispensable, conservar el espíritu del proyecto en el sentido de que, en cada municipio, los "comités de desarrollo" tengan la responsabilidad y el deber de proteger al usuario en los asuntos cotidianos y de menor cuantía relacionados con la prestación de los servicios públicos.

Pero, no vemos adecuado el planteamiento del proyecto de ley en el sentido de otorgarle facultades sancionatorias directamente a los mencionados comités.

Creemos que los comités mencionados deberán diseñar, orientar e implementar sus mecanismos de vigilancia únicamente para solicitar la eventual imposición de sanciones, sin perder de vista el necesario control disciplinario para evitar abusos.

Un elemento novedoso que estamos incluyendo es un concepto moderno de la participación ciudadana de una manera real y práctica, en la vigilancia y fiscalización de las empresas que prestan los servicios públicos domiciliarios. A través de ella, se ha abierto un nuevo espacio de participación y colaboración de la comunidad para que ella, en representación de la sociedad y el Estado-Gobierno compartan las tareas de vigilancia y fiscalización de la gestión de las empresas de SPD. En esencia, este esquema reconoce que existen ya suficientes instancias de participación representativa y por lo tanto induce un eficaz mecanismo de participación que pone al servicio de la comunidad un sistema de quejas y atención ciudadana para que ella lo utilice de manera práctica con los problemas que tocan a diario al usuario de los SPD (por ejemplo: la factura excesiva, la reparación que nunca llega, las fugas, la solicitud de conexión que tarda meses, etc.). Son estos los problemas que debe afrontar la participación ciudadana antes que esos inmensos problemas de -como los que propone el proyecto- "...informar acerca de las necesidades de expansión de los SPD y sus costos y proponer la forma de atender aquella y sufragar éstos..." o "...imponer multas..." o "...dar opiniones sobre las consultas que promuevan los gobernadores o el Gobierno Nacional acerca de la remoción de los administradores de las empresas de SPD...", que hoy pueden ya ser ventilados tanto a nivel de Asambleas como Concejos. Este esquema del "sistema de quejas" tendría la característica básica de entregarle a la comunidad la representatividad que

ella decida aceptar en la medida que sienta la necesidad de exigir la correcta aplicación y el cumplimiento de la ley de los SPD. Nuestra idea es que esos mismos usuarios elijan, con los mecanismos diseñados por ellos mismos, al vocal de control de los servicios públicos, cuya función será recibir esas quejas de sus "proderdantes" y transmitir las a las empresas de SPD y a la Superintendencia: la primera tendrá la obligación de contestar y atender al vocal de control y la segunda deberá hacer seguimiento de las quejas y las respuestas que las empresas den al respecto para conceder en consecuencia. En tal sentido, la Superintendencia definiría instrumentos de control de gestión sobre este instrumento de participación ciudadana.

## VI. LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

*Por* regla general, sólo las empresas destinadas a la prestación de uno de los servicios previamente enumerados, ya se trate de empresas públicas, privadas o mixtas y todas ellas quedarán sometidas al mismo régimen, con el fin de colocarlas en condiciones de igualdad.

Tres son las principales excepciones a la regla general:

6.1. Los municipios podrán prestar directamente el servicio, sin necesidad de constituir empresa independiente o entidad pública indirecta. Aunque la ley apunta a hacer de este caso la excepción, la verdad es que tal situación podría exigirse en la práctica en la forma más corriente de prestación de ciertos servicios para la inmensa mayoría de los municipios del país. Ello por cuanto los municipios de menos de veinte o treinta mil habitantes hallarán más expedito prestar ellos mismos los servicios

sin constituir empresa separada y, aunque deberán invitar a los particulares a vincularse a la prestación de los servicios en su localidad, es altamente probable que la escala de prestación de tales servicios o la distancia entre el municipio y los principales centros urbanos, o las peculiares tecnologías adecuadas al pequeño municipio o a las zonas rurales no los haga atractivos para el capital privado.

En caso de que los municipios presten directamente el servicio, quedarán sujetos a los regímenes ordinarios de personal, de contratación y de toma de decisiones que rige para este nivel subnacional. Sin embargo, el sentido de la nueva ley exige que la contabilidad de cada servicio se lleve separadamente de la contabilidad general del municipio; de lo contrario resultará imposible calcular los subsidios que otorgaran los tres niveles principales del Estado (Nación, Departamento, Municipios) o aplicar los controles de gestión y de resultados que la ley prevé, por primera vez en Colombia en lo que toca con el sector público.

6.2. La segunda excepción apunta nuevamente a los pequeños municipios o los municipios predominantemente rurales. Esta excepción parte de la base del reconocimiento de una situación de hecho: muchos de estos municipios cuentan con servicios públicos domiciliarios gestionados por la comunidad organizada. Lo que lleva a su turno a una segunda admisión: en Colombia son múltiples las formas de gestión de los servicios públicos. De allí que no tenga sentido desconocer esta situación de hecho ni destruir los significativos aportes de la autogestión mediante una legislación uniforme que exija requisitos idénticos de constitución, gestión y control a todos los municipios del país. Lo indicado es estimular la ampliación de estos recursos comunitarios y aprender

sobre tecnologías apropiadas y organización empresarial a partir de sus propias formas de gestión. Por ello la ley autoriza la prestación de servicios por parte de las comunidades organizadas en cooperativas, asociaciones, microempresas u otras formas asociativas sin someterlas al régimen común de las empresas de servicios públicos sino respetando para cada una de ellas el régimen propio de la forma organizativa que han adoptado y con la cuál se sienten cómodos sus gestores. Naturalmente, su régimen particular no exime a estas formas asociativas del cumplimiento de las pautas de gestión y resultados que acuerden con ellas el Ministerio del ramo, el departamento o el municipio o los criterios de cobertura, calidad y eficiencia que impongan las comisiones reguladoras o haga cumplir la Superintendencia de Servicios Públicos.

6.3 La tercera excepción la constituyen los casos de autoprovisión de uno de los servicios públicos domiciliarios contemplados en la ley. Son casos generalmente aislados, donde un individuo o una unidad familiar o de consumo optan por autoproveerse de tales servicios. Así sucede frecuentemente con los pioneros que se adentran en las vastas zonas de colonización del país o con fincas y casas-fincas que mantienen su régimen de autosubsistencia a pesar del avance de los límites de las ciudades y de los servicios públicos que se prestan en ellas.

Como lo anota la "exposición de motivos" del proyecto, no ha existido, en la práctica, libertad de entrada al sector de servicios públicos: existe un monopolio oficial que limita la posibilidad de vincular recursos a la prestación de servicios dado que éstos quedan dependientes de las disponibilidades fiscales. Dicho monopolio, al mismo tiempo, ha carecido de incentivos para ser eficiente y ello ocasiona que los usuarios tengan que pagar tarifas innecesariamente altas y recibir servicios de calidad pobre. En consecuencia, la principal víctima del monopolio oficial, cuando éste ha sido ineficiente, ha sido el usuario.

En tal sentido es esencial evitar que existan "dueños de mercados". Aún así en la práctica existe un monopolio de hecho, el Estado debe regularlo y vigilarlo e incluso intervenirlo y liquidarlo, entregando su actividad a terceros, si éste no cumple con su función de manera eficiente.

## VII. LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS

El proyecto pretende conferir, en sus artículos números 130, 131 y 132, un casi ilimitado "paquete" de facultades extraordinarias al señor Presidente de la República con el argumento central de que:

*"...como muchas de las reglas a la que se acaba de aludir son tan novedosas, para poderlas aplicar cabalmente es indispensable modificar aspectos particulares de otros estatutos concebidos para otras épocas y arreglos institucionales. Tal ocurre, por ejemplo, con las normas sobre sociedades, entidades descentralizadas, régimen contractual y procedimientos administrativos. En especial, es preciso regular el período de transición, entre el arreglo institucional que ha tenido el país y el nuevo conjunto de instituciones que han de resultar de esta ley. Pero como las modificaciones no afectan sino al régimen de las empresas de servicios públicos, y como ellas tienen que convertirse en instrumentos del régimen que la ley contiene, pareció inconveniente recargar el texto del proyecto con las normas respectivas y por eso se pide autorización al Congreso para expedirlas por medio de facultades extraordinarias (...)"*

Igualmente, afirma la exposición de motivos al respecto:

*"(...) Para no hacer demasiado largo el proyecto, se solicitan facultades extraordinarias con las cuales pueda el Gobierno, de acuerdo con lo previsto en la ley, modificar la estructura y las*



*funciones de los Ministerios de Minas y Energía, Comunicaciones y Desarrollo; y determinar la estructura y funciones especiales de las comisiones de regulación y de la Superintendencia (...)*".

Por convicción y en virtud de la inmensa responsabilidad que compete al poder legislativo, no somos partidarios de entregar facultades extraordinarias al ejecutivo, mucho menos cuando ellas alcanzan dimensiones casi ilimitadas como las que propone el Proyecto; mucho menos, cuando la Constitución Política -en el numeral 10 de su artículo 150- establece unos procedimientos y requisitos precisos para el otorgamiento de las facultades extraordinarias. Veamos:

*"Artículo 150: Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas, ejerce las siguientes funciones:*

*(...) 10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades, deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara (...)"*.

Analizando detenidamente el artículo 150 de la Constitución Política, se puede fácilmente concluir que las supramencionadas facultades extraordinarias, que se otorgarían en el régimen de los SPD-tal como las propone el Proyecto de Ley número 197 de 1992 en sus artículos 130 y 131-, estarían contraviniendo flagrantemente el procedimiento y los requisitos establecidos constitucionalmente. Por lo tanto, de ser aprobados, estos artículos serían susceptibles de ser demandados, con gran posibilidad de éxito, ante la Corte Constitucional por vicios de procedimiento en su formación.

Al respecto, se incluirán los elementos normativos y legales tipo marco, para desarrollar aquellos temas y materias esenciales que den plena operancia a la ley y que permitan, al Ejecutivo, ejercer cabalmente sus facultades reglamentarias.

## VIII. REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El Proyecto de Ley número 197 de 1992 determina varios niveles, claramente diferenciados, para las tareas de regulación y fiscalización, las cuáles se atribuyen a los "Comités de Desarrollo de los Servicios Públicos" en los municipios, a los ministerios, a las comisiones de regulación, y a la "Superintendencia de servicios públicos domiciliarios", esta última, como mecanismo supremo de vigilancia.

No existe duda que Colombia apenas se asoma tímidamente a un campo tan complejo como el de la regulación, pero donde en el futuro la intervención estatal deberá ampliarse y fortalecerse. En este sentido la estructura y las funciones de las comisiones de regulación aparentan aún un elevado grado de teoricismo. Del éxito que alcancen estas comisiones depende en gran medida el desarrollo futuro de los servicios públicos y por lo tanto corresponde al Gobierno preocuparse por su correcta instrumentación, y por brindarle apoyo continuo.

Lo propio ocurre con la Superintendencia de Servicios Públicos que aparece en la ley con una tarea casi que imposible de cumplir. Basados en el difícil camino recorrido en nuestro país por la Superintendencia de Sociedades Anónimas, hemos

considerado necesario que tanto en el caso de las empresas estatales como en las privadas o mixtas, se institucionalicen e implementen auditorías externas. La experiencia colombiana ha demostrado la dificultad de establecer una vigilancia adecuada a través del sólo instrumento de la Superintendencia. Ello se hace aún más evidente en el caso de los servicios públicos, donde a diferencia del sector financiero, se multiplican enormemente el número de entidades y empresas que deben ser sometidos a ella. La Superintendencia debe entonces dar confiabilidad a la información proveniente de las empresas y en especial a lo relativo a sus normas contables, a sus estados financieros y a la gestión de sus administradores.

La institución de la Revisoría Fiscal, que responde a los accionistas de la empresa no parece ser un instrumento de soporte con la fuerza suficiente para que la Superintendencia lleve a cabo un control que, dado el grado de diversidad del desarrollo institucional de las empresas que prestan servicios públicos en nuestro país, requiere de la instrumentación de planes de desempeño y de la aplicación flexible y selectiva de los mecanismos a disposición de las salas de regulación, especialmente en lo relativo al servicio de acueducto y alcantarillado.

Como complemento de lo anterior, creemos indispensable recalcar la importancia del control interno en las empresas, permitiendo que la Superintendencia obligue y fiscalice su implantación.

## **IX. RÉGIMEN TARIFARIO, SUBSIDIOS Y FINANCIAMIENTO**

Un elemento innovador, para el caso de los SPD, propuesto en el proyecto es la concepción de un régimen tarifario en el que se abre la posibilidad de que las tarifas sean el resultado de las fuerzas del mercado y la competencia. Ello quiere decir que el control previo o la adopción estatal de las tarifas

únicamente operará cuando no existan condiciones de plena competencia: para ello, diferencia entre libertad regulada (visto bueno previo) y la libertad vigilada (informada después de su adopción).

El manejo de las tarifas debe hacerse con la prudencia tal, que pueda asegurarse la continuidad, la calidad y la expansión de los servicios, al tiempo que se protege al usuario para que no se le trasladen ineficiencias generadas en una mala administración. No hay duda que el servicio más caro es aquél que no existe, como lo deben atestiguar a diario muchas regiones colombianas. Además el régimen tarifario debe incorporar criterios de solidaridad y redistribución de ingresos, como lo establece el artículo 367 de la Constitución, de manera que se pueda lograr la ampliación de la cobertura a los más pobres, sin sacrificar la viabilidad económica de las empresas.

En nuestra opinión, los artículos 367 y 368 de nuestra Carta Política dejan abiertas varias posibilidades que no necesariamente obligan a que los subsidios para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los SPD provengan exclusivamente de los presupuestos de la Nación, los departamentos, los municipios o sus entidades descentralizadas.

Creemos que pueden y deben combinarse varios esquemas de subsidios: el originado en los recursos presupuestales de las entidades arriba mencionadas; el otorgado directamente a través del régimen tarifario y manejado por las empresas oferentes de SPD, subsidios y el que se otorgaría por medio de recursos originados en sobretasas aplicadas a los consumos usuarios de los estratos socioeconómicos más altos.

La combinación de estos esquemas, aunado al logro de una mayor eficiencia en el sector, debe permitir al país lograr la financiación adecuada de sus servicios públicos. De esta forma, los estratos altos ayudan a que los estratos bajos puedan pagar sus tarifas, al menos para cubrir el consumo básico y

los recursos presupuestales, de la Nación y departamentos especialmente, deben buscar equilibrar zonas más deprimidas y con menores recursos propios. Por último, la sobretasa creada por el proyecto busca la expansión del servicio a las zonas rurales, la cuál requiere una financiación adecuada si queremos enfrentar pronto este déficit.

## X. ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

En el artículo 102 del Proyecto número 197 de 1992, se propone la posibilidad de que el gobernador del departamento pueda destituir a los alcaldes o el Presidente de la República pueda hacer lo propio con los gobernadores, cuando por culpa u omisión de éstos o aquellos no se haya elaborado o actualizado la estratificación socio-económica de los inmuebles residenciales de los respectivos cascos urbanos municipales. Esta drástica, pero políticamente riesgosa y complicada medida será impracticable si la misma ley no determina los procedimientos y las circunstancias en que sería viable la eventual destitución. Bajo la actual propuesta, creemos que se prestaría para abusos de autoridad e interpretaciones acomodadas de la ley.

Por lo tanto proponemos eliminar las destituciones y establecer sanciones para las faltas mencionadas.

Como un mecanismo de control a los posibles excesos o interpretaciones acomodadas, la ley debe desarrollar, además, lo preceptuado en el último inciso del artículo 314 de la Constitución Política:

*"(...) El Presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley,*

*suspenderán o destituirán a los alcaldes. La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esa atribución (...)"*

## XI. SERVICIOS PÚBLICOS EN PARTICULAR

Consideramos los ponentes que es razonable la petición del Ejecutivo, en el sentido de que se le autorice, -mas no, como propone el proyecto en su artículo 132, se le faculte- para que se pueda disponer de un régimen unificado en esta materia de los servicios públicos y los servicios públicos domiciliarios, así como unos principios comunes de interpretación; por eso, con algunas modificaciones se otorgaría una autorización para integrar y publicar, en un solo texto de numeración continua, en un solo decreto que desarrolle la recopilación de todas las normas que finalmente se expidan sobre los SP, incluyendo la presente ley, las que expida el Congreso sobre los SPD a partir de 1992 y hasta el 31 de diciembre del año en que la presente ley entre en vigencia.

## XII. CONSIDERACIONES FINALES

El esfuerzo conjunto realizado por el Gobierno, las agremiaciones y quiénes hemos recibido la responsabilidad de estudiar el Proyecto de ley número 167 de 1992, estamos seguros, será significativa y substancialmente enriquecido en nuestras discusiones, tanto al interior de la Comisión Sexta Constitucional como de las sesiones plenarias del Senado. Para ello, queremos invocar una frase de uno de los forjadores de la economía moderna, Adam Smith,

quién fuera citado por J. Vickers y G. Yarrow en su obra "Un análisis económico de la privatización". En efecto, sobre una propuesta que él mismo hiciera para que la Corona Inglesa vendiera, a los labriegos privados, las tierras que eran de propiedad de aquella en 1776, Smith anotaba en la "Riqueza de las naciones": "(...) El monopolio, además, es un gran enemigo de la buena administración, misma que jamás podrá establecerse universalmente si no es como resultado de esa competencia libre y universal que obliga a todos a recurrir a ella en aras de su propia

defensa (...)"

Solicitamos al señor Presidente de la Comisión Sexta del honorable Senado de la República, se ordene la tramitación de la presente iniciativa y que, en consecuencia, se le dé primer debate al Proyecto de ley de régimen de los servicios públicos domiciliarios, con las modificaciones que estamos presentando con esta exposición de motivos, en pliego separado, en la forma indicada por el Reglamento del Congreso y la Constitución Política Colombiana.

Atentamente,

JAIME RODRIGO VARGAS SUÁREZ

JAIME RUIZ LLANO

*Senadores de la República.*

## PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE <sup>2</sup>

**D**esde la pasada legislatura, cuando un proyecto con el mismo propósito fué entregado a nuestra Comisión VI bajo el número 035 de 1992, - con la inmensa responsabilidad que ello conllevaba, por las implicaciones y alcances de un tema con tan múltiples dimensiones y efectos- comenzamos un árduo y complicado proceso de intercambio de ideas con los sectores del gobierno, en especial el DNP, directamente involucrados y más interesados en el proyecto; con los gremios profesionales, como Acodal, las Asociaciones de Ingenieros de las diversas especialidades; con los representantes de las Empresas que prestan diversos Servicios Públicos en varias regiones, incluidos los empresarios privados que prestan el servicio público del gas combustible; con diversos usuarios de los servicios; con empresarios potencialmente interesados en convertirse en inversionistas de los servicios públicos domiciliarios -SPD-; en fin, llevamos a cabo un verdadero, interesante y productivo proceso que condujo al gobierno nacional al proyecto de Ley que, bajo el número 197 de 1992, fué a nuestra consideración.

Decíamos en la ponencia para primer debate que existían antecedentes que llevan a la necesidad de una Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Entre ellos, la pérdida de credibilidad de nuestras instituciones frente a la deficiente prestación de los servicios, la profunda crisis financiera y gerencial que enfrenta el sector, y el inmenso costo que la deficiente prestación de los servicios ha tenido sobre la producción y la imposibilidad de generar en estas circunstancias un desarrollo sostenido. Es decir, el modelo actual de prestación de servicios públicos entró en crisis.

La crisis combina elementos de incapacidad de planeamiento, deficiencia administrativa, restricción de mercados y estructura tarifaria. Frente a ella, la inyección de nuevos recursos, vía presupuesto o tarifas en las actuales condiciones, se constituye en un costo muy grande para la sociedad; por otro lado, la simple aplicación de disciplina fiscal afecta primero las nuevas inversiones y el mantenimiento, como ya ocurrió en el sector eléctrico y torna muy vulnerable el sistema.

---

<sup>2</sup> Gaceta del Congreso, Año II - N° 220, sábado 19 de junio de 1993

No existen soluciones mágicas para reestructurar el sector. Por razones todavía difíciles de establecer, privatización y descentralización se convirtieron en muchos países en fines en sí mismos. Tan ardua y compleja era la tarea de llevarlas a cabo que se perdió de vista el objetivo final del logro de la eficiencia.

Privatización se hizo libremente equivalente, cuando no idéntica a mercado, competitividad y eficiencia; descentralización se equiparó gratuitamente con adecuación a las demandas de los usuarios y asignación de recursos según las preferencias ciudadanas.

Esto limitó la aplicación de reformas organizacionales en el Estado y por el contrario impulsó su ineficiencia, no permitiéndole atraer el elemento humano necesario para cumplir su tarea. Tampoco se exploraron caminos conjuntos, que permitiesen al sector público fortalecer su capacidad de gestión y de atraer recursos privados al sector. Estos caminos conjuntos se encuentran limitados nuevamente por la estructura misma del sector público.

Se requiere entonces una gran reestructuración organizacional. Los enormes sobrecostos del sector se encuentran en las malas decisiones de inversión, donde por razones políticas no se escogen los proyectos más rentables; en la pésima capacidad de contratación, que termina produciendo inmensos sobrecostos tanto en el contrato mismo como en su ejecución. En su incapacidad operativa, que se refleja en una baja productividad y grandes pérdidas negras, además de un mal servicio al usuario.

El proyecto plantea elementos interesantes de esta reestructuración: En la práctica, no todas las empresas adolecen del mismo grado de ineficiencia, y por lo tanto el proyecto le permite a las empresas públicas una reestructuración al interior, es decir, la aplicación de un modelo de gestión que remueva las trabas que han incidido en la ineficiencia. Además, se plantea la eliminación de la restricción de los mercados, la vinculación del sector privado tanto a

través de recursos de inversión como a través de contratos de gestión con las empresas públicas, el reordenamiento de las tarifas y los subsidios, y el fortalecimiento y separación de las funciones de regulación y control y vigilancia.

Se requiere además la reestructuración financiera de las empresas. El proyecto da condiciones para el saneamiento de las empresas utilizando mecanismos financieros para asumir las pérdidas patrimoniales del pasado. Es claro que el país requiere de unas empresas más sólidas que puedan acometer las grandes inversiones que requiere el sector en el futuro, aprovechando las economías de escala. La empresa municipal, tal como la conocíamos, no será viable en el futuro.

#### **EL PROPÓSITO CENTRAL DE ESTA LEY**

Vistas las anteriores consideraciones resulta fácil deducir el propósito central de esta Ley: Estimular formas de gestión que, por hallarse supeditadas a las preferencias de los usuarios, aseguren la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Tratándose de los servicios públicos domiciliarios, la eficacia dice relación con el cumplimiento de las metas trazadas en materia de cobertura y calidad. La eficiencia toca con la relación entre los costos sociales y los beneficios alcanzados.

La Ley busca crear las vías institucionales que lleven al florecimiento de formas de gestión capaces de incorporar los mejores recursos públicos y privados disponibles para la prestación de los servicios públicos domiciliarios en una localidad o en varias localidades. Es una Ley para el desarrollo institucional, no para la limitación de éste;

La Ley no se casa entonces con la privatización; ella será conveniente cuando conduzca realmente a mayor eficacia y eficiencia. La Ley se casa únicamente con el control de los usuarios y éste

podrá ejercerse, bien por vías de mercado, cuando hubiere condiciones de competencia; bien por vías de expresión no monetarias de las preferencias de los usuarios, cuando no hubiere condiciones de competencia.

En uno y otro caso, los usuarios de menores ingresos deberán ser provistos de la capacidad de pago necesaria para sufragar los precios de los servicios mínimos indispensables.

Tampoco se casa la Ley con la centralización ni con la autonomía local extremas. Desde el punto de vista del gasto, las relaciones intergubernamentales son convenientes y necesarias para fines de la coordinación, la asistencia técnica y gerencial, la supervisión, la información, la búsqueda de economías de escala, los planes de desempeño y los controles de gestión y resultados. Esas mismas relaciones son indispensables, desde el punto de vista de los ingresos públicos, para la adecuada financiación de los niveles subnacionales en vista de las limitaciones estructurales de las bases imponibles manejadas autónomamente en estos niveles, para el estímulo al esfuerzo fiscal propio y para la armonización y hasta la cogestión de los impuestos, tasas y contribuciones. De manera que la autonomía absoluta de cada nivel es, como lo hallaron los brasileños después de la Constitución Municipalista de 1988, una entelequia que conduce al desorden y la ineficiencia.

Del otro lado de la moneda, la centralización extrema anula la proximidad de los usuarios al servicio y, por ende, la posibilidad de participación y de control por parte de éstos en la mayor parte de los servicios públicos domiciliarios.

La Ley parte de la premisa del respeto a la soberanía del beneficiario (consumidor, demandante, usuario) de los servicios públicos domiciliarios. El respeto a tal soberanía apela entonces a una interacción entre los distintos niveles de gobierno de suerte que se dé un balance equilibrado entre las manifestaciones de soberanía que son mejor identificadas y reconocidas en el plano local, las que solo

pueden serlo en el orden regional y aquellas que requieren de la orientación y la consagración en el orden nacional.

#### PROPÓSITOS COMPLEMENTARIOS DE LA LEY

Además de imprimir eficacia y eficiencia a los servicios públicos domiciliarios, la Ley busca facilitar la vinculación de capitales privados con el fin de allegar nuevos recursos, tanto financieros como administrativos a estos servicios. Se parte de la premisa de la insuficiencia de los recursos actuales para promover adecuadamente los servicios. Al mismo tiempo, se establecen modalidades y regulaciones de gestión a las cuales deben someterse los capitales particulares (como también los públicos) con el fin de alcanzar la eficiencia mediante el control del mercado o de expresiones de preferencia sustitutivas del mercado.

La Ley consagra el carácter esencial de los servicios públicos domiciliarios. De este carácter nace el deber de intervención del Estado previsto en la Constitución del 1991. La Ley puntualiza entonces los objetivos que el Estado debe buscar y las prioridades que deben observar en el ejercicio de esta intervención.

Esta Ley constituye un ejercicio pionero en nuestro país en materia de normas de contenido administrativo. No se trata ya de ordenar que se haga sino de entender las implicaciones políticas y económicas de las distintas modalidades administrativas, tomar partido por unas u otras, crear efectivamente las condiciones para que ellas se den y asegurar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la norma. La Ley es, en consecuencia, un primer ejemplo que intenta dar al desarrollo organizacional público, y a las relaciones de éste con sus semejantes en el sector privado, todo el peso y la jerarquía que tiene dentro del concurso de los instrumentos para el desarrollo económico y político de los pueblos.

La Ley apunta a desarrollar, efectivamente los mecanismos indispensables para la aplicación del control de gestión y del control de resultados de que hablan la carta del 91 y la Ley de Control Fiscal aprobada por el Congreso el pasado mes de diciembre. Esos controles no operan por decreto; están íntimamente ligados a la concepción contemporánea de la gerencia y de la organización y requieren de ellas para encontrar terreno fértil para su aplicación. No puede aplicarse control de gestión donde no existen, por ejemplo, responsabilidades individuales claramente delimitadas, lo que supone a su vez un plan de operaciones y un plan de desempeño. Tampoco cabe aplicar controles de resultados cuando no se han identificado metas acordes con la misión institucional y se han reflejado tales metas, de manera clara y transparente, en el presupuesto de la organización. De donde se colige que la aplicación real de los controles de gestión y resultados presupone una reforma de las organizaciones públicas en los campos de la planeación, la información, la presupuestación, la responsabilidad de los individuos y los grupos de individuos, la coordinación entre ellos, etc.

Esta Ley desarrolla también el concepto de participación ciudadana establecido en la Constitución del 91. Existen ya suficientes canales de participación representativa: las juntas administradoras locales, los Consejos, las Asambleas y el Congreso. La participación en la base debe ser más autónoma y dinámica, responder a las necesidades cambiantes de la comunidad. Por ello la Ley permite una total autonomía de organización a la comunidad y establece el

canal a través del cual ésta participa en la gestión y fiscalización de las Empresas. La Ley también responsabiliza a las autoridades de la instrumentación de esta participación.

En la discusión en la Comisión sexta se presentaron algunas modificaciones centradas principalmente alrededor de la tributación de las empresas de servicios públicos, propuestas que fueron concertadas con el Ministerio de Hacienda y que se encuentran consignadas en los numerales 24.3, 24.4 y 24.5 del artículo 24. Ellas contienen un régimen tributario especial para el sector en razón del subdesarrollo en que éste se encuentra aún sumido. Igualmente la Comisión decidió aumentar a siete años el período de transición para la aplicación del criterio de solidaridad en el régimen tarifario, aunque se negó una solicitud para que pudiesen utilizarse recursos del crédito por parte de la Nación y de las entidades territoriales para atender subsidios.

Se fortaleció igualmente la responsabilidad de las empresas frente a los usuarios obligando a éstas a responder por los perjuicios que les causen y exigiéndoles información periódica sobre la utilización de los subsidios que les fueron entregados para los usuarios de menores ingresos.

Solicitamos al Señor Presidente del Honorable Senado de la República, se ordene la tramitación de la presente iniciativa y que, en consecuencia, se le dé segundo debate al Proyecto de Ley de Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios.

Atentamente,

JAIME RODRIGO VARGAS SÚAREZ

JAIME RUIZ LLANO

*Senadores de la República*



# Cámara de Representantes

## PONENCIA PARA PRIMER DEBATE<sup>1</sup>

**S**iguendo el mandato constitucional consignado en el Título XII, Capítulo V de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración de la Honorable Cámara de Representantes, ponencia favorable al Proyecto de Ley 197/92 Senado, 183/93 Cámara, «Por la cual se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones».

El tema de los servicios públicos ha estado en el centro del debate nacional. La calidad de la vida, la salubridad pública y en últimas el logro de un desarrollo económico con rostro humano, no pueden lograrse sin una disponibilidad adecuada de servicios públicos para toda la población.

Los servicios públicos domiciliarios son una categoría especial dentro de la gama de los servicios públicos. El agua potable, el saneamiento básico, la energía eléctrica, el gas combustible y las telecomunicaciones atienden necesidades básicas de la población y garantizan la vinculación del país a la gran corriente del desarrollo mundial. No puede concebirse un país desarrollado que no garantice para sus habitantes un suministro mínimo de agua potable, que no tenga un nivel adecuado de saneamiento y eliminación de residuos, que no facilite la tarea diaria de los hogares mediante el ofrecimiento eficiente y económico de energía y gas y que aisle a su población de los últimos avances en telecomunicaciones.

<sup>1</sup> Gaceta del Congreso. Año III - N° 57, lunes 23 de mayo de 1994

Colombia posee todavía notables deficiencias en la cobertura y el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento básico, especialmente en el área rural. Coberturas del 24% en agua potable y del 8% en alcantarillado para zonas rurales son un índice muy bajo para el promedio latinoamericano.

El país viene asignando recursos presupuestales importantes para financiar la expansión de coberturas y mejorar la calidad de estos servicios. Igualmente, uno de los mayores logros de la descentralización ha sido el de desplazar la responsabilidad por la inversión y la gestión de estos servicios a los municipios y departamentos como entes coordinadores. Si bien falta reforzar el esfuerzo financiero en los entes territoriales, muchas veces se ha constatado falta de diligencia de las autoridades locales para ejecutar los recursos, para canalizar las opciones de cofinanciación hacia nuevos proyectos en las localidades, para centrar las prioridades de la

inversión municipal y departamental en esta área del agua potable y el saneamiento.

Concientes de esta responsabilidad ante el futuro de Colombia, entregamos a la Comisión ponencia favorable al Proyecto de Ley 183. Hemos adelantado una revisión cuidadosa de la propuesta aprobada por la plenaria del Senado y vimos pertinente introducir algunas modificaciones de fondo y de forma, siempre con la pretensión de lograr una ley que recoja los anhelos del país en materia de servicios públicos. Ante todo se pretende lograr unificación de criterios y asimilar un régimen general para todos los servicios.

Por todo lo anterior, nos permitimos proponer a la Comisión Sexta de la Honorable Cámara de Representantes, dar primer debate al Proyecto de Ley número 197 de 1992 Senado, 183 de 1993 Cámara, "por el cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones".

JULIO BAHAMÓN VANEGAS

MARTHA CATALINA DANIELS GUZMAN

PEDRO VICENTE LÓPEZ NIETO

JOSÉ FERNANDO CASTRO CAYCEDO

FERNANDO PISCIOTTI VAN-STRAHLEN

JAIME NAVARRO WOLF

ALFREDO CUELLO DÁVILA

*Representantes*

## PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE<sup>2</sup>

**S**iguiendo el mandato constitucional consignado en el Título XII, Capítulo V de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración de la Honorable Cámara de Representantes, ponencia favorable al Proyecto de Ley 197/92 Senado, 183/93 Cámara, «Por la cual se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones».

El tema de los servicios públicos ha estado en el centro del debate nacional. La calidad de la vida, la salubridad pública y en últimas el logro de un desarrollo económico con rostro humano, no pueden lograrse sin una disponibilidad adecuada de servicios públicos para toda la población.

Los servicios públicos domiciliarios son una categoría especial dentro de la gama de los servicios públicos. El agua potable, el saneamiento básico, la energía eléctrica, el gas combustible y las telecomunicaciones atienden necesidades básicas de la población y garantizan la vinculación del país a la gran corriente del desarrollo mundial. No puede concebirse un país desarrollado que no garantice para sus habitantes un suministro mínimo de agua potable, que no tenga un nivel adecuado de saneamiento y eliminación de residuos, que no facilite la tarea diaria de los hogares mediante el ofrecimiento eficiente y económico de energía y gas y que aisle a su población de los últimos avances en telecomunicaciones.

---

<sup>2</sup> Gaceta del Congreso. Año III - N° 61, viernes 27 de mayo de 1994

Colombia posee todavía notables deficiencias en la cobertura y el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento básico, especialmente en el área rural. Coberturas del 24% en agua potable y del 8% en alcantarillado para zonas rurales son un índice muy bajo para el promedio latinoamericano.

El país viene asignando recursos presupuestales importantes para financiar la expansión de coberturas y mejorar la calidad de estos servicios. Igualmente, uno de los mayores logros de la descentralización ha sido el de desplazar la responsabilidad por la inversión y la gestión de estos servicios a los municipios y departamentos como entes coordinadores. Si bien falta reforzar el esfuerzo financiero en los entes territoriales, muchas veces se ha constatado falta de diligencia de las autoridades locales para ejecutar los recursos, para canalizar las opciones de cofinanciación hacia nuevos proyectos en las localidades, para centrar las prioridades de la inversión municipal y departamental en esta área del agua potable y el saneamiento.

Concientes de esta responsabilidad ante el futuro de Colombia, la Comisión VI de la Cámara

estudió y debatió juiciosamente el Proyecto de Ley 197/92 Senado, 183/94 Cámara, incluyendo algunas modificaciones de fondo y forma que agregan solidez y armonía al proyecto aprobado por el Senado, pero siempre animados con la pretensión de contar con una Ley que recoja los anhelos del país en materia de servicios públicos. Ante todo se busca lograr unificación de criterios y asimilar un régimen general para todos los servicios. Se entrega a consideración de la Honorable Cámara de Representantes el Proyecto aprobado por la Comisión VI de la Cámara incluyendo algunas modificaciones con el fin de corregir imprecisiones de técnica jurídica y errores gramaticales que infortunadamente no fueron detectados en el primer debate. Al pasarse en limpio la Ley se encontraron incongruencias de carácter técnico y gramatical que nos permitimos remediar en nuestra condición de ponentes, presentando un pequeño pliego de modificaciones a la plenaria para tratar de perfeccionar hasta el máximo el texto final y hacerlo congruente y de fácil aplicación. Proponemos, entonces, a la Honorable Cámara dar segundo debate al proyecto aprobado por la Comisión pero con las modificaciones que se exponen a continuación\*.

JULIO BAHAMÓN VANEGAS

MARTHA CATALINA DANIELS GUZMAN

PEDRO VICENTE LÓPEZ NIETO

JOSÉ FERNANDO CASTRO CAYCEDO

FERNANDO PISCIOTTI VAN-STRAHLEN

JAIME NAVARRO WOLF

ALFREDO CUELLO DÁVILA

*Representantes*

\* Las modificaciones expuestas fueron recogidas en el texto definitivo de la Ley.

---

# Exposición de motivos<sup>1</sup>

---

*Señor Presidente del Senado*

*Honorables Senadores*

*En cumplimiento del artículo transitorio 48 de la Constitución Política, con todo respeto presento a consideración del Congreso por conducta del Senado de la República, el Proyecto de Ley por el cual se regulan los temas a los que se refiere la norma citada.*

---

## ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES GENERALES

---

**E**s tanta la importancia que tiene para los colombianos el tema de los servicios públicos domiciliarios, que nuestros constituyentes del año 1991 resolvieron dedicarle todo un capítulo de la carta.

Los constituyentes reconocieron, con ello, tres hechos innegables: primero que la calidad de vida y los niveles de salud dependen, en alto grado, del acceso que las personas tengan a los servicios públicos. Segundo, que para mejorar la productivi-

dad y, por lo tanto, la remuneración de los trabajadores y empresarios colombianos y su posibilidad de competir en el mundo de la apertura, es indispensable que tengan servicios adecuados producidos en forma eficiente. Y tercero que por las razones anteriores, el Estado colombiano dedica la mayor parte de su presupuesto de inversión y de los recursos de crédito que obtiene, a proyectos destinados a los servicios públicos, en el campo de agua potable, del saneamiento ambiental, de la generación y distribución de energía y de telecomunicaciones.

Los servicios públicos atienden necesidades básicas de la población e influyen en forma definitiva en su bienestar y en la salud pública. La cobertura y

---

<sup>1</sup> Gaceta del congreso, año 1 - N° 162, martes 17 de noviembre de 1992

calidad de los servicios son indicadores del nivel de vida de una nación. El acceso masivo a los servicios básicos constituye un factor fundamental en el proceso económico y social de cualquier país.

Sin embargo, ¿cómo financiar la expansión de coberturas? ¿Cómo suministrar el servicio a toda la población, teniendo en cuenta su capacidad económica? ¿Quiénes deben pagar el costo de los servicios? ¿Se debe subsidiar a todos los consumidores? ¿Sólo se debe subsidiar a los pobres? ¿Cual sería el papel de los impuestos en la financiación de los servicios básicos? ¿Cómo mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios? ¿Cómo erradicar prácticas que evitan el manejo de los servicios con criterios de eficiencia, calidad y bajo costo?

Estos son algunos de los interrogantes que sintetizan los problemas más comunes de los servicios públicos en Colombia. Los preceptos contenidos en la Carta Constitucional señalan de manera precisa los derroteros para solucionarlos.

La financiación de la inversión en expansión de cobertura y el cubrimiento de los costos de operación y mantenimiento de los servicios, es uno de los temas cruciales en servicios públicos. Adicionalmente, la capacidad de pago de los distintos grupos de usuarios es

un elemento importante para decidir la forma que asume la financiación y la posibilidad de cubrir los costos asociados.

En los países pobres existen generalmente fuertes diferencias en la distribución del ingreso que se convierten en obstáculos para garantizar la

extensión de los servicios a los estratos más bajos de la población. Por ello, esos grupos no pueden cubrir el costo pleno de los servicios. De ahí la necesidad de plantear esquemas de subsidios que tengan en cuenta la escasa capacidad de pago de los más pobres.

Por otra parte, el país vive un proceso de consolidación del sistema de descentralización, por medio del cual se están transfiriendo una serie de funciones del nivel central a los entes territoriales. Se hace necesario repensar el esquema de regulación y manejo de los servicios en el nuevo escenario de la autonomía regional y municipal.

Es preciso reconocer que existen casos elocuentes de eficiencia y seriedad, pero es innegable que muchas empresas de servicios públicos acusan niveles intolerables de ineficiencia, costos operacionales desbordados, fallas protuberantes de gestión e interferencias ajenas a un manejo empresarial profesional. Se precisan soluciones de fondo en la gestión de las empresas si se quiere garantizar una oferta adecuada de servicios, mantener y mejorar los niveles de calidad y de paso garantizar costos bajos en el suministro.

En síntesis, el desafío actual consiste en diseñar mecanismos que hagan compatible el logro simultáneo de varios objetivos:

- Ampliación de las coberturas en servicios, especialmente deficitarios en algunas áreas como la de Saneamiento Básico y con bajo cubrimiento en los sectores más pobres de la población.
- Continuidad de su financiación, destinando recursos para inversión y así cumplir el objetivo prioritario de mejoramiento en coberturas.
- Avance del proceso de descentralización y la autonomía municipal en la prestación de algunos servicios.
- Mejoramiento de la gestión de las entidades que prestan el servicio.

El Proyecto de Ley de Servicios Públicos realiza un desarrollo integral de los preceptos consignados en la Carta Constitucional. El nuevo Régimen de Servicios Públicos abre un camino promisorio para el logro de los objetivos arriba mencionados, precisando igualmente la relación del sector de Servicios Públicos con el Estado.

La norma constitucional exige que los nuevos desarrollos legales, hagan precisión en torno a los fines y alcances de la intervención del Estado en el sector de servicios públicos, así como también, los límites de tal intervención en relación al principio de libertad económica consagrado en el artículo 150, numeral 21 de la Constitución.

## Servicios Públicos: Cobertura, Financiación y Distribución del Ingreso

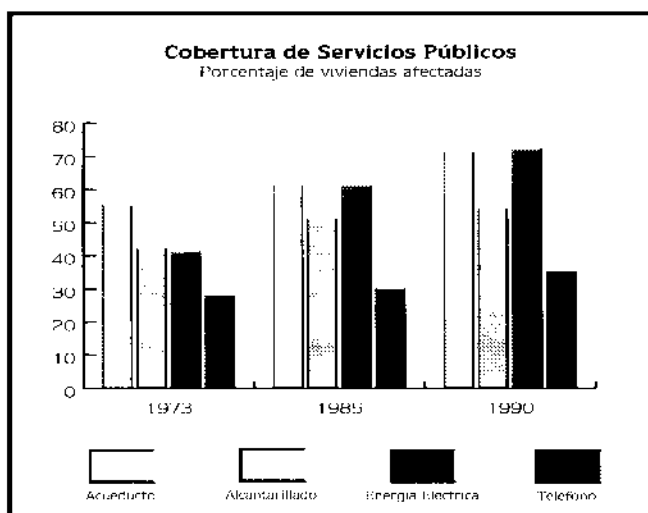
### LA EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN COLOMBIA

#### *Los Logros del Pasado*

El esfuerzo nacional para mejorar la cobertura de los servicios públicos domiciliarios a lo largo de los últimos decenios ha sido muy significativo pero no es suficiente. Son necesarias grandes inversiones en los próximos años para que los grupos más pobres tengan acceso a los servicios básicos.

En 1938, 35 de cada 100 hogares urbanos disponían del servicio de energía, acueducto y alcantarillado, en ese año no existían acueductos rurales, 47 años después, en 1985, el 88% de hogares urbanos contaba con los tres servicios y la cobertura rural llegaba al 23% de las familias.

FIGURA 1



Durante este período, las ciudades mejoraron el equipamiento en los tres servicios a una tasa promedio del 6% anual. Así mismo, la expansión de la cobertura en los últimos años ha sido desigual según el servicio, siendo energía el de mayor desarrollo comparativo, ya que la electrificación en el campo se hizo con crecimientos promedios anuales del 13%, y como contraste, acueducto lo hizo sólo a un 3.7% anual, tasa menor que el crecimiento de la economía. La *figura N°1* muestra la evolución de las coberturas por los diferentes servicios en los años 1973, 1985 y 1990.

Igualmente, ha existido una gran diferencia en el desarrollo de cada servicio en el campo y en la ciudad. En forma preocupante, los servicios de Saneamiento Básico han tenido un crecimiento extremadamente lento de su cobertura y más aún si se consideran parámetros de potabilidad y disposición adecuada de desechos.

Colombia mantiene niveles inferiores al 24% en cobertura rural en agua potable; sólo un 8% dispone de alcantarillado. Son coberturas muy bajas si se tiene en cuenta que Brasil, país con visibles carencias en materia social y de servicios, cubre más del 47% de su población rural.

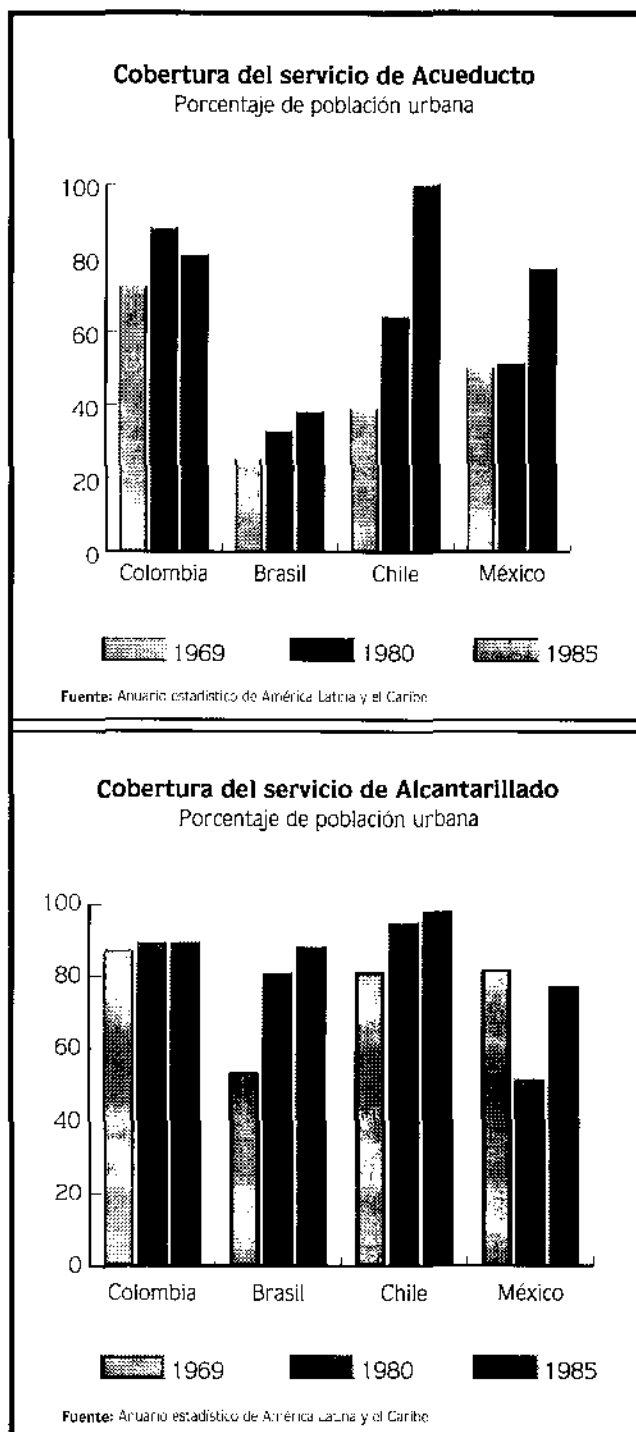
Como contraste, las tres mayores ciudades (Santafé de Bogotá, Cali y Medellín) alcanzan una cobertura cercana al 94%, con una adecuada calidad y frecuencia del agua consumida y con acceso a un sistema de alcantarillado para el 87% de la población<sup>(2)</sup>. Ciudades intermedias tienen niveles de cubrimiento inferiores al 62%.

Colombia cuenta con niveles comparables a los de México y Chile y superiores sólo a los del Brasil, tal como lo evidencia la *figura N° 2*. No debe desconocerse, sin embargo, que Colombia mantiene todavía rezagos en estos servicios aún con respecto a patrones internacionales. De acuerdo con su ingreso per-cápita, debería contar con coberturas nacionales de por lo menos 73% en agua potable y 55% en alcantarillado. Además, muchos de los acueductos existentes padecen de fallas graves de funcionamiento y la mitad de las ciudades colombianas suministran agua que no cumple con los requisitos mínimos de potabilidad.

La mayoría de sistemas de alcantarillado, tienen deficiencias en el manejo de residuos, desechos y control de sustancias nocivas para el medio ambiente.

El servicio de Aseo, demuestra notorias deficiencias si se tiene en cuenta que sólo el 43% de las cabeceras municipales cuentan con el servicio de recolección. Un 32% de las basuras es dispuesta sanitariamente y 34% de un total de 1012 municipios han organizado empresas de aseo. El resto de

FIGURA 2



(2) *La Revolución Pacífica, Plan de Desarrollo Económico y Social, 1990-1994.*



FIGURA 3

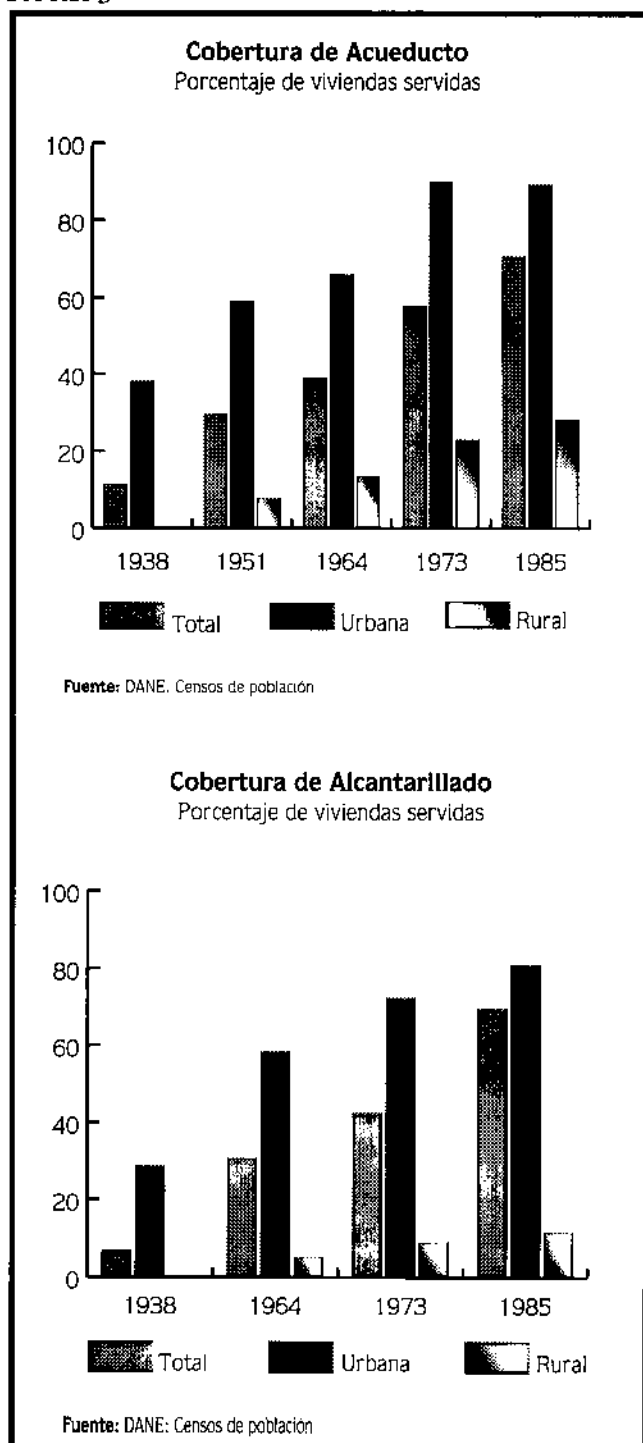
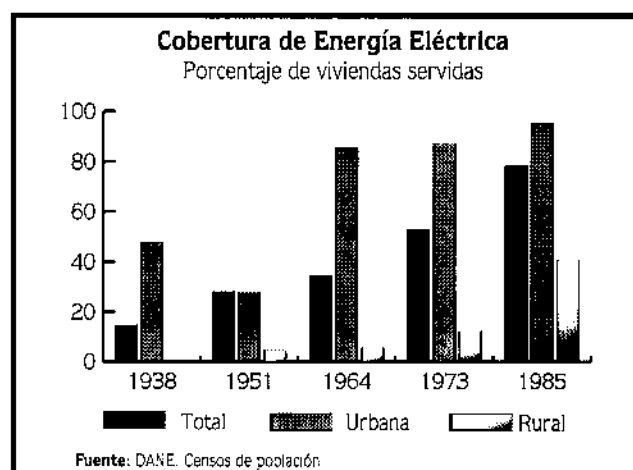


FIGURA 4



jurisdicciones realizan recolección de desechos directamente a través de oficinas pertenecientes a las alcaldías, sin contar con presupuesto independiente ni equipo adecuado. La mayoría de las poblaciones colombianas no cobran el servicio a los usuarios y éste es financiado con recursos provenientes de ingresos fiscales de los municipios que bien podrían ser destinados a otros usos de gran prioridad social.

En el campo de las telecomunicaciones, 7.6 colombianos de cada 100 tenían teléfono en 1987, cuando el promedio para Latinoamérica era de 5.2 aparatos por cada 100 habitantes. Así mismo, el sector tuvo una tasa promedio de crecimiento del 5.7% para el período 71-88. Si bien el país, está por encima de Latinoamérica, Asia y Africa, tiene todavía un trayecto por recorrer en telefonía básica para equiparar coberturas promedio de 40 líneas por cada 100 habitantes, usuales en países altamente desarrollados de Europa, Japón y Norteamérica. La figura N° 3 compara diversas densidades según países y regiones.

En 1938, 48 de cada 100 hogares urbanos disponían de electricidad y no existía cobertura rural. En 1985, el 95% de los hogares urbanos y el 41% de los rurales ya contaban con electricidad. Véase figura N° 4. Considerando el nivel de electri-

ficación alcanzado por otros países de Latinoamérica, Colombia, demuestra niveles intermedios, semejantes a los de Chile, Brasil y Ecuador, quienes exhiben coberturas promedio cercanas al 80%. Venezuela, Uruguay y Argentina son los países Latinoamericanos con mayor electrificación, con coberturas superiores al 90%.

#### *Los retos del futuro*

A pesar de los logros de años anteriores, el país debe realizar todavía grandes esfuerzos para ampliar las coberturas a los grupos más pobres de la población y para apoyar el crecimiento de una economía dinámica, vinculada al mercado mundial. Esta tarea implica movilizar recursos econó-

micos cuantiosos.

El Plan de Desarrollo propone llegar a porcentajes de cobertura de Acueducto de 76% y en Alcantarillado, al 57% para 1994. En términos de personas atendidas estos esfuerzos implican pasar de 21.8 millones en 1990 a 27 millones en 1994 para acueducto y de 16.9 millones a 20.3 millones en 1994 para alcantarillado. Ciudades tan importantes como Tunja, Villavicencio, Pasto, Barranquilla, Cúcuta y Riohacha, tienen hoy servicios deficientes. Adicionalmente, es necesario mejorar sustancialmente la potabilidad del agua en un 50% de los acueductos del país. Algunas empresas de Acueducto presentan notorias deficiencias en la gestión operativa y administrativa. El siguiente cuadro ilustra los significativos niveles de pérdidas de agua potable y el número alto de trabajadores por cada mil usuarios en algunas empresas del país.

|                     | Pérdidas Agua<br>% | Trabajadores<br>x 1000 Usuarios |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Bogotá</b>       | <b>40.0</b>        | <b>4.0</b>                      |
| <b>Bucaramanga</b>  | <b>30.0</b>        | <b>4.5</b>                      |
| <b>Manizales</b>    | <b>30.0</b>        | <b>5.0</b>                      |
| <b>Barranquilla</b> | <b>50.0</b>        | <b>14.0</b>                     |
| <b>Honda</b>        | <b>30.0</b>        | <b>12.0</b>                     |
| <b>Recomendado</b>  | <b>25.0</b>        | <b>3.0</b>                      |

Para atender las necesidades que plantea el desarrollo económico, las comunicaciones son una condición importante. Existen déficits notorios en telefonía básica en varias ciudades colombianas. Ibagué ve peligrar su programa de incentivos tributarios para atraer nuevas industrias por la demora en poner en marcha la instalación de 30.000 nuevas líneas telefónicas en los próximos cuatro años; las tres primeras ciudades de la Costa Atlántica requieren una expansión telefónica de más de 80.000 líneas.

Poblaciones intermedias como Armenia, Buga, Bucaramanga, deben acelerar sus programas de telefonía básica si quieren ser partícipes de las nuevas oportunidades que les abre el desarrollo. El costo involucrado en la expansión telefónica es alto si se tiene en cuenta que la instalación de una línea de teléfonos costaba en 1990 US \$750 / usuario para las grandes telefónicas y US \$1.300 / usuario para las pequeñas.

El cumplimiento de metas de inversión para todo el país supone instalar en el próximo cuatrienio, 1.6 millones de nuevas líneas, es decir un incremento del 55% en las líneas instaladas con un valor estimado de US \$1.100 millones.

Se estima que el tamaño de la economía colombiana se duplicará en los próximos quince años.

Una oferta adecuada de energéticos es condición indispensable para un desarrollo económico sostenido. Dentro de un planeamiento integral de la energía, es necesario un esfuerzo de inversión bastante importante en el desarrollo de energéticos sustitutos de la electricidad. Son necesarios más de \$2.235 millones de dólares en inversiones para garantizar suministros de gas domiciliario durante los próximos 20 años. El gas natural es una alternativa si se quiere orientar la demanda residencial por energía hacia el uso del gas, combustible comparativamente más económico que la electricidad.

El Gobierno Nacional viene empeñado en un replanteamiento orientado a racionalizar el desarrollo del sector eléctrico. En 1991, este sector acumuló un ahorro bruto de US \$ 550 millones. Sin embargo, al tomar en cuenta los pagos por concepto de servicio de la deuda el panorama se oscurece, arrojando un déficit efectivo de generación de recursos de aproximadamente US \$1.000 millones. De ahí la importancia de avanzar en el proceso de reestructuración del sector, el cual se orienta a fomentar la vinculación del sector privado a la generación de energía y aprovechar las ventajas de la competencia entre proveedores con el fin de abaratar costos e inducir eficiencia no sólo en la gestión de los sistemas eléctricos sino en los programas futuros de inversión.

Se plantea, entonces un desafío para el país: es necesario preparar a todas las regiones para la modernización y la apertura. Dentro de este programa, un equipamiento adecuado de servicios básicos domiciliarios es condición indispensable. Es necesario garantizar que los más pobres cuenten con condiciones mínimas de atención, cobertura y calidad de servicios públicos. Pero no basta ampliar coberturas, es imprescindible mejorar la calidad de lo existente y eliminar la profunda ineficiencia de algunas empresas de servicio público.

Es preciso reconocer que gran parte del descontento actual obedece a su incapacidad para

suministrar el servicio de acuerdo a normas aceptables de calidad, bajo costo y diligencia administrativa. La atención adecuada al usuario debe ser elemento primario en la gestión de servicios públicos.

---

## Servicios Públicos y Distribución del Ingreso

---

*La oferta de servicios depende de la capacidad institucional, técnica y financiera de los países en general y de las empresas proveedoras en particular. La demanda, a su vez, esta sociada al nivel de ingreso y la capacidad de pago de la sociedad.*

En Colombia existen 1.6 millones de personas en el área urbana que habitan en viviendas que carecen de acueducto o sanitario o ambos servicios y 4.8 millones en el área rural que carecen simultáneamente de los dos servicios. Estos 6.4 millones de personas son considerados como "pobres por servicios". Equivalen al 21% de los habitantes del país.<sup>(3)</sup>

Dados los enormes costos de prestar y ampliar la disponibilidad de los servicios básicos, la sociedad debe buscar alternativas para suministrarlos a estos sectores desfavorecidos sin incurrir en desastres financieros o endeudamientos insostenibles. En el pasado reciente, existió una estructura de tarifas regresiva, con subsidios

---

(3) *La Revolución Pacífica, Plan de Desarrollo Económico y Social. 1990-1994.*

generalizados a los sectores con capacidad de ingreso. La estructura tarifaria se basaba en el principio de que a mayor ingreso mayor consumo. La evidencia práctica refutó su validez. Muchos usuarios con altos ingresos no tienen consumos elevados. Ante la necesidad de subsidiar a los pobres con bajos consumos, se terminó subsidiando a la mayor parte de los usuarios residenciales.

Fue necesario, entonces, eliminar la estructura anterior que otorgaba subsidios significativos a los bajos consumos de los estratos de alto ingreso. No era buena, por el contrario era regresiva, ya que en términos relativos al ingreso, asimilaba una mayor carga tarifaria para los sectores pobres de la población. Se introdujo la estratificación socioeconómica de los usuarios con el fin de identificar a la población de escasos recursos, susceptibles de recibir subsidios para pago de servicios.

El Gobierno Nacional expidió los Decretos 969 y 970 de 1991, los cuales incorpora en esta ley y que están orientados a racionalizar y reordenar los procesos de estratificación en todo el país. Es pretensión gubernamental señalar las pautas metodológicas y definir los procedimientos de estratificación socioeconómica necesarios para la fijación de tarifas de servicios públicos. Se busca reordenar los procesos de estratificación que vienen adelantando los municipios con el fin de dotarlos de una metodología y criterios unificados. Esto permitirá clasificar a los usuarios teniendo en cuenta el tamaño y la condición socioeconómica de los respectivos municipios. El nuevo esquema se orienta, además, a solucionar situaciones de municipios donde no necesariamente existe el mismo número de estratos que en las grandes ciudades. Se tiene en cuenta, por lo tanto, las diferencias socioeconómicas entre las regiones, pero se sujeta a criterios metodológicos probados por el DANE, entidad del orden nacional que es autoridad en la materia.

Se hace necesario replantear el sistema de financiamiento y el esquema de subsidios en todos

los servicios públicos. La definición de una adecuada política tarifaria, que asocie el costo del servicio al precio de su suministro, es indispensable si se quiere cumplir los objetivos y metas.

Ha sido claro que en aquellos municipios con significativos rezagos y congelamientos tarifarios se deterioran la cobertura y calidad de los servicios que otorgan. Este ha sido el caso de acueducto, alcantarillado y aseo. Lo que es aparentemente bueno para la gente en el corto plazo, en el mediano término es perjudicial para todos ellos. Cuando, por motivos políticos o desidia administrativa, no se hicieron los ajustes tarifarios oportunos debidos a las variaciones en los costos reales de prestación de servicio, se condujo a la inestabilidad financiera a muchas empresas y se comprometió seriamente la posibilidad de mejoramiento y ampliación de los servicios, con graves repercusiones sobre el nivel de vida de la población.

A pesar de los recientes ajustes tarifarios se calcula que el Estado tendría que aportar US\$1.200 millones en los próximos cuatro años para financiar los subsidios de electricidad del sector residencial. Los usuarios residenciales sólo pagan el 49% del costo de suministro de electricidad.

Las carencias y el suministro deficiente de servicios básicos como acueducto y alcantarillado, tal como padecen muchas poblaciones del país, han contribuido, de manera notoria, a la protesta comunitaria manifestada a través de marchas y paros cívicos. Es mucho más nocivo para el país no tener servicios que hacer que quienes los tienen, los paguen a precios justos.

Por ejemplo, las protestas populares recientes en Barranquilla, Cúcuta, Riohacha y Puerto Colombia tienen su origen en una prestación muy deficiente de los servicios de agua y electricidad, en empresas con manifiesto desgreño administrativos y no debidos a problemas ligados al cobro tarifario. El ciudadano valora más la disponibilidad del servicio y está

dispuesto a asumir su costo, si éste se suministra con niveles adecuados de calidad y confiabilidad. Pero es claro que la vía tarifaria no es suficiente ya que muchos colombianos no pueden reconocer el costo de los servicios. Por ello el Estado debe subsidiar el servicio a los más pobres, en forma clara y explícita.

---

## Centralización, Descentralización y Competencia en el Suministro de Servicios Públicos

---

Desde el siglo pasado, los servicios públicos domiciliarios tuvieron en Colombia un origen netamente municipal y privado. La electricidad, el acueducto y los teléfonos, nacieron como producto de la iniciativa local, muchas veces privada y funcionaron como entes autónomos con discrecionalidad sobre la definición tarifaria. A partir de la segunda mitad del siglo, el Gobierno Central asumió el protagonismo en la inversión, financiación y administración de los servicios. Varios elementos coincidieron para reforzar este papel creciente del Estado Central:

- Primó una concepción intervencionista del Estado y la necesidad de definir de manera amplia sus ámbitos de influencia. La voluntad de dar acceso a los servicios públicos a la gran mayoría de la población, llevó a una significativa ampliación de la cobertura. Se justificó esta intervención, no sólo para movilizar subsidios y recursos fiscales, sino también, para utilizar la capacidad administrativa y ejecutora del Estado.
- En la primera mitad del siglo, pese a la eficiencia con la que muchos empresarios privados administraron empresas de electricidad, agua y teléfonos, la estrechez del mercado de capitales y la dificultad para acceder a recursos de financiamiento externo, impidió que el sector privado permaneciera como inversionista en el sector de servicios básicos.

Por ejemplo, la financiación a través de suscripción de bonos, permitió que los servicios públicos norteamericanos continuaran en gran medida bajo el dominio privado o que el Estado no reemplazara a las regiones y municipalidades en su suministro.

En la actualidad, Colombia empieza a superar la estrechez del mercado de capitales y en el futuro cercano es previsible que los empresarios privados encuentren nuevamente incentivos y rentabilidades adecuadas en el sector de servicios públicos y participen en un esfuerzo conjunto con las municipalidades y regiones en la tarea de cobertura y mejoramiento de los servicios.

- La creciente complejidad tecnológica de servicios como teléfonos, la existencia de economías de coordinación, escala y densidad en algunos servicios, trascendieron el ámbito meramente municipal y justificaron la interconexión de los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones.
- Además de su estatización, se presentó una creciente tendencia a la centralización de la prestación de los servicios. La debilidad fiscal y administrativa del municipio y la región originada, en gran parte, por la carencia de recursos propios, con frecuencia hizo que se atendieran con recursos nacionales algunos servicios con características municipales. Es el círculo vicioso que refuerza el centralismo: ante la carencia de recursos fiscales municipales, mayor es la injerencia del Estado central y naturalmente mayor es la necesidad de reforzar los recursos del gobierno central y menor la posibilidad de generar recursos fiscales municipales.

Ya en los años ochenta, el esquema centralista se agotó en todos los ámbitos de la vida nacional y con ello vino paralelo el cuestionamiento a la excesiva dependencia del municipio y la región del Gobierno Central. La Ley

14 de 1983, La Reforma Municipal de 1986 y sobre todo la nueva Constitución, invirtieron los papeles y las obligaciones y hacen responsables, a la vez autónomos, a quienes antes fueron espectadores pasivos. La dotación de servicios públicos, el mantenimiento de niveles adecuados de confiabilidad y calidad, la expansión de las coberturas, se convirtieron en tareas fundamentales de los entes municipales. Después de un recorrido por el centralismo, el país retoma el camino de la descentralización y la autonomía municipal.

El sector de servicios públicos cuenta con algunas áreas donde es favorable el fomento de condiciones de competencia entre oferentes del mismo servicio. Las reglas del mercado han sido eficaces en Telecomunicaciones y Energía donde la competencia es mayor debido a la iniciativa empresarial y la emulación entre proveedores. Como resultado, precios fijados según reglas de mercado se constituyen en señales adecuadas de costos y orientan certeramente la demanda.

La gestión empresarial, cuando se desarrolla en un ambiente competitivo y sin interferencias ajenas a su propósito, prueba ser eficaz y conducir a soluciones eficientes con costos ajustados a las necesidades del servicio. Aún en los servicios de acueducto y alcantarillado es posible encontrar áreas donde pueden simularse condiciones de competencia. La gestión independiente de sistemas de acueducto, la subcontratación de zonas o modalidades de servicio, pueden generar un ambiente competitivo en el área de gestión del sector de saneamiento básico.

Existen, además, grandes posibilidades para vincular al sector privado a la prestación de algunos servicios y, adicionalmente, fomentar condiciones favorables a la competencia entre empresas públicas, privadas y mixtas.

Estas perspectivas exigen un replanteamiento institucional del sector de servicios públicos en su conjunto. La Nación debe redefinir su papel para fortalecer instituciones reguladoras que más que definir de manera aislada esquemas tarifarios, engloben la gestión de manera integral e involucren los costos al igual que el manejo de precios dentro de un objetivo de mejoramiento de la eficiencia del servicio, disminución de costos, repunte de productividades y aproximación a criterios de mercado.

La función reguladora no debe ser entendida como el ejercicio de un intervencionismo entorpecedor de la iniciativa empresarial. En su visión moderna, la regulación es una actividad estatal que fomenta la competencia en aquellas áreas donde existe y es factible; impide el abuso de posiciones de monopolio natural, donde éste es ineludible; desregula para eliminar barreras artificiales a la competencia y, finalmente, calibra las diversas áreas de un servicio para impedir prácticas discriminatorias o desleales para el competidor.

---

## LA LEY DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

---

### Criterios Básicos del Proyecto de Ley <sup>(4)</sup>

El proyecto se construye alrededor de seis criterios básicos, a saber:

- Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado

---

(4) *Nota del Editor:* los artículos del Proyecto de Ley a que se hace referencia es esta sección no necesariamente corresponden a la numeración definitiva establecida en la Ley 142 de 1994

asegurar su prestación *eficiente* a todos los habitantes del territorio nacional. (Art. 365 de la Constitución Política). Por lo tanto, *es deber de las autoridades organizar la prestación de los servicios públicos en la forma que más convenga al usuario*. Este postulado se concreta *en tres objetivos* específicos a saber: garantizar que haya recursos suficientes para lograr la existencia misma del servicio, es decir, *la cobertura*; asegurar la eficiencia del servicio, es decir, *los menores costos y las menores tarifas*; y obtener la *calidad* de los servicios.

- Los tres objetivos del servicio eficiente al usuario que se enunciaron arriba deben lograrse, ante todo, con los siguientes *cinco instrumentos*: *libertad de entrada* a quienes quieran prestar los servicios; *competencia* entre quienes los presten, cuando la *competencia* sea naturalmente posible; *control* sobre quienes presten servicios en condiciones de monopolio, *para evitar abusos en la posición dominante*; *vigilancia* sin obstruccionismo burocrático; y *sanciones* eficaces para los infractores de las normas.

- El Estado debe buscar la prestación *eficiente* de los servicios públicos; el inciso primero del Artículo 365 de la Constitución Política obliga tanto a las entidades públicas como a las entidades privadas, a ser *eficientes* en la prestación de los servicios. La Constitución no ampara la ineficiencia en el sector público ni en el privado.

- *El municipio es la entidad política y regional alrededor de la cual debe organizarse la prestación de los servicios públicos domiciliarios*. Pero corresponde a la Nación y a los departamentos apoyarlo en su labor, y organizar la prestación de los servicios complementarios (Art. 4, 5, 6 y 7)

- *Existe el deber de subsidiar a los usuarios de menores ingresos, para que puedan atender sus necesidades básicas*. Pero los subsidios deben otorgarse con "transparencia", es decir, en forma tal que se conozca con precisión cuánto cuesta, quién los paga, y quién los recibe. Otras formas de

dar subsidio conducen al despilfarro, a la corrupción y al privilegio. Por eso el artículo 368 de la Constitución ordena que, si se desea dar subsidios, deben otorgarse a través de los presupuestos de las entidades públicas. Las asignaciones presupuestales permiten identificar con precisión el monto de los subsidios, su origen y sus destinatarios.

- Las autoridades deben intervenir y vigilar, sin obstruir. Deben hacerlo en forma especializada, sin confundir la función de regular, es decir, de velar por que las reglas se cumplan. Deben separar sus funciones como administradores de las empresas, de sus funciones como reguladores de empresas. Y deben disponer de instrumentos eficaces para cumplir sus responsabilidades y para sancionar a los infractores.

## Definiciones Básicas

- El Congreso, en virtud de la cláusula general de competencia (Art. 150, inciso primero, de la Constitución Política), puede regular el tema de los servicios públicos domiciliarios, y el de los servicios públicos en general, en la forma que estime más conveniente para el país, sin más límite que las normas de la Constitución, puesto que, a menudo, deja a la ley la tarea de fijar los límites precisos de las orientaciones que señala. La Constitución no quiso establecer en esta materia, ni en otras, rígidas camisas de fuerza. Ejemplo de esta técnica de redacción constitucional son los artículos 298, 311, 365, 367, 369 y 370 de la Carta.

- El proyecto entonces, considera "servicios públicos domiciliarios" los de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica (Art. 14, numeral 14.16). Los de acueducto y energía eléctrica se definen como aquellos que se refieren a la distribución al usuario final del agua y la energía (Art. 14 numerales

14.17 y 14.20). Los de alcantarillado y aseo se definen como los que permiten la recolección de residuos de diversa clase (Art. 14 numerales 14.18 y 14.19).

- La ley se ha redactado, sin embargo, con el ánimo de que pueda aplicarse también a otras actividades, íntimamente relacionadas con los servicios públicos domiciliarios, como son la captación de agua, y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte; o al transporte, tratamiento y disposición de residuos; o la generación, transformación, interconexión y transmisión de energía (Art. 1; y Art 14, numerales 14.17, 14.18, 14.19 y 14.20). En verdad no se protegería en forma adecuada al usuario si simplemente se regularan los servicios públicos en la etapa de su prestación al usuario final, y se dejaran sin regulación las etapas anteriores que, en forma inevitable, influyen definitivamente sobre la calidad y los costos de los servicios que el usuario recibe.

- La ley se aplicará, también, a los servicios de gas combustible, y a las telecomunicaciones (Art. 1 y 14 numerales 14.22 y 14.21). El gas, como se sabe, es un sustituto próximo de la energía eléctrica; y no parece conveniente regular aquella sin que éste tenga parecidas reglas de juego. Este servicio se ha vinculado integralmente al proyecto como un servicio público y se refiere al conjunto de actividades ordenadas al transporte y distribución de gas. Las telecomunicaciones, de otra parte, tienen hoy, y tendrán cada vez más, tanta importancia en el bienestar y comodidad de las personas, y en la eficiencia de su trabajo, como la energía o el agua. Dado, además, el hecho de que el espectro electromagnético es un recurso limitado, como el agua, su uso plantea problemas sociales y económicos similares. La posibilidad de aparición de "monopolios naturales" es comparable con la que ocurre con los servicios de energía. Los conflictos entre sus usuarios y las empresas que prestan el servicio, son tanto o más frecuentes y valiosos, que los conflictos que ocurren entre los usuarios de otros servicios y las empresas respectivas. Se

dan, pues, muchos elementos que aconsejan una regulación común con los demás servicios a los que la ley se aplica.

- Por supuesto, como se indicará adelante, a pesar de los muchísimos elementos comunes entre los servicios a los que la Ley se aplica, subsisten entre ellos algunas diferencias que ameritan reglas especiales. Esas diferencias son objeto de normas particulares en este proyecto (Libro Cuarto), o de regulación excepcional con la facultades extraordinarias que se soliciten aquí (Art. 131).

Se incluye todo un título dedicado a los servicios de agua potable y saneamiento básico. En general como se expone más adelante, el título se orienta a favorecer y facilitar las actividades relacionadas con tales servicios, con referencias explícitas a las zonas rurales y los municipios pequeños. De la misma manera, aclara la participación de los departamentos y de la Nación en estos servicios, y sus funciones coordinadoras y de planeación.

Igualmente, se vincula integralmente al proyecto, el sector de telecomunicaciones, con excepción de la televisión. (Art. 7, 14 numeral 14.21). Pero no clasifica a las telecomunicaciones como un servicio "domiciliario", lo que implica que, básicamente, la competencia para prestarlo se radica en la Nación.

### La Protección al usuario

- Tal como arriba se expresó el criterio fundamental que inspira el proyecto es dar servicios eficientes a los usuarios. Y aunque, por lo tanto, todo el proyecto podría mostrarse como un instrumento para realizar ese objetivo, parece importante resaltar aquí algunos aspectos especiales

- Se obliga a los municipios, pero también a las otras entidades públicas, a *garantizar la*



*existencia y prestación continua de los servicios públicos*, en la medida en que los recursos económicos y tecnológicos lo permitan (Art. 3 inciso tercero). Y se permiten que los particulares puedan organizar empresas con el mismo propósito (Art. 10 numeral 10.4).

- Se garantiza a los usuarios el derecho a usar o no usar los servicios públicos; y a pagar por ello un precio que tenga relación con su consumo (Art. 10 numeral 10.1). Se introduce expresamente la obligación de usar servicios de acueducto y saneamiento básico cuando estos servicios se encuentren disponibles. (Art. 110).

- Se garantiza a los usuarios el derecho a elegir entre los diversos prestadores de servicios públicos, y entre los diversos proveedores de bienes necesarios para recibir o utilizar los servicios. (Art. 10 numeral 10.2)

- Para que las tarifas que paguen los usuarios sean las más bajas posibles, el proyecto protege en todas las formas la competencia. Y contiene una serie de normas sobre tarifas cuyo propósito es evitar que esas empresas se aprovechen de sus ventajas monopolísticas en ciertas actividades, para impedir que haya competencia en otras, y consolidar, así una posición global de monopolio (Arts. 15 y 92).

- Al mismo tiempo, para que los usuarios más pobres dispongan de servicios públicos suficientes para atender sus necesidades básicas, y haya solidaridad y redistribución del ingreso, tal como ordenan los artículos 367 y 368 de la Constitución, el régimen tarifario previsto en el proyecto (Art. 83) incluye como uno de sus elementos la facultad de otorgar subsidios (libro segundo, título II, capítulo III), y las fuentes para pagarlos (Arts. 95, 96 y 97).

- Aunque la Constitución obliga a dar participación a los usuarios solo en la *gestión* de las empresas *estatales*, el proyecto contiene un mecanismo que, sin violar la Constitución, extiende la capaci-

dad de gestión de los usuarios a toda clase de empresas, oficiales o privadas, de servicios públicos domiciliarios. Consiste en permitir que los "comités de desarrollo de los servicios públicos", de los cuales debe haber uno en cada municipio, y en donde los usuarios tiene representación (Art. 65), elija un fiscal que intervenga en el órgano máximo de gestión de esas empresas, que es su asamblea (Artículo 66, numeral 66.9).

- Además, para lograr la fiscalización de los usuarios, no sólo sobre las empresas estatales, sino inclusive sobre las privadas, se garantiza su derecho de información Art. 10 numeral 10.5) y el de los "comités de desarrollo de los servicios públicos" a designar el fiscal arriba mencionado, y a promover frente a las empresas de servicios públicos las medidas correctivas que sean necesarias para la correcta prestación del servicio (Art. 66 numeral 66.3).

- Las relaciones de los usuarios con las entidades que prestan los servicios públicos se expresan mediante contratos uniformes de servicios públicos (Libro tercero del proyecto, a partir del artículo 104). Allí se expresan una serie de criterios para evitar que las empresas abusen de su posición dominante frente al usuario, o respecto de otras personas (Art. 108). Este es uno de los aspectos de mayor impacto y más originales del proyecto.

- En cada municipio, los "comités de desarrollo" tienen el deber de proteger al usuario Art. 66 numerales 66.1, 66.3) en los asuntos cotidianos y de menor cuantía relacionados con la prestación de los servicios públicos. Los comités disponen, inclusive, de facultad sancionatoria (numerales 66.4 y 66.5), sujeta, por supuesto, a un control disciplinario para evitar abusos.

Para dar a los usuarios una participación definitiva en la *gestión* de las empresas *estatales* que presten el servicio, con base en el inciso primero del Artículo 369 de la Constitución, el proyecto otorga a los "comités de desarrollo" las función de hacerse

parte en las negociaciones de convenciones o pactos colectivos en las empresas oficiales de servicios públicos que operen en el municipio. Deben también organizar un foro con amplia publicidad, para informar a los usuarios el resultado de la negociación. (Art. 66; numeral 66.8).

- Finalmente, el proyecto solicita del Congreso facultades extraordinarias para poder adecuar el Decreto 1842 de 1991, estatuto del usuario, a la ley que produzcan las cámaras.

### **El Municipio y la Empresa de Servicios Públicos**

- Si uno de los ejes alrededor de los cuales se estructura el proyecto son los usuarios de los servicios públicos, el otro es la empresa de servicios públicos. El proyecto supone que, por regla general, son "empresas de servicios públicos" las que han de prestar los servicios a los que se aplica la ley (Art. 3 inciso sexto; Arts. 8, 11 y 15).

- Los municipios, la Nación y los departamentos pueden participar en empresas de servicios públicos, constitu-yéndolas o haciéndoles aportes, por ello las empresas de servicios públicos pueden ser oficiales o mixtas (Art. 14, numerales 14.4 y 14.5). Pero también se permite a los particulares formar empresas de servicios públicos privadas (Arts. 10.4 y 14, numeral 14.4).

- Sin embargo, el proyecto permite que los municipios presten directamente (es decir, con sus empleados, patrimonio y personalidad jurídica) los servicios públicos domiciliarios, cuando juzguen que no les conviene que sea una empresa la que realice

tal labor, o cuando no haya empresa que quiera adelantarla (Art. 5). En las zonas rurales y en los municipios menores, la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento podrá adelantarse por medio de cooperativas, pre-cooperativas y otras organizaciones comunitarias con personería jurídica. (Art. 113).

- Se amplian las opciones institucionales para prestar los servicios públicos. En el régimen de empresas existentes se establece que no tendrán que transformarse en sociedades por acciones; aunque se les permita la transformación si lo desean. (Art. 16)

- El proyecto considera, igualmente, que al adoptar la forma empresarial se facilita el cumplimiento del objetivo de eficiencia que contiene la Constitución Política. Al encomendar la prestación de servicios a "empresas" antes que a funcionarios públicos, pueden exigirse con más facilidad las responsabilidades a los administradores, si no satisfacen ciertos "indicadores de gestión" (Arts. 42, 66 numerales 67.5 y 66.7; 72 numeral 72.3; 78 numeral 78.10). Puede también lograrse una contabilidad independiente de la del municipio, la Nación o el departamento, para que la comunidad y/o los particulares interesados conozcan exactamente los costos y las implicaciones financieras de la operación de los servicios (Arts. 10 numeral 10.5; 59, 78 numerales 78.3 y 78.13). Y puede conseguirse que los servicios públicos tengan una administración profesional, ajena a intereses partidistas o de corto plazo (Art. 25).

- En la búsqueda de la eficiencia, el proyecto permite, sin hacerlo obligatorio, que, previa invitación pública (Art. 33), las autoridades confíen la administración de las empresas de servicios públicos oficiales, o de sus bienes, a administradores privados profesionales (Arts. 44, 45, 46). Tales contratos, cuando versan sobre distribución de energía, gas combustible por redes, o sobre acueductos, pueden garantizar a un contratista la exclusividad en la prestación del servicio, durante cierto tiempo, en una

zona geográfica, cuando está siendo atendida por entidades públicas, y si el contratista se compromete, entre otras cosas a atender a todos los usuarios (Art. 51). De la misma manera, el proyecto permite a todas las empresas de servicios públicos, subcontratar aspectos especiales de su gestión (Art. 49). Y crea estímulos para que las entidades públicas confíen a administradores profesionales la administración de las empresas en las que tengan participación mayoritaria. (Art. 24).

- Para organizar empresas que hayan de usar agua y el espectro electromagnético, se requiere contrato de concesión de las autoridades (Art. 43). Se requiere, además en todos los casos, cumplir con las normas ambientales, y obtener de las autoridades municipales los permisos para ocupación de vías, uso del subsuelo, etc. (Art. 20).

- *Una de las razones por las cuales los colombianos no disponen de servicios domiciliarios en cantidad, radica en que no ha habido competencia en el sector en la práctica; éste ha estado sujeto a monopolios oficiales.* No ha existido, en la práctica, *libertad de entrada* al sector de servicios públicos. Y el monopolio oficial limita la posibilidad de vincular recursos a la prestación de los servicios, pues éstos quedan dependientes de las disponibilidades fiscales y, en ese sentido, el monopolio impide la ampliación de la cobertura. El monopolio al mismo tiempo carece de incentivos para ser eficiente, y ello ocasiona que los usuarios tengan que pagar tarifas innecesariamente altas, y recibir servicios de calidad pobre. La principal víctima del monopolio oficial ha sido, entonces, el usuario.

- Por ello, para no tener que privatizar, enajenar o liquidar en todos los casos las empresas oficiales monopolísticas, como ordenaría el inciso séptimo del Artículo 336 de la Constitución, el proyecto considera que es preciso crearles competencia, es decir, terminar con su condición monopolística. Tal es la razón por la que el proyecto busca facilitar

la *libertad de entrada* al sector de los servicios públicos a todos quienes deseen prestarlos inclusive a particulares (Art. 10, numeral 10.4 y artículos 17, 18 y 27). En este punto el proyecto acata el Artículo 365 de la Constitución Política.

- Con el propósito de evitar prácticas restrictivas de la competencia, se dispone que las comisiones de Regulación podrán inducir a una empresa de servicios públicos a tener un objeto social exclusivo (Art. 15). Y se dispone que todas las empresas pueden operar en uno o varios municipios (Art. 19), y que no puede ser objeto de tratamiento tributario discriminatorio (Art. 21). Por regla general estas empresas se rigen por normas de derecho privado. (Art. 31).

- En la medida en que las empresas competidoras, oficiales o privadas, pueden buscar monopolios o restricciones a la competencia, o llegar a poseer "monopolios naturales", es indispensable establecer reglas precisas, claras y severas en defensa de la competencia (Art. 3 numeral 3.5; Art. 11 numerales 11.1, 11.2 y 11.6; Arts. 22, 32, 33, 48, 55, 72, 84, 92, 108). El proyecto de ley es, entonces, el instrumento que propone el gobierno para hacer real el mandato del inciso cuarto del Artículo 333 de la Constitución, según el cual:

*"El estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional".*

- Las empresas operarán en igualdad de condiciones: no habrá privilegios para las que tengan capital oficial (Art. 23). Los privilegios no sólo conducen a que se escondan las ineficiencias sino que, además, tienden a que no se pueda aumentar la cobertura de los servicios, porque

desaniman la participación del sector privado. Las empresas de servicio pagarán impuestos de renta: sin embargo, las inversiones en expansión, mejoramiento del servicio y subsidios serán deducibles de ese tributo.

- Así como hay "libertad de entrada" al sector de los servicios públicos, también hay "libertad de salida". Las empresas que no puedan cumplir con sus tareas, pueden ser objeto de intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, y de liquidación. Las autoridades en esos eventos, tienen el deber de garantizar la continuidad del servicio, bien con nuevas inversiones, bien invitando a otras empresas privadas a que asuman las responsabilidades de la que haya entrado en falencia (Arts. 62, 63 y 64).

- Se buscó concordancia del proyecto con el estatuto general de contratación de la administración. Como no se conoce cual sea el texto final que el Congreso adopte para el "Estatuto general de contratación de la administración pública", se establece que en caso de cualquier oposición entre la ley de servicios públicos, en temas de contratos y aquel estatuto, preferirá aquel. No se hacen distinciones entre "contratos administrativos" y "contratos comerciales", de acuerdo con la orientación del proyecto que el Gobierno presentó al Congreso.

- Como muchas de las reglas a las que se acaba de aludir son tan novedosas, para poderlas ampliar cabalmente es indispensable modificar aspectos particulares de otros estatutos, concebidos para otras épocas y arreglos institucionales. Tal ocurre, por ejemplo, con las normas sobre sociedades, entidades descentralizadas, régimen contractual y procedimiento administrativos. En especial, es preciso regular el periodo de transición, entre el arreglo institucional que ha tenido el país y el nuevo conjunto de instituciones que han de resaltar de esta ley. Pero como las modificaciones no afectan sino el régimen de las empresas de servicios públicos, y como ellas tienen que convertirse en instrumentos del régimen que la ley con-

tiene, pareció inconveniente recargar el texto del proyecto con las normas respectivas y por eso se pide autorización al Congreso para expedirlas por medio de facultades extraordinarias (Art. 131).

## Competencias Administrativas Regionales

- En el proyecto pueden advertirse *competencias de gestión* (es decir, relacionadas ante todo con la administración y financiación inmediata del servicio), *competencia de regulación* (que consiste en dictar reglas generales para la prestación de los servicios), y *competencia de vigilancia y fiscalización* (que consisten en asegurar que quienes presten los servicios se someten a las reglas pertinentes). En la medida de lo posible, el proyecto separa las diversas competencias. En este aparte de la exposición de motivos nos referiremos, principalmente, a las competencias de gestión.

- En el proyecto, los municipios aparecen, ante todo, con una competencia de *gestión* en materia de servicios públicos domiciliarios (Art. 4 y 5). Ellos tienen la más importante responsabilidad en el proyecto, en cuanto a la *gestión*, responsabilidad que pueden descargar asumiendo la prestación de los servicios en forma directa, o por medio de empresas oficiales o mixtas, o consiguiendo que empresas privadas se vinculen al municipio.

- Los departamentos aparecen con una competencia de *gestión*, en servicios de transmisión intermunicipal, que se manifiesta, además, en responsabilidades del *apoyo financiero y coordinación* respecto a los municipios. (Art. 7)

- La Nación aparece con una competencia limitada de *gestión* (generación eléctrica, interconexión, construcción de redes nacionales, telecomunicaciones, gas combustible y de apoyo financiero. (Art:7)

- El proyecto, a pesar de que delimita con toda precisión las competencias de los municipios, de los departamentos, y de la Nación, no hace de esas competencias compartimientos estancos, sino que, por el contrario, abre múltiples posibilidades de colaboración entre tales entidades.

### **Regulación y Fiscalización de los Servicios Públicos**

- Las tareas de regulación y fiscalización se atribuyen a los "Comités de Desarrollo de los Servicios Públicos", a los ministerios, a las Comisiones de Regulación y a la "Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios".

- En el nivel municipal, se crean los "Comités de Desarrollo de los Servicios Públicos", cuyo objeto principal es el de proteger al usuario en la localidad (Arts. 65, 66, 67); y darles, a él y a los representantes de los municipios, instrumentos de gestión y de participación en la administración y fiscalización de las empresas de servicios públicos. Gracias a los comites, se espera que los usuarios tengan medios ágiles inmediatos, descentralizados, de corregir deficiencias locales en la prestación de los servicios públicos y sin tener que recurrir a la Superintendencia de Servicios Públicos salvo para asuntos de especialísima cuantía o trascendencia.

- En el nivel nacional, se confía a aquellos ministerios que tienen relación con los servicios públicos, la tarea de participar en las comisiones en donde se produce la regulación y protección de la competencia; de señalar los requisitos técnicos que deben cumplir los bienes y los procedimientos que se emplean en la prestación de los servicios, para garantizar la calidad; y de elaborar planes de expansión de cobertura. Entre sus competencias de gestión se encuentran

las de identificar y promover fuentes de financiamiento; y las de cumplir otras tareas de apoyo (Art. 68).

- El proyecto propone la creación de "Comisiones de Regulación", en saneamiento (acueducto, alcantarillado y aseo), energía (electricidad y gas). A través de las "Comisiones de Regulación" el presidente ejercerá la facultad que le da el artículo 370 de la Constitución, de señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. La misión de las comisiones es, ante todo, evitar los abusos monopolísticos, evitar el abuso de la posición dominante y, en general, proteger la libertad de competencia, bien señalando reglas abstractas, bien resolviendo casos particulares cuando no exista una regla apriorística que permita establecer que es lo que más conviene para ello (Art. 72). Una de las funciones principales consiste en señalar las fórmulas dentro de las cuales pueden las empresas de servicios públicos fijar sus tarifas. Y otra, de singular importancia, consiste en definir los "indicadores de gestión" que permitan evaluar el desempeño de las empresas.

- El proyecto, en desarrollo del artículo 370 de la Constitución, propone la creación de una Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Art. 74), cuya función no consiste en dictar reglas, sino en verificar, en casos concretos, si las entidades que prestan los servicios públicos acatan o no las reglas aplicables.

- El proyecto, para no gravar al fisco nacional, propone que sean las mismas empresas de servicios públicos las que atiendan los gastos de las comisiones de regulación y de la Superintendencia (Art. 80); las normas respectivas se han redactado teniendo a la vista las innovaciones que introdujo en materia fiscal el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución.

- Para no hacer demasiado largo el proyecto, se solicitan facultades extraordinarias con las cuales pueda el Gobierno, de acuerdo con lo previsto en la ley, modificar la estructura y las funciones de

los Ministerios de Minas y Energía, Comunicaciones y Desarrollo; y determinar la estructura y funciones especiales de las comisiones de regulación y de la superintendencia (Art. 130 numeral 130.6).

### **Régimen Tarifario, Subsidios y Financiamiento**

• *El régimen tarifario*, al que se refiere el artículo 367 de la Constitución, comprende varios elementos, a saber, las reglas que determinan si las tarifas son libres o controladas; las reglas sobre fórmulas tarifarias; las reglas sobre subsidios y estratificación; las reglas sobre prácticas tarifarias restrictivas o que implican abuso de la posición dominante; y las reglas relativas a los procedimientos que deben emplearse para determinar el cobro final de las tarifas (Art. 82).

• En general, el proyecto supone que mientras no haya plena competencia en la prestación de los servicios públicos, las tarifas tienen que ser controladas, para evitar abusos del poder monopolístico en perjuicio de los usuarios. Pero en la medida en que se introduzca competencia en el sector, se permitirá que sea el mercado, y no las autoridades, quienes determinan la evolución de las tarifas (Art. 84).

• Cuando las tarifas están sujetas a control, corresponde a las comisiones de regulación crear "fórmulas tarifarias", en desarrollo de las cuales las empresas establecen la tarifa concreta, facultando a las comisiones establecer límites máximos y mínimos a las tarifas. Las fórmulas tarifarias deben reflejar el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, incluyendo la reposición, el mantenimiento y la remuneración del patrimonio de los accionistas (Art. 83, numerales 83.1 y 83.4). Ello es lo que más conviene a los usuarios porque, de no hacerse así, no será posible que los particulares inviertan en el sector de servicios públicos; y no será

posible que, solamente con recursos fiscales, se extienda la cobertura y se asegure la calidad en los servicios que la población reclama.

• El régimen tarifario incluye elementos de solidaridad y redistribución de ingresos, que se manifiestan, principalmente, en las inversiones de las autoridades, con recursos públicos, en empresas destinadas a atender zonas que pueden no resultar atractivas para inversionistas particulares; y por el deber de las autoridades de destinar recursos presupuestales a subsidiar los consumos básicos de las personas de menos recursos (Art. 83, numeral 83.3)

• Para orientar los subsidios hacia las personas de menores ingresos el proyecto prevé la necesidad de realizar estratificaciones en los municipios (Art. 98). Como es tan importante, desde un punto de vista social, que las gentes más necesitadas puedan recibir subsidios por sus consumos básicos, se considera que es una falta de la mayor gravedad en los alcaldes y gobernadores no desplegar toda la diligencia del caso para la estratificación de su respectivo municipio. La falta de una estratificación adecuada puede impedir que los subsidios lleguen en forma rápida a quienes más los necesitan; por eso la negligencia de los funcionarios aludidos puede dar lugar a su destitución (Art. 102), según autorizan los artículos 304 y 314 de la Constitución.

• Para financiar parte de los subsidios previstos, se prevé en favor de los municipios y de la Nación la posibilidad de convertir en contribuciones las diferencias que actualmente existen entre el valor económico de los servicios que se prestan a los usuarios de más altos ingresos, y el costo de esos servicios (Arts. 96 y 97). Esa fórmula es indispensable, desde un punto de vista constitucional, para cumplir con el artículo 368, que no permite subsidios sino a través de los presupuestos; y, desde un punto de vista económico, para dar transparencia a los subsidios. Tales contribuciones, por definición, no implicarán mayores sacrificios a los usuarios, puesto que representan solo la conversión en tributo lo que al-

gunos ya pagan por exceso del costo de los servicios que reciben. Esta contribución, además, debe desaparecer gradualmente, en un período de seis años, mientras la Nación y las entidades territoriales encuentran formas de financiar los subsidios que tengan impactos menos nocivos sobre la asignación eficiente de los recursos en la economía colombiana.

- El proyecto busca fortalecer el financiamiento de la inversión social en los servicios de agua potable y saneamiento básico en aquellos municipios con niveles de cobertura bajos con relación al promedio nacional. Se dará prioridad en la asignación de las transferencias para los sectores sociales, a la inversión en el sector de agua potable y alcantarillado. (Art. 112).

- Se faculta a la Findeter para financiamiento a las entidades oficiales del orden nacional y las empresas de servicios públicos, oficiales, mixtas o privadas (Art. 126)

- Aunque el proyecto fija todos los criterios básicos en materia de subsidios y estratificaciones, el régimen respectivo supone normas detalladas de procedimiento y organización, para expedir

las cuales se solicitan facultades extraordinarias (Art. 130, numeral 130.4).

### **Servicios Públicos en Particular**

- El propósito del proyecto consiste, como se dijo atrás, en regular los aspectos comunes a la prestación de los servicios públicos. Pero, por supuesto, hay ciertos aspectos muy específicos de cada servicio, que ameritan regulaciones especiales. Algunas de esas regulaciones aparecen ya en el proyecto (Libro Cuarto). Otras, podrán expedirse por medio de facultades extraordinarias, tal como se solicita al Congreso en el artículo 131.

- En todo caso, se desea que el país pueda disponer de un régimen unificado en esta materia, y de unos principios comunes de interpretación; por eso se pide autorización al Congreso para expedir un decreto con la recopilación de todas las normas que finalmente se expidan (Art. 132).

Del Señor Presidente, y de los honorables Senadores, con toda atención, firman

**Rudolf Hommes Rodríguez,**  
*Ministro de Hacienda y Crédito Público*

**Guido Nule Amín,**  
*Ministro de Minas y Energía*

**William Jaramillo Gómez,**  
*Ministro de Comunicaciones*

**Jorge Bendeck Olivella**  
*Ministro de Obras Públicas y Transporte*

**Luis Alberto Moreno,**  
*Ministro de Desarrollo Económico.*



# Ley 142/94

## RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

El Congreso de Colombia

Decreta:

### Capítulo I

#### PRINCIPIOS GENERALES

##### ARTÍCULO 1. AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY.

Esta ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible,

telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta ley.

##### ARTÍCULO 2. INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que



trata esta ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines:

2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.

2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios.

2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico.

2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.

2.5. Prestación eficiente.

2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante.

2.7. Obtención de economías de escala comprobables.

2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y fiscalización de su prestación.

2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad.

### **ARTÍCULO 3. INSTRUMENTOS DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL.**

Constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos todas las

atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata esta ley, especialmente las relativas a las siguientes materias:

3.1. Promoción y apoyo a personas que presten los servicios públicos.

3.2. Gestión y obtención de recursos para la prestación de servicios.

3.3. Regulación de la prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta las características de cada región; fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, evaluación de las mismas, y definición del régimen tarifario.

3.4. Control y vigilancia de la observancia de las normas y de los planes y programas sobre la materia.

3.5. Organización de sistemas de información, capacitación y asistencia técnica.

3.6. Protección de los recursos naturales.

3.7. Otorgamiento de subsidios a las personas de menores ingresos.

3.8. Estímulo a la inversión de los particulares en los servicios públicos.

3.9. Respeto del principio de neutralidad, a fin de asegurar que no exista ninguna práctica discriminatoria en la prestación de los servicios.

Todas las decisiones de las autoridades en materia de servicios públicos deben fundarse en los motivos que determina esta ley; y los motivos que invoquen deben ser comprobables.

Todos los prestadores quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley, a todo lo que esta ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las comisiones, al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, y a las contribuciones para aquéllas y ésta.

#### **ARTÍCULO 4. SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES.**

Para los efectos de la correcta aplicación del inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, todos los servicios públicos, de que trata la presente ley, se considerarán servicios públicos esenciales.

#### **ARTÍCULO 5. COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.**

Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.

5.2. Asegurar en los términos de esta ley, la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio.

5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 60/93 y la presente ley.

5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional.

5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos.

5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta ley a las empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las actividades de su competencia.

5.7. Las demás que les asigne la ley.

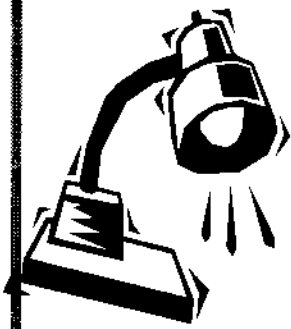
#### **ARTÍCULO 6. PRESTACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS.**

Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en los siguientes casos:

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo;

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada;

6.3. Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa para el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo



menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de Regulación establecerán las metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos de prestación de servicios.

6.4. Cuando los municipios asuman la prestación directa de un servicio público, la contabilidad general del municipio debe separarse de la que se lleve para la prestación del servicio; y si presta más de un servicio, la de cada uno debe ser independiente de la de los demás. Además, su contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos relacionados con dicha actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen como autoridades políticas, de tal manera que la prestación de los servicios quede sometida a las mismas reglas que serían aplicables a otras entidades prestadoras de servicios públicos.

En el evento previsto en el inciso anterior, los municipios y sus autoridades quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley misma, a todo lo que esta ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las comisiones y al control, inspección, vigilancia y contribuciones de la Superintendencia de servicios públicos y de las comisiones. Pero los concejos determinarán si se requiere una junta para que el municipio preste directamente los servicios y, en caso afirmativo, ésta estará compuesta como lo dispone el artículo 27 de esta ley.

Cuando un municipio preste en forma directa uno o más servicios públicos e incumpla las normas de calidad que las comisiones de regulación exijan de modo general, o suspenda el pago de sus obligaciones, o carezca de contabilidad adecuada después de dos años de entrar en vigencia esta ley o, en fin, viole en forma grave las obligaciones que ella contiene, el Superintendente, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad,

además de sancionar los alcaldes y administradores, podrá invitar, previa consulta al comité respectivo, cuando ellos estén conformados, a una empresa de servicios públicos para que ésta asuma la prestación del servicio, e imponer una servidumbre sobre los bienes municipales necesarios, para que ésta pueda operar.

De acuerdo con el artículo 336 de la Constitución Política, la autorización para que un municipio preste los servicios públicos en forma directa no se utilizará, en caso alguno, para constituir un monopolio de derecho.

#### ARTÍCULO 7. COMPETENCIA DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Son de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas:

7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas.

7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos.

7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto.

7.4. Las demás que les asigne la ley.

**ARTÍCULO 8. COMPETENCIA DE LA NACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.**

Es competencia de la Nación:

8.1. En forma privativa, planificar, asignar, gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético.

8.2. En forma privativa planificar, asignar y gestionar el uso del gas combustible en cuanto sea económica y técnicamente posible, a través de empresas oficiales, mixtas o privadas.

8.3. Asegurar que se realicen en el país, por medio de empresas oficiales, mixtas o privadas, las actividades de generación e interconexión a las redes nacionales de energía eléctrica, la interconexión a la red pública de telecomunicaciones, y las actividades de comercialización, construcción y operación de gasoductos y de redes para otros servicios que surjan por el desarrollo tecnológico y que requieran redes de interconexión, según concepto previo del Consejo Nacional de Política Económica y Social.

8.4. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos y a las empresas cuyo capital pertenezca mayoritariamente a una o varias cooperativas o empresas asociativas de naturaleza cooperativa.

8.5. Velar porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales servicios.

8.6. Prestar directamente cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente ley.

8.7. Las demás que le asigne la ley.

**ARTÍCULO 9. DERECHO DE LOS USUARIOS.**

Los usuarios de los servicios públicos tienen derecho, además de los consagrados en el Estatuto Nacional del Usuario y demás normas que consagren derechos a su favor, siempre que no contradigan esta ley, a:

9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de las empresas o a las categorías de los municipios establecida por la ley.

9.2. La libre elección del prestador del servicio y del proveedor de los bienes necesarios para su obtención o utilización.

9.3. Obtener los bienes y servicios ofrecidos en calidad o cantidad superior a las proporcionadas de manera masiva, siempre que ello no perjudique a terceros y que el usuario asuma los costos correspondientes.

9.4. Solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no se trate de información calificada como secreta o reservada por la ley y se cumplan los requisitos y condiciones que señale la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

*Parágrafo:* Las comisiones de regulación, en el ejercicio de las funciones conferidas por las normas vigentes, no podrán desmejorar los derechos de los usuarios reconocidos por la ley.



#### **ARTÍCULO 10. LIBERTAD DE EMPRESA.**

Es derecho de todas las personas organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, dentro de los límites de la Constitución y la ley.

#### **ARTÍCULO 11. FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

Para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, las entidades que presten servicios públicos tienen las siguientes obligaciones:

11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a terceros.

11.2. Abstenerse de prácticas monopolísticas o restrictivas de la competencia, cuando exista, de hecho, la posibilidad de la competencia.

11.3. Facilitar a los usuarios de menores ingresos el acceso a los subsidios que otorguen las autoridades.

11.4. Informar a los usuarios acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad el servicio público respectivo.

11.5. Cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su actividad los afecte, protegerán la diversidad e integridad del ambiente, y conservarán las áreas de especial importancia ecológica, conciliando estos objetivos con la necesidad de aumentar la cobertura y la costeabilidad de los servicios por la comunidad.

11.6. Facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidades que prestan servicios públicos, o que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la organización y prestación de los servicios.

11.7. Colaborar con las autoridades en casos de emergencia o de calamidad pública, para impedir perjuicios graves a los usuarios de servicios públicos.

11.8. Informar el inicio de sus actividades a la respectiva Comisión de Regulación, y a la Superintendencia de Servicios Públicos, para que esas autoridades puedan cumplir sus funciones. Las empresas que a la expedición de esta ley estén funcionando deben informar de su existencia a estos organismos en un plazo máximo de sesenta (60) días.

11.9. Las empresas de servicios serán civilmente responsables por los perjuicios ocasionados a los usuarios y están en la obligación de repetir contra los administradores, funcionarios y contratistas que sean responsables por dolo o culpa sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

11.10. Las demás previstas en esta ley y las normas concordantes y complementarias.

*Parágrafo:* Los actos administrativos de carácter individual no sancionatorios que impongan obligaciones o restricciones a quienes presten servicios públicos y afecten su rentabilidad, generan responsabilidad y derecho a indemnización, salvo que se trate de decisiones que se hayan dictado también para las demás personas ubicadas en la misma situación.

#### **ARTÍCULO 12. DEBERES ESPECIALES DE LOS USUARIOS DEL SECTOR OFICIAL.**

El incumplimiento de las entidades oficiales de sus deberes como usuarios de servicios públicos, especialmente en lo relativo a la incorporación

en los respectivos presupuestos de apropiaciones suficientes y al pago efectivo de los servicios utilizados, es causal de mala conducta para sus representantes legales y los funcionarios responsables, sancionable con destitución.

#### ARTÍCULO 13. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES.

Los principios que contiene este capítulo se utilizarán para resolver cualquier dificultad de interpretación al aplicar las normas sobre los servicios públicos a los que esta u otras leyes se refieren, y para suplir los vacíos que ellas presenten.

---

## Capítulo II

---

### DEFINICIONES ESPECIALES

#### ARTÍCULO 14. DEFINICIONES.

Para interpretar y aplicar esta ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

14.1. *Acometida*. Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general. Para el caso de alcantarillado la acometida es la derivación que parte de la caja de inspección y llega hasta el colector de la red local.

14.2. *Actividad complementaria de un servicio público*. Son las actividades a las que también se aplica esta ley, según la precisión que se hace adelante, al definir cada servicio público. Cuando en esta ley se mencionen los servicios públicos, sin hacer precisión especial, se entienden incluidas tales actividades.

14.3. *Costo mínimo optimizado*. Es el que resulta de un plan de expansión de costo mínimo.

14.4. *Economías de aglomeración*. Las que obtiene una empresa que produce o presta varios bienes o servicios.

14.5. *Empresa de servicios públicos oficial*. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.

14.6. *Empresa de servicios públicos mixta*. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%.

14.7. *Empresa de servicios públicos privada*. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares.

14.8. *Estratificación socioeconómica*. Es la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en atención a los factores y procedimientos que determina la ley.

14.9. *Factura de servicios públicos*. Es la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos.

14.10. *Libertad regulada*. Régimen de tarifas mediante el cual la comisión de regulación respectiva fijará los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las empresas de servicios públicos

domiciliarios pueden determinar o modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor.

14.11. *Libertad vigilada.* Régimen de tarifas mediante el cual las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden determinar libremente las tarifas de venta a medianos y pequeños consumidores, con la obligación de informar por escrito a las comisiones de regulación, sobre las decisiones tomadas sobre esta materia.

14.12. *Plan de expansión de costo mínimo.* Plan de inversión a mediano y largo plazo, cuya factibilidad técnica, económica, financiera, y ambiental, garantiza minimizar los costos de expansión del servicio. Los planes oficiales de inversión serán indicativos y se harán con el propósito de garantizar continuidad, calidad, y confiabilidad en el suministro del servicio.

14.13. *Posición dominante.* Es la que tiene una empresa de servicios públicos respecto a sus usuarios; y la que tiene una empresa, respecto al mercado de sus servicios y de los sustitutos próximos de éste, cuando sirve al 25% o más de los usuarios que conforman el mercado.

14.14. *Prestación directa de servicios por un municipio.* Es la que asume un municipio, bajo su propia personalidad jurídica, con sus funcionarios y con su patrimonio.

14.15. *Productor marginal, independiente o para uso particular.* Es la persona natural o jurídica que desee utilizar sus propios recursos para producir los bienes o servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos para sí misma o para una clientela compuesta principalmente por quienes tienen vinculación económica con ella o por sus socios o miembros o como subproducto de otra actividad principal.

14.16. *Red interna.* Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el

sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor. Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a partir del registro de corte general cuando lo hubiere.

14.17. *Red local.* Es el conjunto de redes o tuberías que conforman el sistema de suministro del servicio público a una comunidad en el cual se derivan las acometidas de los inmuebles. La construcción de estas redes se registrará por el Decreto 951 de 1989, siempre y cuando éste no contradiga lo definido en esta ley.

14.18. *Regulación de los servicios públicos domiciliarios.* La facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos.

14.19. *Saneamiento básico.* Son las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo.

14.20. *Servicios públicos.* Son todos los servicios y actividades complementarias a los que se aplica esta ley.

14.21. *Servicios públicos domiciliarios.* Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible, tal como se definen en este capítulo.

14.22. *Servicio público domiciliario de acueducto.* Llamado también servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.

14.23. *Servicio público domiciliario de alcantarillado.* Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos.

14.24. *Servicio público domiciliario de aseo.* Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.

14.25. *Servicio público domiciliario de energía eléctrica.* Es el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de generación, de comercialización, de transformación, interconexión y transmisión.

14.26. *Servicio público domiciliario de telefonía pública básica conmutada.* Es el servicio básico de telecomunicaciones, uno de cuyos objetos es la transmisión conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada con acceso generalizado al público, en un mismo municipio. También se aplicará esta ley a la actividad complementaria de telefonía móvil rural y al servicio de larga distancia nacional e internacional. Exceptúase la telefonía móvil celular, la cual se regirá, en todos sus aspectos por la ley 37 de 1993 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyen.

14.27. *Servicio público de larga distancia nacional e internacional.* Es el servicio público de telefonía básica conmutada que se presta entre

localidades del territorio nacional o entre estas en conexión con el exterior.

14.28. *Servicio público domiciliario de gas combustible.* Es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria.

14.29. *Subsidio.* Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio, y el costo de éste, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe.

14.30. *Superintendencia de servicios públicos.* Es una persona de derecho público adscrita al Ministerio de Desarrollo que tendrá las funciones y la estructura que la ley determina. En la presente ley se aludirá a ella por su nombre, o como «Superintendencia de servicios públicos» o simplemente, «Superintendencia».

14.31. *Suscriptor.* Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.

14.32. *Suscriptor Potencial.* Persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario de los servicios públicos

14.33. *Usuario.* Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor.





14.34. *Vinculación económica.* Se entiende que existe vinculación económica en todos los casos que definen las legislaciones comercial y tributaria. En caso de conflicto, se preferirá esta última.



## De las personas prestadoras de servicios públicos

### ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS.

Pueden prestar los servicios públicos:

15.1. Las empresas de servicios públicos.

15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos.

15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta ley.

15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.

15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en esta ley.

15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el párrafo del Artículo 17.

### ARTÍCULO 16. APLICACIÓN DE LA LEY A LOS PRODUCTORES DE SERVICIOS MARGINALES, INDEPENDIENTE O PARA USO PARTICULAR.

Los productores de servicios marginales o para uso particular se someterán a los artículos 25 y 26 de esta ley. Y estarán sujetos también a las demás normas pertinentes de esta ley, todos los actos o contratos que celebren para suministrar los bienes o servicios cuya prestación sea parte del objeto de las empresas de servicios públicos, a otras personas en forma masiva, o a cambio de cualquier clase de remuneración, o gratuitamente a quienes tengan vinculación económica con ellas según la ley, o en cualquier manera que pueda reducir las condiciones de competencia. Las personas jurídicas a las que se refiere este artículo, no estarán obligadas a organizarse como empresas de servicios públicos, salvo por orden de una comisión de regulación. En todo caso se sobreentiende que los productores de servicios marginales, independientes o para uso particular de energía eléctrica están sujetos a lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 99 de 1993.

*Parágrafo:* Cuando haya servicios públicos disponibles de acueducto y saneamiento básico será obligatorio vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad. La Superintendencia de Servicios Públicos será la entidad competente para determinar si la alternativa propuesta no causa perjuicios a la comunidad.

Las autoridades de policía, de oficio o por solicitud de cualquier persona procederán a sellar los inmuebles residenciales o abiertos al público, que estando ubicados en zonas en las que se pueden



recibir los servicios de acueducto y saneamiento básico no se hayan hecho usuarios de ellos y conserven tal carácter.

---

## Capítulo I

---

### RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

#### ARTÍCULO 17. NATURALEZA.

Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta ley.

*Parágrafo 1.:* Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del estado.

Mientras la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política no disponga otra cosa, sus presupuestos serán aprobados por las correspondientes juntas directivas. En todo caso, el régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten servicios públicos, en todo lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en esta ley. La Superintendencia de Servicios Públicos podrá exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que presten servicios públicos y no hayan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a lo dispuesto en esta ley.

*Parágrafo 2.:* Las empresas oficiales de servicios públicos deberán, al finalizar el ejercicio fiscal, constituir reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas.

#### ARTÍCULO 18. OBJETO.

La empresa de servicios públicos tiene como objeto la prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se aplica esta ley, o realizar una o varias de las actividades complementarias, o una y otra cosa.

Las comisiones de regulación podrán obligar a una empresa de servicios públicos a tener un objeto exclusivo cuando establezcan que la multiplicidad del objeto limita la competencia y no produce economías de escala o de aglomeración en beneficio del usuario. En todo caso, las empresas de servicios públicos que tengan objeto social múltiple deberán llevar contabilidad separada para cada uno de los servicios que presten; y el costo y la modalidad de las operaciones entre cada servicio deben registrarse de manera explícita.

Las empresas de servicios públicos podrán participar como socias en otras empresas de servicios públicos; o en las que tengan como objeto principal la prestación de un servicio o la provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto, si no hay ya una amplia oferta de este bien o servicio en el mercado. Podrán también asociarse, en desarrollo de su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o formar consorcios con ellas.

*Parágrafo:* Independientemente de su objeto social, todas las personas jurídicas están facultadas para hacer inversiones en empresas de servicios públicos. En el objeto de las comunidades organizadas siempre se entenderá incluida la facultad de promover y constituir empresas de servicios públicos, en las condiciones de esta ley y de la ley que las regule. En los concursos públicos a los que se

refiere esta ley se preferirá a las empresas en que tales comunidades tengan mayoría, si estas empresas se encuentran en igualdad de condiciones con los demás participantes.

**ARTÍCULO 19. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

Las empresas de servicios públicos se someterán al siguiente régimen jurídico:

19.1. El nombre de la empresa deberá ser seguido por las palabras «empresa de servicios públicos» o de las letras «E.S.P.».

19.2. La duración podrá ser indefinida.

19.3. Los aportes de capital podrán pertenecer a inversionistas nacionales o extranjeros.

19.4. Los aumentos del capital autorizado podrán disponerse por decisión de la Junta Directiva, cuando se trate de hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de su objeto, y hasta por el valor que aquellas tengan. La empresa podrá ofrecer, sin sujeción a las reglas de oferta pública de valores ni a las previstas en los artículos 851, 853, 855, 856 y 858 del Código de Comercio, las nuevas acciones a los usuarios que vayan a ser beneficiarios de las inversiones, quienes en caso de que las adquieran, las pagarán en los plazos que la empresa establezca, simultáneamente con las facturas del servicio.

19.5. Al constituir la empresa, los socios acordarán libremente la parte del capital autorizado que se suscribe.

19.6. Serán libres la determinación de la parte del valor de las acciones que deba pagarse en el momento de la suscripción, y la del plazo para el pago de la parte que salga a deberse. Pero la empresa informará, siempre, en sus estados financieros, qué parte de su capital ha sido pagado y cual no.

19.7. El avalúo de los aportes en especie que reciban las empresas no requiere aprobación de autoridad administrativa alguna; podrá hacerse por la asamblea preliminar de accionistas fundadores, con el voto de las dos terceras partes de los socios, o por la Junta Directiva, según dispongan los estatutos. En todo caso los avalúos estarán sujetos a control posterior de la autoridad competente.

19.8. Las empresas podrán funcionar aunque no se haya hecho el registro prescrito en el artículo 756 del Código Civil para los actos relacionados con la propiedad inmueble, relacionados con su constitución. Es deber de los aportantes y de los administradores emplear la mayor diligencia para conseguir que se hagan tales registros, y mientras ello no ocurra, no se tendrán por pagados los aportes respectivos. Quienes se aprovechen de la ausencia de registro para realizar acto alguno de disposición o gravamen respecto de los bienes o derechos que sobre tales bienes tenga la empresa, en perjuicio de ella, cometen delito de estafa, y el acto respectivo será absolutamente nulo.

19.9. En las asambleas los socios podrán emitir tantos votos como correspondan a sus acciones; pero todas las decisiones requieren el voto favorable de un número plural de socios.

19.10. La emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad; pero si se va a hacer oferta pública de ellas a personas distintas de los usuarios que hayan de beneficiarse con inversiones en infraestructura se requiere inscripción en el Registro Nacional de Valores.

19.11. Las actas de las asambleas deberán conservarse; y se deberá enviar copia de ellas y de los balances y estados de pérdidas y ganancias a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia tendrá en relación con los balances y el estado de pérdidas y ganancias las facultades de que trata el artículo 448 del Código de Comercio. También será necesario remitir dichos

documentos a la entidad pública que tenga la competencia por la prestación del servicio o a la comisión de regulación cuando alguna de ellas o un socio lo soliciten.

19.12. La empresa no se disolverá sino por las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 457 del Código de Comercio, o en el evento de que todas las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un accionista.

19.13. Si se verifica una de las causales de disolución, los administradores están obligados a realizar aquellos actos y contrato que sean indispensables para no interrumpir la prestación de los servicios a cargo de la empresa, pero darán aviso inmediato a la autoridad competente para la prestación del servicio y a la Superintendencia de servicios públicos, y convocarán inmediatamente a la asamblea general para informar de modo completo y documentado dicha situación. De ninguna manera se ocultará a los terceros con quienes negocie la sociedad la situación en que esta se encuentra; el ocultamiento hará solidariamente responsables a los administradores por las obligaciones que contraigan y los perjuicios que ocasionen.

19.14. En los estatutos se advertirá que las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, han de someterse a la decisión arbitral; las decisiones de los árbitros estarán sujetas a control judicial por medio del recurso de anulación del laudo o del recurso extraordinario de revisión, en los casos y por los procedimientos previstos en las leyes.

19.15. En lo demás, las empresas de servicios públicos se registrarán por las reglas del Código de Comercio sobre sociedades anónimas.

19.16. La composición de las juntas directivas de las empresas que presten servicios públicos domiciliarios se regirá únicamente por la ley y sus estatutos en los cuales se establecerá que en ellas

exista representación directamente proporcional a la propiedad accionaria.

19.17. El en caso de empresas mixtas, cuando el aporte estatal consista en el usufructo de los bienes vinculados a la prestación del servicio público, su suscripción, avalúo y pago, se registrarán íntegramente por el derecho privado, aporte que de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, incluirá la regulación de las obligaciones del usufructuario, en especial en lo que se refiere a las expensas ordinarias de conservación y a las causales de la restitución de los bienes aportados.

#### **ARTÍCULO 20. RÉGIMEN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES.**

Las empresas de servicios públicos que operen exclusivamente en uno de los municipios clasificados como menores según la ley, y de acuerdo a reglamentación previa de la comisión reguladora pertinente, podrán apartarse de lo previsto en el artículo precedente en los siguientes aspectos:

20.1. Podrán constituirse por medio de documento privado, que debe cumplir con las estipulaciones del artículo 110 del Código de Comercio, en lo pertinente, y funcionar con dos o más socios.

20.2. Los títulos representativos de capital que expidan podrán ser objeto de endoso en administración para celebrar respecto a ellos el contrato de depósito de valores, prescindiendo de si están o no inscritos en el Registro Nacional de Valores.

Es deber de los alcaldes, personeros e inspectores de policía custodiar temporalmente, por petición de los tenedores, los títulos a los que se refiere el inciso anterior, y atender las instrucciones de los tenedores, para facilitar su depósito, en una sociedad administradora de depósitos centrales de valores.

Los mismos funcionarios tomarán las medidas que les permitan verificar la legitimidad, integridad y autenticidad de los valores que se les encomiendan, y expedirán el correspondiente recibo de constancia, con copia para los tenedores y su archivo.

El Gobierno reglamentará la materia.

#### **ARTÍCULO 21. ADMINISTRACIÓN COMÚN.**

La comisión de regulación respectiva podrá autorizar a una empresa de servicios públicos a tener administradores comunes con otra que opere en un territorio diferente, en la medida en la que ello haga más eficiente las operaciones y no reduzca la competencia.

#### **ARTÍCULO 22. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.**

Las empresas de servicios públicos debidamente constituidas y organizadas no requieren permiso para desarrollar su objeto social, pero para poder operar deberán obtener de las autoridades competentes, según sea el caso, las concesiones, permisos y licencias de que tratan los artículos 25 y 26 de esta ley, según la naturaleza de sus actividades.

#### **ARTÍCULO 23. ÁMBITO TERRITORIAL DE OPERACIÓN.**

Las empresas de servicios públicos pueden operar en igualdad de condiciones en cualquier parte del país, con sujeción a las reglas que rijan en el territorio del correspondiente departamento o municipio.

Igualmente, conforme a lo dispuesto por las normas cambiarias o fiscales, las empresas podrán desarrollar su objeto en el exterior sin necesidad de permiso adicional de las autoridades colombianas.

La obtención en el exterior de agua, gas combustible, energía o acceso a redes, para beneficio de usuarios en Colombia, no estará sujeta a restricciones ni a contribución alguna arancelaria o de otra naturaleza, ni a permisos administrativos distintos de los que se apliquen a actividades internas de la misma clase, pero sí a las normas cambiarias y fiscales comunes. Las comisiones de regulación, sin embargo, podrán prohibir que se facilite a usuarios en el exterior el agua, el gas combustible, la energía, o el acceso a redes, cuando haya usuarios en Colombia a quienes exista la posibilidad física y financiera de atender, pero cuya demanda no hubiese sido satisfecha a las tarifas que resulten de las fórmulas aprobadas por las comisiones.

#### **ARTÍCULO 24. RÉGIMEN TRIBUTARIO.**

Todas las entidades prestadoras de servicios públicos están sujetas al régimen tributario nacional y de las entidades territoriales, pero se observarán estas reglas especiales:

24.1. Los departamentos y los municipios podrán gravar a las empresas de servicios públicos con tasas, contribuciones o impuestos que sean aplicables a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales o comerciales.

24.2. Por un período de siete años exímase a las empresas de servicios públicos domiciliarios de orden municipal, sean ellas de naturaleza privada, oficial o mixta, del pago del impuesto de renta y complementarios sobre las utilidades que se capitalicen o que se constituyan en reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas.

24.3. Las empresas de servicios públicos domiciliarios no estarán sometidas a la renta

presuntiva establecida en el Estatuto Tributario vigente.

24.4. Por un término de diez años a partir de la vigencia de esta ley, las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas y, en general, todas las empresas asociativas de naturaleza cooperativa podrán deducir de la renta bruta las inversiones que realicen en empresas de servicios públicos.

24.5. La exención del impuesto de timbre que contiene el Estatuto Tributario en el artículo 530, numeral 17, para los acuerdos celebrados entre acreedores y deudores de un establecimiento, con intervención de la superintendencia bancaria, cuando ésta se halle en posesión de dicho establecimiento, se aplicará a los acuerdos que se celebren con ocasión de la iliquidez o insolvencia de una empresa de servicios públicos, que haya dado lugar a la toma de posesión o a la orden de liquidación de la empresa.

#### **ARTÍCULO 25. CONCESIONES, Y PERMISOS AMBIENTALES Y SANITARIOS.**

Quienes presten servicios públicos requieren contratos de concesión, con las autoridades competentes según la ley, para usar las aguas; para usar el espectro electromagnético en la prestación de servicios públicos requerirán licencia o contrato de concesión.

Deberán además, obtener los permisos ambientales y sanitarios que la índole misma de sus actividades haga necesarios, de acuerdo con las normas comunes.

Asimismo, es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en el mantenimiento y recuperación del bien público explotado a través de contratos de concesión.

Si se trata de la prestación de los servicios de agua potable o saneamiento básico, de conformidad con la distribución de competencias dispuestas por la ley, las autoridades competentes verificarán la idoneidad técnica y solvencia financiera del solicitante para efectos de los procedimientos correspondientes.

#### **ARTÍCULO 26. PERMISOS MUNICIPALES.**

En cada municipio, quienes prestan servicios públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen.

Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de sus redes.

Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la competencia.

**PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS  
EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**ARTÍCULO 27. REGLAS ESPECIALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS.**

La Nación, las entidades territoriales, y las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo que participen a cualquier título en el capital de las empresas de servicios públicos, están sometidas a las siguientes reglas especiales:

27.1. No podrán otorgar ni recibir de las empresas privilegio o subsidio distinto de los que en esta ley se precisan.

27.2. Podrán enajenar sus aportes, para lo cual se tendrán en cuenta sistemas que garanticen una adecuada publicidad y la democratización de la propiedad de conformidad con esta ley y en desarrollo del precepto contenido en el artículo 60 de la Constitución Política.

27.3. Deberán exigir a las empresas de servicios públicos, una administración profesional, ajena a intereses partidistas, que tenga en cuenta las necesidades de desarrollo del servicio en el mediano y largo plazo. Al mismo tiempo es derecho suyo fijar los criterios de administración y de eficiencia específicos que deben buscar en tales empresas las personas que representen sus derechos en ellas, en concordancia con los criterios generales que fijen las comisiones de regulación.

Para estos efectos, las entidades podrán celebrar contratos de fiducia o mandato para la administración profesional de sus acciones en las empresas de servicios públicos, con las personas que hagan las ofertas mas convenientes, previa invitación pública.

27.4. En las empresas de servicios públicos con aportes oficiales son bienes de la Nación, de las

entidades territoriales, o de las entidades descentralizadas, los aportes hechos por ellas al capital, los derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los dividendos que puedan corresponderles. A tales bienes, y a los actos o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se aplicará la vigilancia de la Contraloría General de la República, y de las contralorías departamentales y municipales, mientras las empresas no hagan uso de la autorización que se concede en el inciso siguiente.

El control podrá ser realizado por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos y contratadas previo concepto del Consejo de Estado o del Tribunal Administrativo competente, según se trate de acciones o aportes nacionales o de las entidades territoriales.

27.5. Las autoridades de las entidades territoriales, sin perjuicio de las competencias asignadas por la ley, garantizarán a las empresas oficiales de servicios públicos, el ejercicio de su autonomía administrativa y la continuidad en la gestión gerencial que demuestre eficacia y eficiencia. No podrán anteponer a tal continuidad gerencial, intereses ajenos a los de la buena prestación del servicio.

27.6. Los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de los servicios públicos domiciliarios serán escogidos por el Presidente, el gobernador o el alcalde, según se trate de empresas nacionales, departamentales o municipales de servicios públicos domiciliarios. En el caso de las Juntas Directivas de las Empresas oficiales de los Servicios Públicos Domiciliarios del orden Municipal, estos serán designados así: dos terceras partes serán designados libremente por el Alcalde y la otra tercera parte escogida entre los vocales de control registrados por los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios.

27.7. Los aportes efectuados por la nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo a las empresas



de servicios públicos, se regirán en un todo por las normas del derecho privado.

---

### Capítulo III

---

## LOS BIENES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

### ARTÍCULO 28. REDES.

Todas las empresas tienen el derecho a construir, operar y modificar sus redes e instalaciones para prestar los servicios públicos, para lo cual cumplirán con los mismos requisitos, y ejercerán las mismas facultades que las leyes y demás normas pertinentes establecen para las entidades oficiales que han estado encargadas de la prestación de los mismos servicios, y las particulares previstas en esta ley.

Las empresas tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales, cuyos costos serán a cargo de ellas.

Las comisiones de regulación pueden exigir que haya posibilidad de interconexión y de homologación técnica de las redes, cuando sea indispensable para proteger a los usuarios, para garantizar la calidad del servicio o para promover la competencia. Pero en ningún caso exigirán características específicas de redes o sistemas más allá de las que sean necesarias para garantizar la interconectabilidad de servicios análogos o el uso coordinado de recursos. Las comisiones podrán exigir, igualmente, que la construcción y operación de

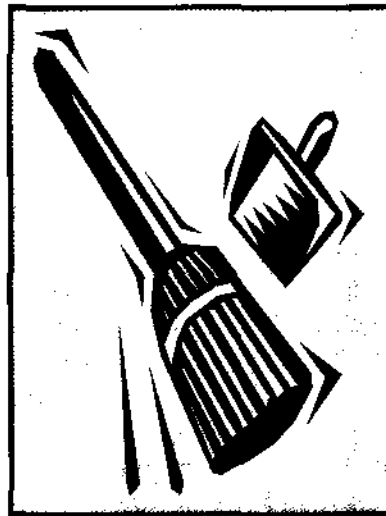
redes y medios de transporte para prestar los servicios públicos no sea parte del objeto de las mismas empresas que tienen a su cargo la distribución y, además, conocerán en apelación los recursos contra los actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción u operación de redes. La construcción y operación de redes para el transporte y distribución de agua, residuos, electricidad, gas, telefonía pública básica conmutada, y telefonía local móvil en el sector rural, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se regirán exclusivamente por esta ley y por las normas ambientales, sanitarias y municipales a las que se alude en los artículos 25 y 26 de esta ley.

### ARTÍCULO 29. AMPARO POLICIVO.

Las autoridades nacionales, departamentales y municipales, tanto civiles como de policía, inmediatamente se lo solicite una empresa de servicios públicos, le prestarán su apoyo para hacer que se le restituyan los inmuebles que los particulares hayan ocupado contra la voluntad o sin conocimiento de la empresa; o para que cesen los actos que entorpezcan o amenacen perturbar, en cualquier tiempo, el ejercicio de sus derechos.

La autoridad respectiva ordenará el retiro de los ocupantes del inmueble o el cese de la perturbación, o de la amenaza de ella, conminando

a los perturbadores con multas de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, por cada semana o fracción de demora transcurrida desde la fecha de la respectiva resolución, y sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes. En todo caso, en ejercicio de tales procedimientos, se respetará el principio del debido proceso garantizado por el artículo 29 de la Constitución Política.





## Régimen de Actos y Contratos de las Empresas

### Capítulo I

#### NORMAS GENERALES

##### ARTÍCULO 30. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN.

Las normas que esta ley contiene sobre contratos se interpretarán de acuerdo con los principios que contiene el título preliminar; en la forma que mejor garantice la libre competencia y que mejor impida los abusos de la posición dominante, tal como ordena el artículo 333 de la Constitución Política; y que mas favorezca la continuidad y calidad en la prestación de los servicios.

##### ARTÍCULO 31. CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y por la presente ley, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa.

Las comisiones de regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de

cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la ley 80 de 1993, y los actos en los que se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa.

##### ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS.

Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce.

Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de una empresa de servicios públicos organizada como sociedad por acciones, faculta a su representante legal, de acuerdo con los estatutos de la entidad, para realizar respecto de la sociedad, las acciones y los derechos inherentes a ellas todos los actos que la ley y los estatutos permiten a los socios particulares.

##### ARTÍCULO 33. FACULTADES ESPECIALES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Quienes presten servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles,

y para promover la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

**ARTÍCULO 34. PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS, ABUSIVAS O RESTRICTIVAS.**

Las empresas de servicios públicos, en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y discriminaciones injustificados, y abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar competencia desleal o de restringir en forma indebida la competencia.

Se consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras, las siguientes:

34.1. El cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio;

34.2. La prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo, de servicios adicionales a los que contempla la tarifa;

34.3. Los acuerdos con otras empresas para repartirse cuotas o clases de servicios, o para establecer tarifas, creando restricciones de oferta o elevando las tarifas por encima de lo que ocurriría en condiciones de competencia;

34.4. Cualquier clase de acuerdo con eventuales opositores o competidores durante el trámite de cualquier acto o contrato en el que deba haber citaciones al público o a eventuales competidores, y que tenga como propósito o como efecto modificar el resultado que se habría obtenido en plena competencia;

34.5. Las que describe el Título V del Libro I del Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) sobre competencia desleal;

34.6. El abuso de la posición dominante al que se refiere el artículo 133 de esta ley, cualquiera que sea la otra parte contratante y en cualquier clase de contratos.

**ARTÍCULO 35. DEBER DE BUSCAR ENTRE EL PÚBLICO LAS MEJORES CONDICIONES OBJETIVAS.**

Las empresas de servicios públicos que tengan posición dominante en un mercado, y cuya principal actividad sea la distribución de bienes o servicios provistos por terceros, tendrán que adquirir el bien o servicio que distribuyan por medio de procedimientos que aseguren posibilidad de concurrencia a los eventuales contratistas, en igualdad de condiciones. En estos casos, y en los de otros contratos de las empresas, las comisiones de regulación podrán exigir, por vía general, que se celebren previa licitación pública, o por medio de otros procedimientos que estimulen la concurrencia de oferentes.

**ARTÍCULO 36. REGLAS CONTRACTUALES ESPECIALES.**

Se aplicarán a los contratos de las empresas de servicios públicos las siguientes reglas especiales:

36.1. Podrá convenirse que la constitución en mora no requiera pronunciamiento judicial.

36.2. Las donaciones que se hagan a las empresas de servicios públicos no requieren insinuación judicial.

36.3. A falta de estipulación de las partes, se entiende que se causan intereses corrientes a una tasa mensual igual al promedio de las tasas activas

del mercado y por la mora, a una tasa igual a la máxima permitida por la ley para las obligaciones mercantiles.

36.4. Si una de las partes renuncia total o parcialmente, y en forma temporal o definitiva, a uno de sus derechos contractuales, ello no perjudica a los demás, y mientras tal renuncia no lesione a la otra parte, no requiere el consentimiento de ésta, ni formalidad o solemnidad alguna.

36.5. La negociación, celebración y modificación de los contratos de garantía que se celebren para proteger a las empresas de servicios públicos se someterán a las reglas propias de tales contratos aun si, para otros efectos, se considera que son parte integrante del contrato que garantizan.

36.6. Está prohibido a las instituciones financieras celebrar contratos con empresas de servicios públicos oficiales para facilitarles recursos, cuando se encuentren incumpliendo los indicadores de gestión a los que deben estar sujetas, mientras no acuerden un plan de recuperación con la comisión encargada de regularlas.

#### **ARTÍCULO 37. DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD INTERPUESTA.**

Para los efectos de analizar la legalidad de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos, de las comisiones de regulación, de la Superintendencia y de las demás personas a las que esta ley crea incompatibilidades o inhabilidades, debe tenerse en cuenta quiénes son, sustancialmente, los beneficiarios reales de ellos, y no solamente las personas que formalmente los dictan o celebran. Por consiguiente, las autoridades administrativas y judiciales harán prevalecer el resultado jurídico que se obtenga al considerar el beneficiario real, sin perjuicio del derecho de las personas de probar que actúan en procura de intereses propios, y no para hacer fraude a la ley.

#### **ARTÍCULO 38. EFECTOS DE NULIDAD SOBRE ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON SERVICIOS PÚBLICOS.**

La anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos solo producirá efectos hacia el futuro. Si al declararse la nulidad se ordena el restablecimiento del derecho o la reparación del daño, ello se hará en dinero si es necesario, para no perjudicar la prestación del servicio al público ni los actos o contratos celebrados de buena fe.

---

## Capítulo II

---

### **CONTRATOS ESPECIALES PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

#### **ARTÍCULO 39. CONTRATOS ESPECIALES.**

Para los efectos de la gestión de los servicios públicos se autoriza la celebración, entre otros, de los siguientes contratos especiales:

39.1. *Contratos de concesión para el uso de recursos naturales o del medio ambiente.* El contrato de concesión de aguas, es un contrato limitado en el tiempo, que celebran las entidades a las que corresponde la responsabilidad de administrar aquellas, para facilitar su explotación o disfrute. En estos contratos se pueden establecer las condiciones en las que el concesionario devolverá el agua después de haberla usado.

El acceso al espectro electromagnético para el servicio público de telecomunicaciones puede otorgarse por medio de un contrato de concesión, de acuerdo con la ley 80 de 1993 y las leyes especiales pertinentes, pero sin que se aplique el artículo 19 de la ley 80 de 1993 a bienes distintos de los estatales.

La remuneración que se pacte por una concesión o licencia ingresará al presupuesto de la entidad pública que celebre el contrato o expida el acto.

Cuando las autoridades competentes consideren que es preciso realizar un proyecto de interés nacional para aprovechamiento de aguas, o para proyectos de saneamiento, podrán tomar la iniciativa de invitar públicamente a las empresas de servicios públicos para adjudicar la concesión respectiva.

Las concesiones de agua caducarán a los tres años de otorgadas, si en ese lapso no se hubieren hecho inversiones capaces de permitir su aprovechamiento económico dentro del año siguiente, o del período que determine de modo general, según el tipo de proyecto, la comisión reguladora.

Los contratos de concesión a los que se refiere este numeral se registrarán por las normas especiales sobre las materias respectivas.

*39.2. Contratos de administración profesional de acciones.* Son aquellos celebrados por las entidades públicas que participan en el capital de empresas de servicios públicos, para la administración o disposición de sus acciones, aportes o inversiones en ellas, con sociedades fiduciarias, corporaciones financieras, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, o sociedades creadas con el objeto exclusivo de administrar empresas de servicios públicos. Las tarifas serán las que se determinen en un proceso de competencia para obtener el contrato.

En estos contratos puede encargarse también al fiduciario o mandatario de vender las acciones de las entidades públicas en las condiciones y por los procedimientos que el contrato indique.

A los representantes legales y a los miembros de juntas directivas de las entidades que actúen como fiduciarios o mandatarios para administrar acciones de empresas de servicios públicos se aplicará

el régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los funcionarios que hayan celebrado con ellos el contrato respectivo, en relación con tales empresas.

*39.3. Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos, concesiones o similares;* o para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos; o para permitir que uno o más usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades públicas estén prestando; o para recibir de uno o más usuarios el valor de las obras necesarias para prestar un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para pagar con acciones de empresas los bienes o servicios que reciban.

*39.4. Contratos en virtud de los cuales dos o más entidades prestadoras de servicios públicos o éstas con grandes proveedores o usuarios, regulan el acceso compartido o de interconexión de bienes indispensables para la prestación de servicios públicos, mediante el pago de remuneración o peaje razonable.*

Este contrato puede celebrarse también entre una empresa de servicios públicos y cualquiera de sus grandes proveedores o usuarios.

Si las partes no se convienen, en virtud de esta ley la comisión de regulación podrá imponer una servidumbre de acceso o de interconexión a quien tenga el uso del bien.

*39.5. Contratos para la extensión de la prestación de un servicio* que, en principio, sólo beneficia a una persona, en virtud del cual ésta asume el costo de las obras respectivas y se obliga a pagar a la empresa el valor definido por ella, o se obliga a ejecutar independientemente las obras requeridas conforme al proyecto aprobado por la empresa;

*Parágrafo:* Salvo los contratos de que trata el numeral 39.1., todos aquellos a los que se refiere

este artículo se regirán por el derecho privado. Los que contemplan los numerales 39.1., 39.2. y 39.3., no podrán ser cedidos a ningún título, ni podrán darse como garantía, ni ser objeto de ningún otro contrato, sin previa y expresa aprobación de la otra parte.

Cuando cualquiera de los contratos a que este capítulo se refiere permita al contratista cobrar tarifas al público, que estén sujetas a regulación, el proponente debe incluir en su oferta la fórmula tarifaria que aplicaría.

#### **ARTÍCULO 40. AREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO.**

Por motivos de interés social y con el propósito de que la cobertura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, saneamiento ambiental, distribución domiciliaria de gas combustible por red y distribución domiciliaria de energía eléctrica, se pueda extender a las personas de menores ingresos, la entidad o entidades territoriales competentes, podrán establecer mediante invitación pública, áreas de

servicio exclusivas, en las cuales podrá acordarse que ninguna otra empresa de servicios públicos pueda ofrecer los mismos servicios en la misma área durante un tiempo determinado. Los contratos que se suscriban deberán en todo caso precisar el espacio geográfico en el cual se prestará el servicio, los niveles de calidad que debe asegurar el contratista y las obligaciones del mismo respecto del servicio. También podrán pactarse nuevos aportes públicos para extender el servicio.

*Parágrafo 1:* La comisión de regulación respectiva definirá, por vía general, cómo se verifica

la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo en los contratos; definirá los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse ellos; y, antes de que se abra una licitación que incluya estas cláusulas dentro de los contratos propuestos, verificará que ellas sean indispensables para asegurar la viabilidad financiera de la extensión de la cobertura a las personas de menores ingresos.

*Parágrafo 2:* Si durante la vigencia de estos contratos surgieren condiciones que permitan reducir los costos de prestación del servicio para un grupo de usuarios del área respectiva, las comisiones de regulación podrán permitir la entrada de nuevos oferentes a estas áreas, o la salida de un grupo de usuarios para que otro oferente les preste el servicio, manteniendo de todas formas el equilibrio económico del contrato de quien ostentaba el derecho al área de servicio exclusivo. Sin perjuicio de lo anterior, al cabo de un tiempo de celebrado el contrato la entidad pública que lo firmó podrá abrir una nueva licitación respecto del mismo contrato y si la gana una empresa distinta de aquella que tiene la concesión estará obligada a dejar indemne a ésta, según metodología que definirá previamente la comisión de regulación respectiva. Esta misma regla se aplicará a los contratos de concesión de gas que contengan cláusulas de áreas de servicio exclusivo.

#### **RÉGIMEN LABORAL**

##### **ARTÍCULO 41. APLICACIÓN DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.**

Las personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares

y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta ley. Las personas que presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta ley se acojan a lo establecido en el párrafo del artículo 17°, se registrarán por las normas establecidas en el inciso primero del artículo 5° del decreto ley 3135 de 1968.

#### **ARTÍCULO 42. INCENTIVOS.**

Las empresas de servicios públicos pueden adoptar planes de incentivos, para remunerar a todos quienes prestan servicios en ellas en función del desempeño y de los resultados de utilidades y de cobertura obtenidos.

#### **ARTÍCULO 43. ATENCIÓN DE OBLIGACIONES PENSIONALES.**

Las empresas de servicios públicos afiliarán a todos los trabajadores que vinculen a partir de la vigencia de esta ley, a una entidad especializada en la atención de pensiones a la cual harán los aportes que de acuerdo a la ley les correspondan; y no podrán asumir directamente las obligaciones pensionales.

Tratándose de los trabajadores ya vinculados a la vigencia de esta ley, para continuar prestando el servicio las personas prestadoras deben demostrar, en las condiciones y oportunidad señaladas por la respectiva comisión de regulación, que han hecho las provisiones financieras indispensables para atender las obligaciones pensionales.

#### **ARTÍCULO 44. CONFLICTO DE INTERESES; INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.**

Para los efectos del funcionamiento de las empresas de servicios públicos y de las autoridades competentes en la materia, se establecen las siguientes inhabilidades e incompatibilidades:

44.1. Salvo excepción legal, no podrán participar en la administración de las comisiones de regulación y de la Superintendencia de Servicios Públicos, ni contribuir con su voto o en forma directa o indirecta a la adopción de sus decisiones, las empresas de servicios públicos, sus representantes legales, los miembros de sus juntas directivas, las personas naturales que posean acciones en ellas, y quienes posean más del 10% del capital de sociedades que tengan vinculación económica con empresas de servicios públicos.

44.2. No podrá prestar servicios a las comisiones de regulación ni a la Superintendencia de Servicios Públicos, ninguna persona que haya sido administrador o empleado de una empresa de servicios públicos antes de transcurrir un año de terminada su relación con la empresa ni los cónyuges o compañeros permanentes de tales personas, ni sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Esta misma inhabilidad se predica de los empleados de las comisiones o de la Superintendencia, sus cónyuges o parientes en los mismos grados, respecto de empleos en las empresas.

Sin embargo, las personas aludidas pueden ejercitar ante las comisiones de regulación y ante la Superintendencia su derecho a pedir informaciones, a hacer peticiones, y a formular observaciones o a transmitir informaciones respecto a las decisiones que allí se tomen, o a los proyectos de decisiones que se les consulten.

44.3. No puede adquirir partes del capital de las entidades oficiales que prestan los servicios a los que se refiere esta ley y que se ofrezcan al sector privado, ni poseer por sí o por interpuesta persona

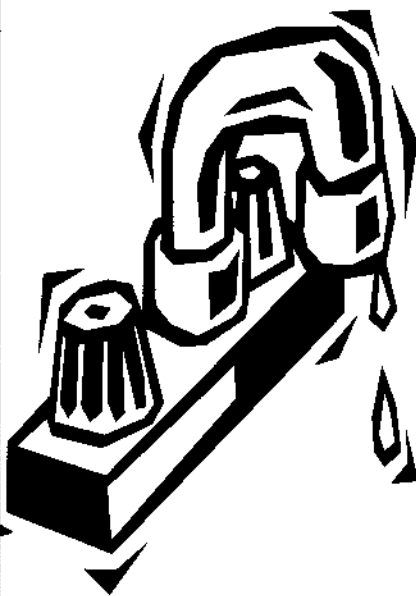
más del 1% de las acciones de una empresa de servicios públicos, ni participar en su administración o ser empleados de ella, ningún funcionario de elección popular, ni los miembros o empleados de las comisiones de regulación, ni quienes presten sus servicios en la Superintendencia de Servicios Públicos, o en los Ministerios de Hacienda, Salud, Minas y Energía, Desarrollo y Comunicaciones, ni en el Departamento Nacional de Planeación, ni quienes tengan con ellos los vínculos conyugales, de unión

o de parentesco arriba dichos. Si no cumplieren con las prohibiciones relacionadas con la participación en el capital en el momento de la elección, el nombramiento o la posesión, deberán desprenderse de su interés social dentro de los tres meses siguientes al día en el que entren a desempeñar sus cargos; y se autoriza a las empresas a adquirir tales intereses, si fuere

necesario, con recursos comunes, por el valor que tuviere en libros.

Se exceptúa de lo dispuesto, la participación de alcaldes, gobernadores y ministros, cuando ello corresponda, en las Juntas Directivas de las empresas oficiales y mixtas.

44.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas de esta ley, en los contratos de las entidades estatales que presten servicios públicos se aplicarán las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley 80 de 1993, en cuanto sean pertinentes.



## Otras Disposiciones

### Capítulo I

#### DEL CONTROL DE GESTIÓN Y RESULTADOS

##### ARTÍCULO 45. PRINCIPIOS RECTORES DEL CONTROL.

El propósito esencial del control empresarial es hacer coincidir los objetivos de quienes prestan servicios públicos con sus fines sociales y su mejoramiento estructural, de forma que se establezcan criterios claros que permitan evaluar sus resultados. El control empresarial es paralelo al control de conformidad o control numérico formal y complementario de éste.

El control debe lograr un balance, integrando los instrumentos existentes en materia de vigilancia, y armonizando la participación de las diferentes instancias de control.

Corresponde a las comisiones de regulación, teniendo en cuenta el desarrollo de cada servicio público y los recursos disponibles en cada localidad, promover y regular el balance de los mecanismos de control, y a la Superintendencia supervisar el cumplimiento del balance buscado.

##### ARTÍCULO 46. CONTROL INTERNO.

Se entiende por control interno el conjunto de actividades de planeación y ejecución, realizado por la administración de cada empresa para lograr que sus objetivos se cumplan.

El control interno debe disponer de medidas objetivas de resultado, o indicadores de gestión, alrededor de diversos objetivos, para asegurar su mejoramiento y evaluación.

**ARTÍCULO 47. PARTICIPACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA.**

Es función de la Superintendencia velar por la progresiva incorporación y aplicación del control interno en las empresas de servicios públicos. Para ello vigilará que se cumplan los criterios, evaluaciones, indicadores y modelos que definan las comisiones de regulación, y podrá apoyarse en otras entidades oficiales o particulares.

**ARTÍCULO 48. FACULTADES PARA ASEGURAR EL CONTROL INTERNO.**

Las empresas de servicios públicos podrán contratar con entidades privadas la definición y diseño de los procedimientos de control interno, así como la evaluación periódica de su cumplimiento, de acuerdo siempre a las reglas que establezcan las comisiones de regulación.

**ARTÍCULO 49. RESPONSABILIDAD POR EL CONTROL INTERNO.**

El control interno es responsabilidad de la gerencia de cada empresa de servicios públicos. La auditoría interna cumple responsabilidades de evaluación y vigilancia del control interno delegadas por la gerencia. La organización y funciones de la auditoría interna serán determinadas por cada empresa de servicios públicos.

**ARTÍCULO 50. CONTROL FISCAL.**

La vigilancia de la gestión fiscal de las empresas de servicios públicos, cuando se haga por parte de empresas contratadas para el efecto, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión, de legalidad y de resultados.

**ARTÍCULO 51. AUDITORÍA EXTERNA.**

Independientemente de los controles interno y fiscal, todas las empresas de servicios públicos

están obligadas a contratar una auditoría externa de gestión y resultados con personas privadas especializadas. Cuando una empresa de servicios públicos quiera cambiar a sus auditores externos, deberá solicitar permiso a la Superintendencia, informándole sobre las causas que la llevaron a esa decisión. La Superintendencia podrá negar la solicitud mediante resolución motivada.

La Auditoría externa obrará en función tanto de los intereses de la empresa y de sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios y, en consecuencia, está obligada a informar a la Superintendencia las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de una empresa, las fallas que encuentren en el control interno, y en general, las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la empresa. En todo caso, deberán elaborar además, al menos una vez al año, una evaluación del manejo de la empresa.

*Parágrafo:* A criterio de la Superintendencia, las entidades oficiales que presten los servicios públicos de que trata la presente ley quedarán eximidas de contratar este control si demuestran que el control fiscal e interno de que son objeto satisfacen a cabalidad los requerimientos de un control eficiente.

**ARTÍCULO 52. CONCEPTO DE CONTROL DE GESTIÓN Y RESULTADOS.**

El control de gestión y de resultados es un proceso que, dentro de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes con las previsiones.

Las comisiones de regulación definirán los criterios, características, indicadores y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las empresas.

*Parágrafo:* Las empresas de servicios públicos presentarán ante las oficinas o unidades de planeación o la unidad administrativa que haga sus



veces en el respectivo ministerio, para su aprobación, un plan de gestión y resultados de corto, mediano y largo plazo, que sirva de base para el control que deben ejercer las auditorías externas. Este plan deberá evaluarse y actualizarse anualmente, teniendo como base esencial lo definido por las comisiones de regulación de acuerdo con el inciso anterior. Estas oficinas de planeación o similares deberán establecer los mecanismos para el cumplimiento de esta norma en un término no inferior a seis (6) meses después de la vigencia de esta ley.

---

## Capítulo II

---

### INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

#### ARTÍCULO 53. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

Corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, establecer los sistemas de información que deben organizar y mantener actualizados las empresas de servicios públicos para que su presentación al público sea confiable.

En todo caso, las evaluaciones que los auditores externos hagan de las empresas de servi-

cios públicos, deberán ser publicadas por lo menos anualmente en medios masivos de comunicación en el territorio donde prestan el servicio, si los hubiere. Esta evaluación debe ser difundida ampliamente entre los usuarios.

Las entidades encargadas de prestar los servicios públicos domiciliarios deberán informar periódicamente de manera precisa, la utilización que dieron a los subsidios presupuestales.

#### ARTÍCULO 54. FUNCIONES DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

Las cámaras de comercio tendrán, además de las que les señala el artículo 86 del Código de Comercio, la función de realizar todos los actos similares a los que ya les han sido encomendados, y que resulten necesarios para que las empresas de servicios públicos y las demás personas que presten servicios públicos cumplan con los deberes y ejerciten los derechos de los comerciantes que surgen para ellos de esta ley.

#### ARTÍCULO 55. FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Todas las instituciones financieras podrán prestar aquellos de los servicios de centrales de valores que sean estrictamente necesarios para los efectos del Artículo 20 de esta ley; en tal evento, y para estos propósitos, quedarán sometidas al control de la Superintendencia Nacional de Valores, que lo ejercerá en consulta y con la colaboración de la Superintendencia Bancaria.

---

## Capítulo III

---

### DE LAS EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES

#### ARTÍCULO 56. DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Declárase de utilidad pública e interés social la ejecución de obras para prestar los servicios públicos y la adquisición de espacios suficientes para garantizar la protección de las instalaciones respectivas. Con ambos propósitos podrán expropiarse bienes inmuebles.

**ARTÍCULO 57. FACULTAD DE IMPONER SERVIDUMBRES, HACER OCUPACIONES TEMPORALES Y REMOVER OBSTÁCULOS.**

Cuando sea necesario para prestar los servicios públicos, las empresas podrán pasar por predios ajenos, por una vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos y los obstáculos de toda clase que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos establecidos en la ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le ocasione.

Las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y gas combustible, conducciones de acueducto, alcantarillado y redes telefónicas, podrán atravesar los ríos, caudales, líneas férreas, puentes, calles, caminos y cruzar acueductos, oleoductos, y otras líneas o conducciones. La empresa interesada, solicitará el permiso a la entidad pública correspondiente; si no hubiere ley expresa que indique quien debe otorgarlo, lo hará el municipio en el que se encuentra el obstáculo que se pretende atravesar.

---

## Capítulo IV

---

### **TOMA DE POSESIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**ARTÍCULO 58. MEDIDAS PREVENTIVAS.**

Cuando quienes prestan servicios públicos incumplan de manera reiterada, a juicio de la Superintendencia, los índices de eficiencia, los indicadores

de gestión y las normas de calidad definidos por ella, ésta podrá ordenar la separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de la empresa de los cargos que ocupan.

**ARTÍCULO 59. CAUSALES, MODALIDAD Y DURACIÓN.**

El Superintendente de servicios públicos podrá tomar posesión de una empresa, en los siguientes casos:

59.1. Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros.

59.2. Cuando sus administradores persistan en violar en forma grave las normas a las que deben estar sujetos, o en incumplir sus contratos.

59.3. Cuando sus administradores hayan rehusado dar información veraz, completa y oportuna a una comisión reguladora o a la Superintendencia, o a las personas a quienes éstas hayan confiado la responsabilidad de obtenerla.

59.4. Cuando se declare la caducidad de uno de los permisos, licencias o concesiones que la empresa de servicios públicos haya obtenido para adelantar sus actividades, si ello constituye indicio serio de que no está en capacidad o en ánimo de cumplir los demás y de acatar las leyes y normas aplicables.

59.5. En casos de calamidad o de perturbación del orden público;

59.6. Cuando, sin razones técnicas, legales o económicas de consideración sus administradores no quisieren colaborar para evitar a los usuarios graves problemas derivados de la imposibilidad de otra empresa de servicios públicos para desempeñarse normalmente.

59.7. Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles.

59.8. Cuando la empresa entre en proceso de liquidación.

capital social, la cual se hará sin necesidad de recurrir a su asamblea o a la aceptación de los acreedores.

---

## Capítulo V

---

### LIQUIDACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

#### ARTÍCULO 61. CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Cuando por voluntad de los socios, por configurarse una causal de disolución o por decisión del Superintendente de Servicios Públicos, una empresa de servicios públicos entre en proceso de liquidación, el representante legal o el revisor fiscal deberá dar aviso a la autoridad competente para la prestación del respectivo servicio, para que ella asegure que no se interrumpa la prestación del servicio. Si no se toman las medidas correctivas previstas en el artículo 220 del Código de Comercio, la liquidación continuará en la forma prevista en la ley.

La autoridad competente procederá a celebrar los contratos que sean necesarios con otras empresas de servicios públicos para que sustituyan a la empresa en proceso de liquidación o a asumir directamente en forma total o parcial las actividades que sean indispensables para asegurar la continuidad en la prestación del servicio, en concordancia con la entidad fiduciaria designada en desarrollo del proceso de toma de posesión de la empresa en liquidación. Tales contratos y acciones no se afectarán como consecuencia de las nulidades que, eventualmente, puedan declararse respecto de los demás actos relacionados con la toma de posesión o liquidación de la empresa; ni los nuevos contratistas responderán, en ningún caso, mas allá de los términos

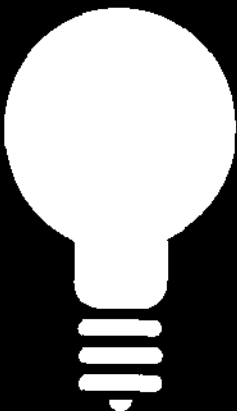
#### ARTÍCULO 60. EFECTOS DE LA TOMA DE POSESIÓN.

Como consecuencia de la toma de posesión se producirán los siguientes efectos:

60.1. El Superintendente al tomar posesión, deberá celebrar un contrato de fiducia, en virtud del cual se encargue a una entidad fiduciaria la administración de la empresa en forma temporal.

60.2. Cuando la toma de posesión tenga como causa circunstancias imputables a los administradores o accionistas de la empresa, el Superintendente definirá un tiempo prudencial para que se superen los problemas que dieron origen a la medida. Si transcurrido ese lapso no se ha solucionado la situación, el Superintendente ordenará al fiduciario que liquide la empresa.

60.3. Si se encuentra que la empresa ha perdido cualquier parte de su capital, previo concepto de la comisión respectiva, el Superintendente podrá ordenar la reducción simplemente nominal del



de su relación contractual, por las obligaciones de la empresa en liquidación.

## Regulación, control y vigilancia del Estado en los Servicios Públicos

### Capítulo I

#### CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

##### ARTÍCULO 62. ORGANIZACIÓN.

En desarrollo del artículo 369 de la Constitución Política de Colombia, en todos los municipios deberán existir «Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios» compuestos por usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales de uno o más de los servicios públicos a los que se refiere esta ley, sin que por el ejercicio de sus funciones se causen honorarios.

La iniciativa para la conformación de los comités corresponde a los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales. El número de miembros de los comités será el que resulte de dividir la población del respectivo municipio o distrito por 10.000, pero no podrá ser inferior a cincuenta (50). Para el Distrito Capital el número mínimo de miembros será de doscientos (200).

Para ser miembro de un «Comité de Desarrollo y Control Social», se requiere ser usuario, suscriptor o suscriptor potencial del respectivo servicio público domiciliario, lo cual se acreditará ante la Asamblea y el respectivo Comité, con el último

recibo de cobro o, en el caso de los suscriptores potenciales, con la solicitud debidamente radicada en la respectiva empresa.

La participación de un usuario, suscriptor o de un suscriptor potencial en todas las Asambleas y deliberaciones de un «Comité de Desarrollo y Control Social» será personal e indelegable.

Los Comités se darán su propio reglamento y se reunirán en el día, lugar y hora que acuerden sus miembros según registro firmado por todos los asistentes que debe quedar en el Acta de la reunión.

Una vez constituido un comité, es deber de las autoridades municipales y de las empresas de servicios públicos ante quien soliciten inscripción reconocerlos como tales. Para lo cual se verificará, entre otras cosas que un mismo usuario, suscriptor o suscriptor potencial no pertenezca a más de un comité de un mismo servicio público domiciliario.

Cada uno de los comités elegirán, entre sus miembros y por decisión mayoritaria, a un «Vocal de Control», quien actuará como su representante ante las personas prestadoras de los servicios públicos de que trata la presente ley, ante las entidades territoriales y ante las autoridades nacionales en lo que tiene que ver con dichos servicios públicos. Este «vocal» podrá ser removido en cualquier momento por el comité, en decisión mayoritaria de sus miembros.

Las elecciones del Vocal de Control podrán impugnarse ante el Personero del Municipio donde se realice la Asamblea de elección y las decisiones de éste serán apelables ante la Superintendencia de Servicios Públicos.

En las elecciones a que se refiere el presente artículo, será causal de mala conducta para cualquier servidor público y, en general, para cualquier funcionario de una persona prestadora de uno o varios de los servicios públicos a que se refiere la presente ley, entorpecer o dilatar la elección, coartar la

libertad de los electores o intervenir de cualquier manera en favor o en contra de los candidatos.

Corresponderá al alcalde de cada municipio o distrito velar por la conformación de los comités.

### ARTÍCULO 63. FUNCIONES.

Con el fin de asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las empresas de servicios públicos domiciliarios, los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios ejercerán las siguientes funciones especiales:

63.1. Proponer a las empresas de servicios públicos domiciliarios los planes y programas que consideren necesarios para resolver las deficiencias en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

63.2. Procurar que la comunidad aporte los recursos necesarios para la expansión o el mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios, en concertación con las empresas de servicios públicos domiciliarios y los municipios.

63.3. Solicitar la modificación o reforma de las decisiones que se adopten en materia de estratificación.

63.4. Estudiar y analizar el monto de los subsidios que debe conceder el municipio con sus recursos presupuestales a los usuarios de bajos ingresos; examinar los criterios y mecanismos de reparto de esos subsidios; y proponer las medidas que sean pertinentes para el efecto.

63.5. Solicitar al Personero la imposición de multas hasta de diez salarios mínimos mensuales, a las empresas que presten servicios públicos domiciliarios en su territorio por las infracciones a esta ley, o a las normas especiales a las que deben estar sujetas, cuando de ella se deriven perjuicios para los usuarios.

### ARTÍCULO 64. FUNCIONES DEL "VOCAL DE CONTROL".

Los vocales de los comités cumplirán las siguientes funciones:

64.1. Informar a los usuarios acerca de sus derechos y deberes en materia de servicios públicos domiciliarios, y ayudarlos a defender aquellos y cumplir éstos.

64.2. Recibir informes de los usuarios acerca del funcionamiento de las empresas de servicios públicos domiciliarios, y evaluarlos; y promover frente a las empresas y frente a las autoridades municipales, departamentales y nacionales las medidas correctivas, que sean de competencia de cada una de ellas.

64.3. Dar atención oportuna a todas las consultas y tramitar las quejas y denuncias que plantee en el comité cualquiera de sus miembros.

64.4. Rendir al comité informe sobre los aspectos anteriores, recibir sus opiniones, y preparar las acciones que sean necesarias.

Es obligación de las empresas de servicios públicos domiciliarios tramitar y responder las solicitudes de los vocales.

### ARTÍCULO 65. LAS AUTORIDADES Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS.

Para la adecuada instrumentación de la participación ciudadana corresponde a las autoridades:

65.1. Las autoridades municipales deberán realizar una labor amplia y continua de concertación con la comunidad para implantar los elementos básicos de las funciones de los comités y capacitarlos y asesorarlos permanentemente en su operación.

65.2. Los departamentos tendrán a su cargo la promoción y coordinación del sistema de participación, mediante una acción extensiva a todo su territorio.

En coordinación con los municipios y la Superintendencia, deberán asegurar la capacitación de los vocales dotándolos de instrumentos básicos que les permitan organizar mejor su trabajo y contar con la información necesaria para representar a los comités.

65.3. La Superintendencia tendrá a su cargo el diseño y la puesta en funcionamiento de un sistema de vigilancia y control que permita apoyar las tareas de los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios. Deberá proporcionar a las autoridades territoriales, el apoyo técnico necesario, la tecnología, la capacitación, la orientación y los elementos de difusión necesarios para la promoción de la participación de la comunidad.

#### **ARTÍCULO 66. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES.**

Las personas que cumplan la función de vocales de los comités de desarrollo de los servicios públicos domiciliarios, sus cónyuges y compañeros permanentes, y sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, así como quienes sean sus socios en sociedades de personas, no podrán ser socios ni participar en la administración de las empresas de servicios públicos que desarrollen sus actividades en el respectivo municipio, ni contratar con ellas, con las comisiones de regulación ni con la Superintendencia de Servicios Públicos.

La incompatibilidad e inhabilidad se extenderá hasta dos años después de haber cesado el hecho que le dio origen.

La celebración de los contratos de servicios públicos o, en general, de los que se celebren en igualdad de condiciones con quien los solicite, no da lugar a aplicar estas incompatibilidades o inhabilidades.

---

## Capítulo II

---

### DE LOS MINISTERIOS

#### **ARTÍCULO 67. FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS.**

El Ministerio de Minas y Energía, el de Comunicaciones y el de Desarrollo, tendrán, en relación con los servicios públicos de energía y gas combustible, telecomunicaciones, y agua potable y saneamiento básico, respectivamente, las siguientes funciones:

67.1. Señalar los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen las empresas de servicios públicos del sector, cuando la comisión respectiva haya resuelto por vía general que ese señalamiento es realmente necesario para garantizar la calidad del servicio, y que no implica restricción indebida a la competencia;

67.2. Elaborar máximo cada cinco años un plan de expansión de la cobertura del servicio

público que debe tutelar el ministerio, en el que se determinen las inversiones públicas que deben realizarse, y las privadas que deben estimularse.

67.3. Identificar fuentes de financiamiento para el servicio público respectivo, y colaborar en las negociaciones del caso; y procurar que las empresas del sector puedan competir en forma adecuada por esos recursos.

67.4. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían asignarse; y hacer las propuestas del caso durante la preparación del presupuesto de la Nación.

67.5. Recoger información sobre las nuevas tecnologías, y sistemas de administración en el sector, y divulgarla entre las empresas de servicios públicos, directamente o en colaboración con otras entidades públicas o privadas.

67.6. Impulsar bajo la dirección del Presidente de la República, y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las negociaciones internacionales relacionadas con el servicio público pertinente; y participar en las conferencias internacionales que sobre el mismo sector se realicen.

67.7. Desarrollar y mantener un sistema adecuado de información sectorial, para el uso de las autoridades y del público en general.

67.8. Las demás que les asigne la ley, siempre y cuando no contradigan el contenido especial de esta ley.

Los ministerios podrán desarrollar las funciones a las que se refiere éste artículo, con excepción de las que constan en el numeral 67.6., a través de sus unidades administrativas especiales.

*Parágrafo:* La Unidad Administrativa Especial de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía, tendrá el mismo régimen jurídico

de las comisiones de regulación de que trata esta ley y continuará ejerciendo las funciones que le han sido asignadas legalmente.

---

## Capítulo III

---

### DE LAS COMISIONES DE REGULACIÓN

#### ARTÍCULO 68. DELEGACIÓN DE FUNCIONES PRESIDENCIALES A LAS COMISIONES.

El Presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a los que se refiere esta ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas, en los términos de esta ley.

Las normas de esta ley que se refieren a las comisiones de regulación se aplicarán si el Presidente resuelve delegar la función aludida; en caso contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones.

#### ARTÍCULO 69. ORGANIZACIÓN Y NATURALEZA.

Créanse como unidades administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y patrimonial, y adscritas al respectivo ministerio, las siguientes comisiones de regulación:

69.1. *Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico*, adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico.

69.2. *Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible*, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

69.3. *Comisión de Regulación de Telecomunicaciones*, adscrita al Ministerio de Comunicaciones.

*Parágrafo* : Cada comisión será competente para regular el servicio público respectivo.

**ARTÍCULO 70. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS COMISIONES DE REGULACIÓN.**

Para el cumplimiento de las funciones que les asigna esta ley, en el evento de la delegación presidencial, las comisiones de regulación tendrán la siguiente estructura orgánica, que el Presidente de la República modificará, cuando sea preciso, previo concepto de la comisión respectiva dentro de las reglas del artículo 105 de esta ley.

70.1. Comisión de Regulación

a. Comité de Expertos Comisionados

70.2. Coordinación General

a. Coordinación Ejecutiva

b. Coordinación Administrativa

70.3. Áreas Ejecutoras

a. Oficina de regulación y políticas de competencia

b. Oficina Técnica

c. Oficina Jurídica

**ARTÍCULO 71. COMPOSICIÓN.**

Las comisiones de regulación estarán integradas por:

71.1. El Ministro respectivo o su delegado, quien la presidirá.

71.2. Tres expertos comisionados de dedicación exclusiva, designados por el Presidente de la República para periodos de tres años, reelegibles y no sujetos a las disposiciones que regulan la carrera

administrativa. Uno de ellos, en forma rotatoria, ejercerá las funciones de Coordinador de acuerdo con el reglamento interno. Al repartir internamente el trabajo entre ellos se procurará que todos tengan oportunidad de prestar sus servicios respecto de las diversas clases de asuntos que son competencia de la Comisión.

71.3. El Director del Departamento Nacional de Planeación.

A las comisiones asistirá, únicamente con voz, el Superintendente de Servicios Públicos o su delegado.

*Parágrafo 1:* A la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento pertenecerá el Ministro de Salud. A la Comisión de regulación de Energía y gas combustible pertenecerá el Ministro de Hacienda. Los Ministros sólo podrán delegar su asistencia en los Viceministros y el Director del Departamento Nacional de Planeación en el Subdirector.

*Parágrafo 2:* Al vencimiento del período de los expertos que se nombren, el Presidente no podrá reemplazar sino uno de ellos. Se entenderá prorrogado por dos años más el período de quienes no sean reemplazados.

**ARTÍCULO 72. MANEJO DE LOS RECURSOS.**

Para manejar los recursos de las comisiones, se autoriza la celebración de contratos de fiducia, con observancia de los requisitos legales que rigen esta contratación. La fiduciaria manejará los recursos provenientes de las contribuciones de las entidades sometidas a la regulación de las comisiones y los que recauden de las ventas de sus publicaciones y con sujeción al Código de Comercio. El Coordinador de cada comisión coordinará el desarrollo y la ejecución del contrato de fiducia a través del cual vinculará al personal y desarrollará las demás actuaciones que le sean propias.



**ARTÍCULO 73. FUNCIONES Y FACULTADES GENERALES.**

Las comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las siguientes funciones y facultades especiales:

73.1. Preparar proyectos de ley para someter a la consideración del gobierno, y recomendarle la adopción de los decretos reglamentarios que se necesiten.

73.2. Someter a su regulación, a la vigilancia del Superintendente, y a las normas

que esta ley contiene en materia de tarifas, de información y de actos y contratos, a empresas determinadas que no sean de servicios públicos, pero respecto de las cuales existan pruebas de que han realizado o se preparan para realizar una de las siguientes conductas:

a. Competir deslealmente con las de servicios públicos;

b. Reducir la competencia entre empresas de servicios públicos;

c. Abusar de una posición dominante en la provisión de bienes o servicios similares a los que éstas ofrecen.

73.3. Definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar la

gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar las evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones.

73.4. Fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas de servicios públicos en la prestación del servicio.

73.5. Definir en qué eventos es necesario que la realización de obras, instalación y operación de equipos de las empresas de servicios públicos se someta a normas técnicas oficiales, para promover la competencia o evitar perjuicios a terceros, y pedirle al ministerio respectivo que las elabore, cuando encuentre que son necesarias.

73.6. Establecer la cuantía y condiciones de las garantías de seriedad que deben prestar quienes deseen celebrar contratos de aporte reembolsable.

73.7. Decidir los recursos que se interpongan contra sus actos, o los de otras entidades, en los casos que disponga la ley en lo que se refiere a materias de su competencia.

73.8. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre empresas, por razón de los contratos o servidumbres que existan entre ellas y que no corresponda decidir a otras autoridades administrativas. La resolución que se adopte estará sujeta al control jurisdiccional de legalidad.

73.9. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre empresas, y que no corresponda decidir a otras autoridades administrativas, acerca de quién debe servir a usuarios específicos, o en qué regiones deben prestar sus servicios. La resolución que se adopte estará sujeta al control jurisdiccional de legalidad. La resolución debe atender, especialmente, al propósito de minimizar los costos en la provisión del servicio.

73.10. Dar concepto sobre la legalidad de las condiciones uniformes de los contratos de servicios

públicos que se sometan a su consideración; y sobre aquellas modificaciones que puedan considerarse restrictivas de la competencia. Las comisiones podrán limitar, por vía general, la duración de los contratos que celebren las empresas de servicios públicos, para evitar que se limite la posibilidad de competencia.

73.11. Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo previsto en el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas sea libre.

73.12. Determinar para cada bien o servicio público las unidades de medida y de tiempo que deben utilizarse al definir el consumo; y definir, con bases estadísticas y de acuerdo con parámetros técnicos medibles y verificables, apropiados para cada servicio, quiénes pueden considerarse «grandes usuarios».

73.13. Ordenar que una empresa de servicios públicos se escinda en otras que tengan el mismo objeto de la que se escinde, o cuyo objeto se limite a una actividad complementaria, cuando se encuentre que la empresa que debe escindirse usa su posición dominante para impedir el desarrollo de la competencia en un mercado donde ella es posible; o que la empresa que debe escindirse otorga subsidios con el producto de uno de sus servicios que no tiene amplia competencia a otro servicio que sí la tiene; o, en general, que adopta prácticas restrictivas de la competencia.

73.14. Ordenar la fusión de empresas cuando haya estudios que demuestren que ello es indispensable para extender la cobertura y abaratar los costos para los usuarios.

73.15. Ordenar la liquidación de empresas monopolísticas oficiales en el campo de los servicios públicos y otorgar a terceros el desarrollo de su actividad, cuando no cumplan los requisitos de eficiencia a los que se refiere esta ley.

73.16. Impedir que quienes captan o producen un bien que se distribuye por medio de empresas de servicios públicos adopten pactos contrarios a la libre competencia en perjuicio de los distribuidores; y exigir que en los contratos se especifiquen los diversos componentes que definen los precios y tarifas.

73.17. Dictar los estatutos de la comisión y su propio reglamento, y someterlos a aprobación del Gobierno Nacional.

73.18. Pedir al Superintendente que adelante las investigaciones e imponga las sanciones de su competencia, cuando tenga indicios de que alguna persona ha violado las normas de esta ley.

73.19. Resolver consultas sobre el régimen de incompatibilidades e inhabilidades al que se refiere esta ley.

73.20. Determinar, de acuerdo con la ley, cuándo se establece el régimen de libertad regulada o libertad vigilada o señalar cuándo hay lugar a la libre fijación de tarifas

73.21. Señalar, de acuerdo con la ley, criterios generales sobre abuso de posición dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación de la empresa con el usuario.

73.22. Establecer los requisitos generales a los que deben someterse las empresas de servicios públicos para utilizar las redes existentes y acceder a las redes públicas de interconexión; así mismo, establecer las fórmulas tarifarias para cobrar por el transporte e interconexión a las redes, de acuerdo con las reglas de esta ley.

73.23. Definir cuáles son, dentro de las tarifas existentes al entrar en vigencia esta ley, los factores que se están aplicando para dar subsidios a los usuarios de los estratos inferiores, con el propósito de que esos mismos factores se destinen a financiar los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, y cumplir así lo dispuesto en el numeral 87.3 de esta ley.

73.24. Absolver consultas sobre las materias de su competencia.

73.25. Establecer los mecanismos indispensables para evitar concentración de la propiedad accionaria en empresas con actividades complementarias en un mismo sector o sectores afines en la prestación de cada servicio público.

73.26. Todas las demás que le asigne la ley y las facultades previstas en ella que no se hayan atribuido a una autoridad específica.

Salvo cuando esta ley diga lo contrario en forma explícita, no se requiere autorización previa de las comisiones para adelantar ninguna actividad o contrato relacionado con los servicios públicos; ni el envío rutinario de información. Pero las comisiones, tendrán facultad selectiva de pedir información amplia, exacta, veraz y oportuna a quienes prestan los servicios públicos a los que esta ley se refiere, inclusive si sus tarifas no están sometidas a regulación. Quienes no la proporcionen, estarán sujetos a todas las sanciones que contempla el artículo 81 de la presente ley. En todo caso, las comisiones podrán imponer por sí mismas las sanciones del caso, cuando no se atiendan en forma adecuada sus solicitudes de información.

#### **ARTÍCULO 74. FUNCIONES ESPECIALES DE LAS COMISIONES DE REGULACIÓN.**

Con sujeción a lo dispuesto en esta ley y las demás disposiciones que la complementen, serán

además, funciones y facultades especiales de cada una de las comisiones de regulación las siguientes:

##### *74.1. De la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible.*

a. Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado.

b. Expedir regulaciones específicas para la autogeneración y cogeneración de electricidad y el uso eficiente de energía y gas combustible por parte de los consumidores y establecer criterios para la fijación de compromisos de ventas garantizadas de energía y potencia entre las empresas eléctricas y entre éstas y los grandes usuarios;

c. Establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento y la coordinación de la operación del sistema interconectado nacional y para regular el funcionamiento del mercado mayorista de energía y gas combustible.

d. Fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible; o delegar en las empresas distribuidoras, cuando sea conveniente dentro de los propósitos de esta ley, bajo el régimen que ella disponga, la facultad de fijar estas tarifas.

e. Definir las metodologías y regular las tarifas por los servicios de despacho y coordinación prestados por los centros regionales y por el centro nacional de despacho.

##### *74.2. De la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico:*

a. Promover la competencia entre quienes presten los servicios de agua potable y saneamiento



básico o regular los monopolios en la prestación de tales servicios, cuando la competencia no sea posible, todo ello con el propósito de que las operaciones de los monopolistas y de los competidores sean económicamente eficientes, se prevenga el abuso de posiciones dominantes y se produzcan servicios de calidad. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado.

b. Establecer, por vía general, en qué eventos es necesario que la realización de obras, instalaciones y operación de equipos destinados a la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo se sometan a normas técnicas y adoptar las medidas necesarias para que se apliquen las normas técnicas sobre calidad de agua potable que establezca el Ministerio de Salud, en tal forma que se fortalezcan los mecanismos de control de calidad de agua potable por parte de las entidades competentes.

#### *74.3. De la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones:*

a. Promover la competencia en el sector de las telecomunicaciones, y proponer o adoptar las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de las empresas en el mercado.

b. Resolver los conflictos que se presenten entre operadores en aquellos casos en los que se requiera la intervención de las autoridades para garantizar los principios de libre y leal competencia en el sector y de eficiencia en el servicio.

c. Establecer los requisitos generales a que deben someterse los operadores de servicios de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional para ejercer el derecho a utilizar las redes de

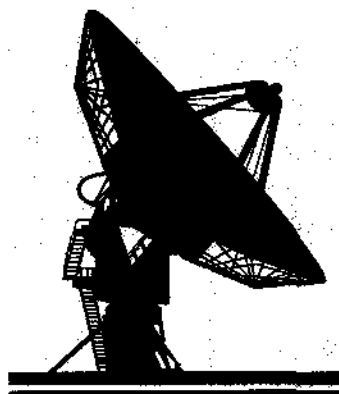
telecomunicaciones del estado; así mismo, fijar los cargos de acceso y de interconexión a estas redes, de acuerdo con las reglas sobre tarifas previstas en esta ley.

d. Reglamentar la concesión de licencias para el establecimiento de operadores de servicios de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional, y señalar las fórmulas de tarifas que se cobrarán por la concesión.

e. Definir, de acuerdo con el tráfico cursado, el factor de las tarifas de servicios de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional, actualmente vigentes, que no corresponde al valor de la prestación del servicio. Parte del producto de ese factor, en los recaudos que se hagan, se asignará en el Presupuesto Nacional,

previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social, para el «Fondo de Comunicaciones del Ministerio», que tendrá a su cargo hacer inversión por medio del fomento de programas de telefonía social, dirigidos a las zonas rurales y urbanas caracterizadas por la existencia de usuarios con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Se aplicarán a este fondo, en lo pertinente, las demás normas sobre «fondos de solidaridad y redistribución de ingresos» a los que se refiere el artículo 89 de esta ley. En el servicio de larga distancia internacional no se aplicará el factor de que trata el artículo 89 y los subsidios que se otorguen serán financiados con recursos de ingresos ordinarios de la nación y las entidades territoriales.

f. Proponer al mismo consejo la distribución de los ingresos de las tarifas de concesiones de servicio de telefonía móvil celular y de servicios de larga distancia nacional e internacional, para que este determine en el proyecto de presupuesto qué parte se asignará al fondo atrás mencionado y qué parte



ingresará como recursos ordinarios de la nación y definir el alcance de los programas de telefonía social que elabore el Fondo de Comunicaciones.

## Capítulo IV

### DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

#### ARTÍCULO 75. FUNCIONES PRESIDENCIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

El Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta ley, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del Superintendente y sus delegados.

#### ARTÍCULO 76. CREACIÓN Y NATURALEZA.

Crease la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial.

El Superintendente obrará con plena autonomía de criterio al cumplir las funciones que se derivan de la Constitución y la ley.

#### ARTÍCULO 77. DIRECCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA.

La representación legal de la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios corresponde

al Superintendente. Este desempeñará sus funciones específicas de control y vigilancia con independencia de las comisiones y con la inmediata colaboración de los Superintendentes delegados. El Superintendente y sus delegados serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

#### ARTÍCULO 78. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tendrá la siguiente estructura orgánica:

78.1. Despacho del Superintendente de Servicios Públicos.

78.2. Despacho del Superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo.

78.3. Despacho del Superintendente delegado para energía y gas combustible.

78.4. Despacho del Superintendente delegado para telecomunicaciones.

78.5. Secretaría General.

#### ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujeto de aplicación de la presente ley, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia. Son funciones especiales de ésta las siguientes:

79.1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad.

79.2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios públicos y los usuarios, y apoyar las labores que en este mismo sentido desarrollan los «comités municipales de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios»; y sancionar sus violaciones.

79.3. Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el monto de sus activos, y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

79.4. Definir por vía general las tarifas de las contribuciones a las que se refiere el artículo 85 de esta ley; liquidar y cobrar a cada contribuyente lo que le corresponda.

79.5. Dar concepto a las comisiones y ministerios sobre las medidas que se estudien en relación con los servicios públicos.

79.6. Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los departamentos y los municipios destinan a las personas de menores ingresos, se utilicen en la forma prevista en las normas pertinentes.

79.7. Solicitar documentos, inclusive contables; y practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus demás funciones.

79.8. Mantener un registro actualizado de las entidades que prestan los servicios públicos.

79.9. Tomar posesión de las empresas de servicios públicos, en los casos y para los propósitos que contemplan el artículo 59 de esta ley, y las disposiciones concordantes.

79.10. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos, de acuerdo con los indicadores definidos por las comisiones; publicar sus evaluaciones; y propor-

cionar en forma oportuna toda la información disponible a quienes deseen hacer evaluaciones independientes. El Superintendente podrá acordar con las empresas programas de gestión para que se ajusten a los indicadores que hayan definido las comisiones de regulación, e imponer sanciones por el incumplimiento.

79.11. Adjudicar a las personas que iniciaron, impulsaron o colaboraron en un procedimiento administrativo, tendiente a corregir violaciones de las normas relacionadas especialmente con los servicios públicos, una parte de las multas a la que se refiere el numeral 81.2. del artículo 81, para resarcirlos por el tiempo, el esfuerzo y los gastos y costos en que hayan incurrido o por los perjuicios que se les hayan ocasionado. Las decisiones respectivas podrán ser consultadas a la comisión de regulación del servicio público de que se trate. Esta adjudicación será obligatoria cuando la violación haya consistido en el uso indebido o negligente de las facturas de servicios públicos, y la persona que inició o colaboró en el procedimiento haya sido el perjudicado.

79.12. Verificar que las obras, equipos y procedimientos de las empresas cumplan con los requisitos técnicos que hayan señalado los ministerios.

79.13. Definir por vía general la información que las empresas deben proporcionar sin costo al público; y señalar en concreto los valores que deben pagar las personas por la información especial que pidan a las empresas de servicios públicos, si no hay acuerdo entre el solicitante y la empresa.

79.14. Organizar todos los servicios administrativos indispensables para el funcionamiento de la Superintendencia.

79.15. Dar conceptos, no obligatorios, a petición de parte interesada, sobre el cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios a los que se refiere esta ley; y hacer, a solicitud de todos los interesados, designaciones de personas que puedan

colaborar en la mejor prestación de los servicios públicos o en la solución de controversias que puedan incidir en su prestación oportuna, cobertura o calidad.

79.16. Todas las demás que le asigne la ley.

Salvo cuando la ley disponga expresamente lo contrario, el Superintendente no podrá exigir que ningún acto o contrato de una empresa de servicios públicos se someta a aprobación previa suya. El Superintendente no está obligado a visitar las empresas sometidas a su vigilancia, o a pedirles informaciones, sino cuando haya un motivo especial que lo amerite.

La Superintendencia ejercerá igualmente las funciones de inspección y vigilancia que contiene esta ley, en todo lo relativo al servicio de larga distancia nacional e internacional.

Salvo cuando se trate de las funciones a los que se refieren los numerales 79.3, 79.4 y 79.13, el Superintendente y sus delegados no producirán actos de carácter general para crear obligaciones a quienes estén sujetos a su vigilancia.

#### **ARTÍCULO 80. FUNCIONES EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS.**

La Superintendencia tendrá, además de las anteriores, las siguientes funciones para apoyar la participación de los usuarios:

80.1. Diseñar y poner en funcionamiento un sistema de vigilancia y control que permita apoyar las tareas de los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios.

80.2. Asegurar la capacitación de los vocales dotándolos de instrumentos básicos que les permitan organizar mejor su trabajo de fiscalización, y contar con la información necesaria para representar a los comités.

80.3. Proporcionar el apoyo técnico necesario, para la promoción de la participación de la comunidad en las tareas de vigilancia.

80.4. Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios.

#### **ARTÍCULO 81. SANCIONES.**

La Superintendencia de servicios públicos domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la falta:

81.1. Amonestación.

81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. La repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el Artículo 90 de la Constitución.

81.3. Orden de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades del infractor, y cierre de los inmuebles utilizados para desarrollarlas.

81.4. Orden de separar a los administradores o empleados de una empresa de servicios públicos de los cargos que ocupan; y prohibición a los infractores de trabajar en empresas similares, hasta por diez años.

81.5. Solicitud a las autoridades para que decreten la caducidad de los contratos que haya celebrado el infractor, cuando el régimen de tales contratos lo permita, o la cancelación de licencias así como la aplicación de las sanciones y multas previstas pertinentes.

81.6. Prohibición al infractor de prestar directa o indirectamente servicios públicos, hasta por diez años.

81.7. Toma de posesión en una empresa de servicios públicos, o la suspensión temporal o definitiva de sus autorizaciones y licencias, cuando las sanciones previstas atrás no sean efectivas o perjudiquen indebidamente a terceros.

Las sanciones que se impongan a personas naturales se harán previo el análisis de la culpa del eventual responsable y no podrán fundarse en criterios de responsabilidad objetiva.

#### **ARTÍCULO 82. FUNCIÓN SANCIONATORIA DE LOS PERSONEROS MUNICIPALES.**

Sin perjuicio de la facultad sancionatoria de la Procuraduría y de la facultad de asumir cualquier investigación iniciada por un personero municipal, éste último podrá imponer multas de hasta diez salarios mínimos mensuales a las empresas que prestan servicios públicos en el municipio, por las infracciones a esta ley, o a las normas especiales a las que deben estar sujetas, en perjuicio de un usuario residente en el municipio. Si el valor del perjuicio

excede el de esa multa, la competencia para sancionar corresponderá al Superintendente. Si la jurisdicción en lo contencioso administrativo anula más de tres de las multas impuestas en un año, el Ministerio Público deberá abrir investigación disciplinaria contra el personero.

#### **ARTÍCULO 83. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LAS FUNCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL.**

Cuando haya conflicto de funciones, o necesidad de interpretar esta ley en cuanto al reparto de funciones interno, se apelará al dictamen del Presidente de la República.

---

### Capítulo V

---

#### **PRESUPUESTO Y CONTRIBUCIONES PARA LAS COMISIONES Y LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS**

#### **ARTÍCULO 84. RÉGIMEN PRESUPUESTAL.**

Las comisiones y la Superintendencia están sometidas a las normas orgánicas del presupuesto general de la Nación, y a los límites anuales de crecimiento de sus gastos que señale el Consejo de Política Económica y Social.

En consonancia con tales normas, las comisiones y la superintendencia prepararán su presupuesto que presentarán a la aprobación del Gobierno Nacional.





#### ARTÍCULO 85. CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el Superintendente, las entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas:

85.1. Para definir los costos de los servicios que presten las comisiones y la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, en el período anual respectivo.

85.2. La Superintendencia y las comisiones presupuestarán sus gastos cada año y cobrarán dentro de los límites que enseguida se señalan, solamente la tarifa que arroje el valor necesario para cubrir su presupuesto anual.

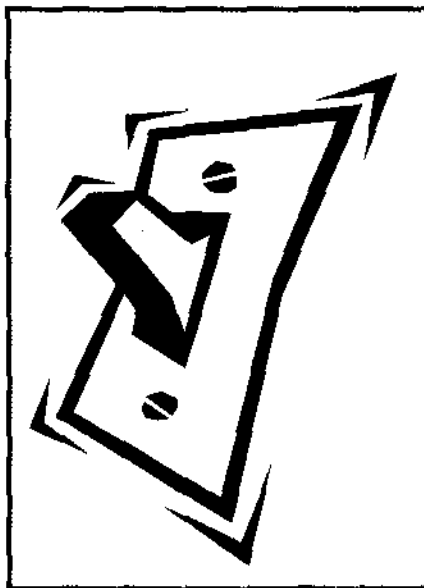
La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia y de las comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente.

85.3. Si en algún momento las comisiones o la Superintendencia tuvieren excedentes, deberán reembolsarlos a los contribuyentes, o abonarlos a las contribuciones del siguiente período, o transferirlos a la Nación, si las otras medidas no fueran posibles.

85.4. El cálculo de la suma a cargo de cada contribuyente, en cuanto a los costos de regulación, se hará teniendo en cuenta los costos de la comisión que regula el sector en el cual se desempeña; y el de los costos de vigilancia, atendiendo a los de la Superintendencia.

85.5. La liquidación y recaudo de las contribuciones correspondientes al servicio de regulación se efectuará por las comisiones respectivas y las correspondientes al servicio de inspección, control y vigilancia estarán a cargo de la Superintendencia.

85.6. Una vez en firme las liquidaciones deberán ser canceladas dentro del mes siguiente. Se aplicará el mismo régimen de sanción por mora aplicable al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de las demás sanciones de que trata esta ley.



*Parágrafo 1:* Las comisiones y la Superintendencia se financiarán exclusivamente con las contribuciones a las que se refiere este artículo y con la venta de sus publicaciones. Sin embargo, el gobierno incluirá en el presupuesto de la Nación apropiaciones suficientes para el funcionamiento de las comisiones y de la Superintendencia durante los dos primeros años.

*Parágrafo 2:* Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes presupuestales de las comisiones y la superintendencia.

## El Régimen Tarifario de las Empresas de Servicios Públicos

### Capítulo I

#### CONCEPTOS GENERALES

##### ARTÍCULO 86. EL RÉGIMEN TARIFARIO.

El régimen tarifario en los servicios públicos a los que esta ley se refiere, está compuesto por reglas relativas a:

86.1. El régimen de regulación o de libertad.

86.2. El sistema de subsidios, que se otorgarán para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas;

86.3. Las reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia, y que implican abuso de posición dominante;

86.4. Las reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

##### ARTÍCULO 87. CRITERIOS PARA DEFINIR EL RÉGIMEN TARIFARIO.

El régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

87.1. Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se

aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste.

87.2. Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendrá el derecho a tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales. El ejercicio de este derecho no debe impedir que las empresas de servicios públicos ofrezcan opciones tarifarias y que el consumidor escoja la que convenga a sus necesidades.

87.3. Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a «fondos de solidaridad y redistribución», para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas.

87.4. Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios.

87.5. Por simplicidad se entiende que las fórmulas de tarifas se elaborarán en tal forma que se facilite su comprensión, aplicación y control.

87.6. Por transparencia se entiende que el régimen tarifario será explícito y completamente público para todas las partes involucradas en el servicio, y para los usuarios.

87.7. Los criterios de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del régimen tarifario. Si llegare a existir contradicción entre el criterio de eficiencia y el de suficiencia financiera, deberá tomarse en cuenta que, para una empresa eficiente, las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera.

87.8. Toda tarifa tendrá un carácter integral, en el sentido de que supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas características definirán las comisiones reguladoras. Un cambio en estas características se considerará como un cambio en la tarifa.

87.9. Cuando las entidades públicas aporten bienes o derechos a las empresas de servicios públicos, podrán hacerlo con la condición de que su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios de los estratos que pueden recibir subsidios, de acuerdo con la ley. Pero en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figurarán el valor de éste y, como un menor valor del bien o derecho respectivo, el monto del subsidio implícito en la prohibición de obtener los rendimientos que normalmente habría producido.

*Parágrafo 1:* Cuando se celebren contratos mediante invitación pública para que empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios de que trata esta ley, la tarifa podrá ser un elemento que se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las fórmulas tarifarias, su composición por segmentos,

su modificación e indexación que ofrezca el oferente deberán atenerse en un todo a los criterios establecidos en los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de esta ley. Tanto éstas como aquellas deberán ser parte integral del contrato y la Comisión podrá modificarlas cuando se encuentren abusos de posición dominante, violación al principio de neutralidad, abuso con los usuarios del sistema. Intervenirá asimismo, cuando se presenten las prohibiciones estipuladas en el artículo 98 de esta ley. Con todo las tarifas y las fórmulas tarifarias podrán ser revisadas por la comisión reguladora respectiva cada cinco (5) años y cuando esta ley así lo disponga.

*Parágrafo 2:* Para circunstancias o regímenes distintos a los establecidos en el parágrafo anterior, podrán existir metodologías tarifarias definidas por las comisiones respectivas. Para tal efecto, se tomarán en cuenta todas las disposiciones relativas a la materia que contiene esta ley.

#### **ARTÍCULO 88. REGULACIÓN Y LIBERTAD DE TARIFAS.**

Al fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación, el cual podrá incluir las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen de libertad, de acuerdo a las siguientes reglas:

88.1. Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos excepcionales que se enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las metodologías para determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o vigilada.

88.2. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas cuando no tengan una posición dominante

en su mercado, según análisis que hará la comisión respectiva, con base en los criterios y definiciones de esta ley.

88.3. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas, cuando exista competencia entre proveedores. Corresponde a las comisiones de regulación, periódicamente, determinar cuándo se dan estas condiciones, con base en los criterios y definiciones de esta ley.

## Capítulo II

### FÓRMULAS Y PRÁCTICAS DE TARIFAS

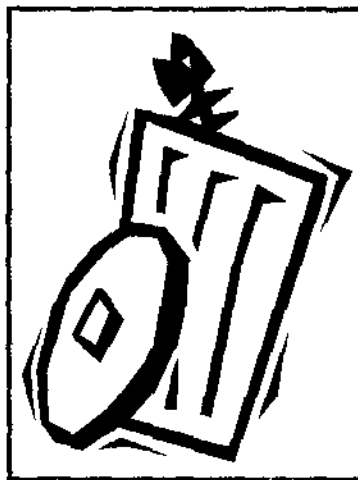
#### ARTÍCULO 89. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS.

Las comisiones de regulación exigirán gradualmente a todos quienes prestan servicios públicos que, al cobrar las tarifas que estén en vigencia al promulgarse esta ley, distingan en las facturas entre el valor que corresponde al servicio y el factor que se aplica para dar subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2. Igualmente, definirán las condiciones para aplicarlos al estrato 3. Los concejos municipales están en la obligación de crear «fondos de solidaridad y redistribución de ingresos», para que al presupuesto del municipio se incorporen las transferencias que a dichos fondos deberán hacer las empresas de servicios públicos, según el servicio de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89.2 de la presente ley. Los recursos de dichos fondos serán destinados a dar subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, como inversión social, en los términos de esta ley. A igual procedimiento y siste-

ma se sujetarán los fondos distritales y departamentales que deberán ser creados por las autoridades correspondientes en cada caso.

89.1. Se presume que el factor aludido nunca podrá ser superior al equivalente del 20% del valor del servicio y no podrán incluirse factores adicionales por concepto de ventas o consumo del usuario. Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta ley, las comisiones sólo permitirán que el factor o factores que se han venido cobrando, se incluyan en las facturas de usuarios de inmuebles residenciales de los estratos 5 y 6, y en las de los usuarios industriales y comerciales. Para todos estos, el factor o factores se determinará en la forma atrás dispuesta, se discriminará en las facturas, y los recaudos que con base en ellos se hagan, recibirán el destino señalado en el artículo 89.2 de esta ley.

89.2. Quienes presten los servicios públicos harán los recaudos de las sumas que resulten al aplicar los factores de que trata este artículo y los aplicarán al pago de subsidios, de acuerdo con las normas pertinentes, de todo lo cual llevarán contabilidad y cuentas detalladas. Al presentarse superávits, por este concepto, en empresas de servicios públicos oficiales de orden distrital, municipal o departamental se destinarán a «fondos de solidaridad y redistribución de ingresos» para empresas de la misma naturaleza y servicio que cumplan sus actividades en la misma entidad territorial al de la empresa aportante. Si los «fondos de solidaridad y redistribución de ingresos» después de haber atendido los subsidios de orden distrital, municipal o departamental, según sea el caso, presentaren superávits, estos últimos se destinarán para las empresas de la misma naturaleza y servicio con sede en departamentos, distritos o municipios limítrofes, respectivamente. Los repartos se harán de acuerdo a los mecanismos y



criterios que establezcan las comisiones de regulación respectivas. Los superávits, por este concepto, en empresas privadas o mixtas prestatarias de los servicios de agua potable o saneamiento básico y telefonía local fija, se destinarán a los «fondos de solidaridad y redistribución de ingresos» del municipio o distrito correspondiente y serán transferidos mensualmente, de acuerdo con los mecanismos que establezcan las comisiones de regulación respectivas. Los superávits, por este concepto, en empresas privadas o mixtas prestatarias de los servicios de energía eléctrica y gas combustible irán a los fondos que más adelante se desarrollan en este mismo artículo.

89.3. Los recaudos que se obtengan al distinguir, en las facturas de energía eléctrica y gas combustible, el factor o factores arriba dichos, y que den origen a superávits, después de aplicar el factor para

subsidios y sólo por este concepto, en empresas oficiales o mixtas de orden nacional, y privadas se incorporarán al presupuesto de la nación (Ministerio de Minas y Energía), en un «fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos», donde se separen claramente los recursos y asignaciones de estos dos servicios y que el congreso destinará, como inversión social, a dar subsidios que permitan generar, distribuir y transportar energía eléctrica y gas combustible a usuarios de estratos bajos, y expan-

dir la cobertura en las zonas rurales preferencialmente para incentivar la producción de alimentos y sustituir combustibles derivados del petróleo.

89.4. Quienes generen su propia energía, y la enajenen a terceros o asociados, y tengan una capacidad instalada superior a 25.000 Kilovatios, recaudarán y aportarán, en nombre de los consumidores

de esa energía equivalente, al fondo de «solidaridad y redistribución de ingresos» del municipio o municipios en donde ésta sea enajenada, la suma que resulte de aplicar el factor pertinente del 20% a su generación descontando de esta lo que vendan a empresas distribuidoras. Esta generación se evaluará al 80% de su capacidad instalada, y valorada con base en el costo promedio equivalente según nivel de tensión que se aplique en el respectivo municipio; o, si no lo hay, en aquel municipio o distrito que lo tenga y cuya cabecera esté más próxima a la del municipio o distrito en el que se enajene dicha energía. El generador hará las declaraciones y pagos que correspondan, de acuerdo con los procedimientos que establezca la comisión de regulación de energía y gas domiciliario.

89.5. Quienes suministren o comercialicen gas combustible con terceros en forma independiente, recaudarán, en nombre de los consumidores que abastecen y aportarán, al fondo de «solidaridad y redistribución de ingresos» de la nación (Ministerio de Minas y Energía), la suma que resulte de aplicar el factor pertinente del 20%, al costo económico de suministro en puerta de ciudad, según reglamentación que haga la comisión de regulación de energía y gas domiciliario. El suministrador o comercializador hará las declaraciones y pagos que correspondan, de acuerdo con los procedimientos que establezca la misma comisión.

89.6. Los recursos que aquí se asignan a los «fondos de solidaridad y redistribución de ingresos» son públicos. Por lo tanto, quienes hagan los recaudos estarán sujetos a las normas sobre declaración y sanciones que se aplican a los retenedores en el Decreto 624 de 1989 y en las normas concordantes o que lo sustituyan; pero deberán hacer devoluciones en el momento en que el usuario les demuestre que tiene derecho a ellas. La obligación de los retenedores que hagan el cobro del factor o factores se extinguirá y cobrará en la forma prevista para las

obligaciones que regulan las normas aludidas, en lo que sean compatibles con esta ley y con la naturaleza de los cobros respectivos; y las moras se sancionarán como las moras de quienes están sujetos a las obligaciones que regulan tales normas.

89.7. Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta ley, los hospitales, clínicas, puestos y centros de salud, y los centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro, no seguirán pagando sobre el valor de sus consumos el factor o factores de que trata este artículo. Lo anterior se aplicará por solicitud de los interesados ante la respectiva entidad prestadora del servicio público. Sin excepción, siempre pagarán el valor del consumo facturado al costo del servicio.

89.8. En el evento de que los «fondos de solidaridad y redistribución de ingresos» no sean suficientes para cubrir la totalidad de los subsidios necesarios, la diferencia será cubierta con otros recursos de los presupuestos de las entidades del orden nacional, departamental, distrital o municipal. Lo anterior no obsta para que la nación y las entidades territoriales puedan canalizar, en cualquier tiempo, a través de estos fondos, los recursos que deseen asignar a subsidios. En estos casos el aporte de la nación o de las entidades territoriales al pago de los subsidios no podrá ser inferior al 50% del valor de los mismos.

*Parágrafo:* Cuando los encargados de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, distintos de las empresas oficiales o mixtas del orden nacional o de empresas privadas desarrollen sus actividades en varios municipios de un mismo departamento, los superávits a los que se refiere el artículo 89.2 de esta ley, ingresarán a los «fondos de solidaridad y redistribución de ingresos» del respectivo municipio. Cuando su prestación se desarrolle en municipios de diferentes departamentos, los excedentes ingresarán a los fondos del respectivo municipio

## ARTÍCULO 90. ELEMENTOS DE LAS FÓRMULAS DE TARIFAS.

Sin perjuicio de otras alternativas que puedan definir las comisiones de regulación, podrán incluirse los siguientes cargos:

90.1. Un cargo por unidad de consumo, que refleje siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos que varíen con el nivel de consumo como la demanda por el servicio;

90.2. Un cargo fijo, que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.

Se considerarán como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración, facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia.

90.3. Un cargo por aportes de conexión el cual podrá cubrir los costos involucrados en la conexión del usuario al servicio. También podrá cobrarse cuando, por razones de suficiencia financiera, sea necesario acelerar la recuperación de las inversiones en infraestructura, siempre y cuando estas correspondan a un plan de expansión de costo mínimo. La fórmula podrá distribuir estos costos en alícuotas partes anuales.

El cobro de estos cargos en ningún caso podrá contradecir el principio de la eficiencia, ni trasladar al usuario los costos de una gestión ineficiente o extraer beneficios de posiciones dominantes o de monopolio.

Las comisiones de regulación siempre podrán diseñar y hacer públicas diversas opciones tarifarias que tomen en cuenta diseños óptimos de tarifas. Cualquier usuario podrá exigir la aplicación de una de estas opciones, si asume los costos de los equipos de medición necesarios.

#### **ARTÍCULO 91. CONSIDERACIÓN DE LAS DIVERSAS ETAPAS DEL SERVICIO.**

Para establecer las fórmulas de tarifas se calculará por separado, cuando sea posible, una fórmula para cada una de las diversas etapas del servicio.

#### **ARTÍCULO 92. RESTRICCIONES AL CRITERIO DE RECUPERACIÓN DE COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN.**

En las fórmulas de tarifas las comisiones de regulación garantizarán a los usuarios a lo largo del tiempo los beneficios de la reducción promedio de costos en las empresas que prestan el servicio; y, al mismo tiempo, darán incentivos a las empresas para ser más eficientes que el promedio, y para apropiarse los beneficios de la mayor eficiencia.

Con ese propósito, al definir en las fórmulas los costos y gastos típicos de operación de las empresas de servicios públicos, las comisiones utilizarán no solo la información propia de la empresa, sino la de otras empresas que operen en condiciones similares, pero que sean más eficientes.

También podrán las comisiones, con el mismo propósito, corregir en las fórmulas los índices de

precios aplicables a los costos y gastos de la empresa con un factor que mida los aumentos de productividad que se esperan en ella, y permitir que la fórmula distribuya entre la empresa y el usuario los beneficios de tales aumentos.



#### **ARTÍCULO 93. COSTOS DE COMPRAS AL POR MAYOR PARA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS CON POSICIÓN DOMINANTE.**

Al elaborar las fórmulas de tarifas a las empresas que tengan posición dominante en un mercado, y cuya principal actividad sea la distribución de bienes distintos proporcionados por terceros, el costo que se asigne a la compra al por mayor de tales bienes o servicios deberá ser el que resulte de la invitación pública a la que se refiere el artículo 35, y en ningún caso un estimativo de él.

#### **ARTÍCULO 94. TARIFAS Y RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS.**

De acuerdo con los principios de eficiencia y suficiencia financiera, y dada la necesidad de lograr un adecuado equilibrio entre ellos, no se permitirán alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales. La recuperación patrimonial deberá hacerse, exclusivamente, con nuevos aportes de capital de los socios, o con cargo a las reservas de la empresa o a sus nuevas utilidades.

#### **ARTÍCULO 95. FACULTAD DE EXIGIR APORTES DE CONEXIÓN.**

Los aportes de conexión pueden ser parte de la tarifa; pero podrán pagarse, entre otras formas, adquiriendo acciones para el aumento de capital de las empresas, si los reglamentos de estas lo permiten.

Se prohíbe el cobro de derechos de suministro, formularios de solicitud y otros servicios o bienes semejantes. Pero si una solicitud de conexión implicara estudios particularmente complejos, su costo, justificado en detalle, podrá cobrarse al interesado, salvo que se trate de un usuario residencial perteneciente a los estratos 1, 2, 3.

#### **ARTÍCULO 96. OTROS COBROS TARIFARIOS.**

Quienes presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran.

En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los saldos insolutos, capitalizados los intereses, conforme a lo dispuesto en la ley 40 de 1990.\*

Las comisiones de regulación podrán modificar las fórmulas tarifarias para estimular a las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía y acueducto a hacer inversiones tendientes a facilitar a los usuarios la mejora en la eficiencia en el uso de la energía o el agua, si tales inversiones tienen una tasa de retorno económica suficiente para justificar la asignación de los recursos en condiciones de mercado.

#### **ARTÍCULO 97. MASIFICACIÓN DEL USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.**

Con el propósito de incentivar la masificación de estos servicios las empresas prestatarias de los mismos otorgarán plazos para amortizar los cargos de la conexión domiciliaria, incluyendo la acometida y el medidor, los cuales serán obligatorios para los estratos 1, 2 y 3.

\* *Nota del Editor:* La Ley 40 de 1990 versa sobre el fomento a la actividad panetera. Parece ser que el Legislador lo que quiso fue hacer referencia a la Ley 45 de 1990 que en su artículo 65 se refiere a la causación de intereses de mora en las obligaciones dinerarias(?)

En todo caso, los costos de conexión domiciliaria, acometida y medidor de los estratos 1, 2 y 3 podrán ser cubiertos por el municipio, el departamento o la nación a través de aportes presupuestales para financiar los subsidios otorgados a los residentes de estos estratos que se beneficien con el servicio y, de existir un saldo a favor de la persona prestadora del servicio, se aplicarán los plazos establecidos en el inciso anterior, los cuales, para los estratos 1, 2 y 3, por ningún motivo serán inferiores a tres (3) años, salvo por renuncia expresa del usuario.

#### **ARTÍCULO 98. PRÁCTICAS TARIFARIAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA.**

Se prohíbe a quienes presten los servicios públicos:

98.1. Dar a los clientes de un mercado competitivo, o cuyas tarifas no están sujetas a regulación, tarifas inferiores a los costos operacionales, especialmente cuando la misma empresa presta servicios en otros mercados en los que tiene una posición dominante o en los que sus tarifas están sujetas a regulación.

98.2. Ofrecer tarifas inferiores a sus costos operacionales promedio con el ánimo de desplazar competidores, prevenir la entrada de nuevos oferentes o ganar posición dominante ante el mercado o ante clientes potenciales.

98.3. Discriminar contra unos clientes que poseen las mismas características comerciales de otros, dando a los primeros tarifas más altas que a los segundos, y aún si la discriminación tiene lugar dentro de un mercado competitivo o cuyas tarifas no estén reguladas.

La violación de estas prohibiciones, o de cualquiera de las normas de esta ley relativas a las funciones de las comisiones, puede dar lugar a que éstas sometan a regulación las tarifas de quienes no estuvieren sujetas a ella, y revoquen de inmediato las fórmulas de tarifas aplicables a quienes prestan los servicios públicos.



**DE LOS SUBSIDIOS**

**ARTÍCULO 99. FORMA DE SUBSIDIAR.**

Las entidades señaladas en el artículo 368 de la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas:

99.1. Deben indicar específicamente el tipo de servicio subsidiado.

99.2. Se señalará la entidad prestadora que repartirá el subsidio.

99.3. El reparto debe hacerse entre los usuarios como un descuento en el valor de la factura que éste debe cancelar, conforme a lo dispuesto en esta ley y en las ordenanzas y acuerdos según el caso.

99.4. El Presidente y los gobernadores podrán suspender a los alcaldes cuando sean negligentes en la aplicación de las normas relativas al pago de los subsidios; o cuando las infrinjan de cualquier otra manera.

99.5. Los subsidios no excederán, en ningún caso, del valor de los consumos básicos o de subsistencia. Los alcaldes y los concejales tomarán las medidas que a cada uno correspondan para crear en el presupuesto municipal, y ejecutar, apropiaciones para subsidiar los consumos básicos de acueducto y saneamiento básico de los usuarios de menores recursos y extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, dando

prioridad a esas apropiaciones, dentro de las posibilidades del municipio, sobre otros gastos que no sean indispensables para el funcionamiento de éste. La infracción de este deber dará lugar a sanción disciplinaria.

99.6. La parte de la tarifa que refleje los costos eficientes de administración, operación y mantenimiento a que dé lugar el suministro será cubierta siempre por el usuario; la que tenga el propósito de recuperar el valor de las inversiones hechas para prestar el servicio podrá ser cubierta por los subsidios, y siempre que no lo sean, la empresa de servicios públicos podrá tomar todas las medidas necesarias para que los usuarios las cubran. En ningún caso el subsidio será superior al 15% del costo medio del suministro para el estrato 3, al 40% del costo medio del suministro para el estrato 2, ni superior al 50% de éste para el estrato 1.

99.7. Los subsidios sólo se otorgarán a los usuarios de inmuebles residenciales y a las zonas rurales de los estratos 1 y 2; las comisiones de regulación definirán las condiciones para otorgarlos al estrato 3.

99.8. Cuando los Concejos creen los fondos de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos y autoricen el pago de subsidios a través de las empresas pero con desembolsos de los recursos que manejen las tesorerías municipales, la transferencia de recursos se hará en un plazo de 30 días, contados desde la misma fecha en que se expida la factura a cargo del municipio. Para asegurar la transferencia, las empresas firmarán contratos con el municipio.

99.9. Los subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se asignarán, preferentemente, a los usuarios que residan en aquellos municipios que tengan menor capacidad para otorgar subsidios con sus propios ingresos. En consecuencia y con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata esta ley para ninguna persona natural o jurídica.

*Parágrafo 1:* La tarifa del servicio público de electricidad para los distritos de riego construídos o administrados por el Incora y que sean menores a 50 hectáreas, se considerarán incorporados al estrato 1 para efecto de los subsidios a que halla lugar.

#### **ARTÍCULO 100. PRESUPUESTO Y FUENTES DE LOS SUBSIDIOS.**

En los presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, las apropiaciones para inversión en acueducto y saneamiento básico y los subsidios se clasificarán en el gasto público social, como inversión social, para que reciban la prioridad que ordena el artículo 366 de la Constitución Política. Podrán utilizarse como fuentes de los subsidios los ingresos corrientes y de capital, las participaciones en los ingresos corrientes de la Nación, los recursos de los impuestos para tal efecto de que trata esta ley, y para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo los recursos provenientes del 10% del impuesto predial unificado al que se refiere el artículo 7 de la ley 44 de 1990. En ningún caso se utilizarán recursos del crédito para atender subsidios. Las empresas de servicios públicos no podrán subsidiar otras empresas de servicios públicos.

---

## Capítulo IV

---

### **ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA**

#### **ARTÍCULO 101. RÉGIMEN DE ESTRATIFICACIÓN.**

La estratificación se someterá a las siguientes reglas:

101.1. Es deber de cada municipio clasificar en estratos los inmuebles residenciales que deben

recibir servicios públicos. Y es deber indelegable del alcalde realizar la estratificación respectiva.

101.2. Los alcaldes pueden contratar las tareas de estratificación con entidades públicas nacionales o locales, o privadas de reconocida capacidad técnica.

101.3. El alcalde adoptará mediante decreto los resultados de la estratificación y los difundirá ampliamente. Posteriormente los notificará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

101.4. En cada municipio existirá una sola estratificación de inmuebles residenciales, aplicable a cada uno de los servicios públicos.

101.5. Antes de iniciar los estudios conducentes a la adopción, el alcalde deberá conformar un Comité permanente de estratificación socioeconómica que lo asesore, cuya función principal es velar por la adecuada aplicación de las metodologías suministradas por el Departamento Nacional de Planeación.

101.6. Los alcaldes de los municipios que conforman áreas metropolitanas o aquellos que tengan áreas en situación de conurbación, podrán hacer convenios para que la estratificación se haga como un todo.

101.7. La Nación y los departamentos pueden dar asistencia técnica a los municipios para que asuman la responsabilidad de la estratificación; para realizar las estratificaciones, los departamentos pueden dar ayuda financiera a los municipios cuyos ingresos totales sean equivalentes o menores a los gastos de funcionamiento, con base a la ejecución presupuestal del año inmediatamente anterior.

101.8. Las estratificaciones que los municipios y distritos hayan realizado o realicen con el propósito de determinar la tarifa del impuesto predial unificado de que trata la ley 44/90, serán admisibles para los propósitos de esta ley, siempre y cuando se ajusten a las metodologías de estratificación definidas por el Departamento Nacional de Planeación.

101.9. Cuando se trate de otorgar subsidios con recursos nacionales, la Nación podrá exigir, antes de efectuar los desembolsos, que se consiga certificado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el sentido de que la estratificación se hizo en forma correcta. Cuando se trate de otorgar subsidios con recursos departamentales, cada Departamento establecerá sus propias normas.

101.10. El Gobernador del Departamento podrá sancionar disciplinariamente a los alcaldes que por su culpa no hayan realizado la estratificación de los inmuebles residenciales en los plazos establecidos por Planeación Nacional, o no hayan conseguido que se haga y notifique una revisión general de la estratificación municipal cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el plazo previsto lo indique.

101.11. Ante la renuencia de las autoridades municipales, el Gobernador puede tomar las medidas necesarias, y hacer los contratos del caso, para garantizar que las estratificaciones estén hechas acordes con las normas; la Nación deberá, en ese evento, descontar de las transferencias que debe realizar al municipio las sumas necesarias y pagarlas al Departamento.

101.12. El Presidente de la República podrá imponer sanción disciplinaria a los Gobernadores que, por su culpa, no tomen las medidas tendientes a suplir la omisión de las autoridades municipales en cuanto a realización de los actos de estratificación; podrá también tomar las mismas medidas que se autorizan a los gobernadores en el inciso anterior.

101.13. Las sanciones y medidas correctivas que este artículo autoriza podrán aplicarse también

cuando no se determine en forma oportuna que la actualización de los estratos debe hacerse para atender los cambios en la metodología de estratificación que se tuvieron en cuenta al realizar la estratificación general de un municipio; o, en general cuando se infrinjan con grave perjuicio para los usuarios las normas sobre estratificación.

*Parágrafo:* El plazo para adoptar la estratificación urbana se vence el 31 de diciembre de 1994 y la estratificación rural el 31 de julio de 1995.

#### ARTÍCULO 102. ESTRATOS Y METODOLOGÍA.

Los inmuebles residenciales a los cuales se provean servicios públicos se clasificarán máximo en seis estratos socioeconómicos así: 1) bajo bajo, 2) bajo, 3) medio bajo, 4) medio, 5) medio alto, y 6) alto.

Para tal efecto se emplearán las metodologías que elabore el Departamento Nacional de Planeación, las cuales contendrán las variables, factores, ponderaciones y método estadístico, teniendo en cuenta la dotación de servicios públicos domiciliarios. Ninguna zona residencial urbana que carezca de la prestación de por lo menos dos servicios públicos domiciliarios básicos podrá ser clasificada en un estrato superior al cuatro (4)

#### ARTÍCULO 103. UNIDADES ESPACIALES DE ESTRATIFICACIÓN.

La unidad espacial de estratificación es el área dotada de características homogéneas de conformidad con los factores de estratificación. Cuando se encuentren viviendas que no tengan las mismas características del conglomerado, se les dará un tratamiento individual.

#### ARTÍCULO 104. RECURSOS DE LOS USUARIOS.

Toda persona o grupo de personas podrá solicitar revisión del estrato que se le asigne. Los

reclamos serán atendidos y resueltos en primera instancia por el comité de estratificación en el término de dos meses y las reposiciones por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

## Organización y Procedimientos Administrativos

### Capítulo I

#### PRINCIPIOS Y REGLAS

##### ARTÍCULO 105. PRINCIPIOS Y REGLAS DE REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 14 y 16 del artículo 189 y el artículo 370 de la Constitución Política, y para los efectos de la debida organización y funcionamiento de la estructura administrativa relacionada con el régimen de Servicios Públicos domiciliarios de que trata esta ley, el Presidente de la República podrá modificar la estructura de los Ministerios de Desarrollo Económico, Minas y Energía, de Comunicaciones, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de las comisiones de regulación y de las demás dependencias y entidades de la administración, así como crear, fusionar o suprimir los empleos a que haya lugar, señalarles sus funciones y fijarles sus dotaciones y emolumentos, de acuerdo con las normas generales adoptadas con fundamento en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta, con sujeción a los siguientes principios y reglas generales:

105.1. Debe garantizarse que no existan entidades, organismos o dependencias que ejerzan funciones iguales o incompatibles con lo dispuesto en esta ley.

105.2. Las modificaciones se harán sobre la base de una evaluación de los costos y gastos de operación, del funcionamiento de sus componentes y de su comparación frente a la ejecución de funciones a través de contrato.

105.3. Se mantendrá una estricta separación entre las funciones de regulación, que se ejercerán a través de las comisiones, y las de control y vigilancia, que se ejercerán por el Superintendente y sus delegados.

105.4. Se podrán establecer oficinas delegadas de la Superintendencia en las ciudades capitales de departamento que se considere conveniente, o autorizar la delegación de algunas funciones en otras autoridades administrativas del orden departamental o municipal, o la celebración de contratos con otras entidades públicas o privadas para el mejor cumplimiento de ellas.

105.5. Al establecer las funciones del Superintendente se distinguirán las relativas a las entidades prestadoras de los servicios públicos de las dirigidas a apoyar y garantizar la participación de los usuarios.

105.6. Lo anterior sin perjuicio de las funciones de control disciplinario y de gestión de la Procuraduría General de la Nación.

### Capítulo II

#### DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ACTOS UNILATERALES

##### ARTÍCULO 106. APLICACIÓN.

Las reglas de este capítulo se aplicarán en todos aquellos procedimientos de las autoridades que tengan el propósito de producir los actos administrativos unilaterales a que dé origen el cumplimiento de

la presente ley, y que no hayan sido objeto de normas especiales.

**ARTÍCULO 107. CITACIONES Y COMUNICACIONES.**

La citación o comunicación se entenderá cumplida al cabo del décimo día siguiente a aquel en que haya sido puesta al correo, si ese fue el medio escogido para hacerla, y si el citado tuviere domicilio en el país; si lo tuviere en el exterior, se entenderá cumplida al cabo del vigésimo día. Las publicaciones se entenderán surtidas al cabo del día siguiente a aquel en que se hacen. La citación o comunicación podrá hacerse, también, verbalmente, o por la entrega de un escrito, de todo lo cual se dejará constancia.

**ARTÍCULO 108. PERÍODO PROBATORIO.**

Dentro del mes siguiente al día en que se haga la primera de las citaciones y publicaciones, y habiendo oído a los interesados, si existen diferencias de información o de apreciación sobre aspectos que requieren conocimientos especializados, la autoridad decretará las pruebas a que haya lugar.

**ARTÍCULO 109. FUNCIONARIO PARA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS Y DECISIÓN DE RECURSOS.**

Al practicar pruebas, las funciones que corresponderían al juez en un proceso civil las cumplirá la autoridad, o la persona que acuerden la autoridad y el interesado; o cuando parezca indispensable para garantizar la imparcialidad y el debido proceso y el interesado lo solicite, la que designe o contrate para el efecto el Superintendente de Servicios Públicos. Este, a su vez, podrá designar o contratar otra

autoridad o persona para que cumpla las funciones que en este capítulo se le atribuyen.

Los honorarios de cada auxiliar de la administración se definirán ciñéndose a lo que éste demuestre que gana en actividades similares, y serán cubiertos por partes iguales entre la autoridad y quien pidió la prueba, al término de tres días siguientes a la posesión del auxiliar, o al finalizar su trabajo, según se acuerde; el Superintendente sancionará a los morosos, y el auxiliar no estará obligado a prestar sus servicios mientras no se cancelen. Si la prueba la decretó, de oficio, la autoridad, ella asumirá su valor.



**ARTÍCULO 110. IMPEDIMENTO Y RECUSACIONES.**

Cuando haya lugar a impedimentos y recusaciones y la persona que los declare o contra quien se formulen no tenga superior jerárquico inmediato, el Superintendente de Servicios Públicos asumirá las funciones que el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo atribuye al superior inmediato. Si el Superintendente se declarare impedido o fuere recusado, la persona que designe el Presidente de la República asumirá sus funciones.

**ARTÍCULO 111. OPORTUNIDAD PARA DECIDIR.**

La decisión que ponga fin a las actuaciones administrativas deberá tomarse dentro de los cinco meses siguientes al día en el que se haya hecho la primera de las citaciones o publicaciones de que trata el artículo 108 de la presente ley.

**ARTÍCULO 112. NOTIFICACIONES.**

La autoridad podrá contratar con empresas especializadas, de reconocida seriedad, que

ofrezcan póliza de cumplimiento, para que hagan las notificaciones de los actos administrativos a que se refiere esta ley .

**ARTÍCULO 113. RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES QUE PONEN FIN A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.**

Salvo esta ley disponga otra cosa, contra las decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los gobernadores, de los ministros, del Superintendente de Servicios Públicos, y de las comisiones de regulación que pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación o publicación.

Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación.

Durante el trámite de los recursos pueden completarse las pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar.

**ARTÍCULO 114. PRESENTACIONES PERSONALES.**

No será necesaria la presentación personal del interesado para hacer las peticiones o interponer los recursos, ni para su trámite.

**ARTÍCULO 115. PROCEDIMIENTOS CON EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

Cuando la autoridad que adelante el procedimiento administrativo sea el Superintendente de Servicios Públicos, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ejercerá, respecto de éste, aquellas funciones y facultades que en este capítulo se le confieren al Superintendente para garantizar la

imparcialidad de los procedimientos que adelantan otras autoridades.

---

Capítulo III

---

**LAS EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES**

**ARTÍCULO 116. ENTIDAD FACULTADA PARA IMPULSAR LA EXPROPIACIÓN.**

Corresponde a las entidades territoriales, y a la Nación, cuando tengan la competencia para la prestación del servicio, determinar de manera particular y concreta si la expropiación de un bien se ajusta a los motivos de utilidad pública e interés social que consagra la ley, y producir los actos administrativos e impulsar los procesos judiciales a que haya lugar.

**ARTÍCULO 117. LA ADQUISICIÓN DE LA SERVIDUMBRE.**

La empresa de servicios públicos que tenga interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto, podrá solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto administrativo, o promover el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la ley 56 de 1.981.

**ARTÍCULO 118. ENTIDAD CON FACULTADES PARA IMPONER LA SERVIDUMBRE.**

Tienen facultades para imponer la servidumbre por acto administrativo las entidades

territoriales y la Nación, cuando tengan competencia para prestar el servicio público respectivo, y las comisiones de regulación.

**ARTÍCULO 119. EJERCICIO Y EXTINCIÓN DEL DERECHO DE LAS EMPRESAS.**

Es deber de las empresas, en el ejercicio de los derechos de servidumbre proceder con suma diligencia y cuidado para evitar molestias o daños innecesarios a los propietarios, poseedores o tenedores de los predios y a los usuarios de los bienes, y para no lesionar su derecho a la intimidad.

**ARTÍCULO 120. EXTINCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES.**

Las servidumbres se extinguen por las causas previstas en el Código Civil; o por suspenderse su uso por dos años; o si los bienes sobre los cuales recae se hallan en tal estado que no sea posible usar de ellos durante el mismo lapso; o por prescripción de igual plazo; o por el decaimiento a que se refiere el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, si provinieren de acto administrativo.

---

Capítulo IV

---

**TOMA DE POSESIÓN  
Y LIQUIDACIÓN**

**ARTÍCULO 121. PROCEDIMIENTO Y ALCANCES DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

La toma de posesión ocurrirá previo concepto de la comisión que regule el servicio, y puede

realizarse también para liquidar la empresa. No requiere citaciones o comunicaciones a los interesados antes de que se produzca el acto administrativo que la ordene; pero tal acto, que se notificará al representante legal de la empresa o, en su defecto, a cualquier funcionario que se encuentre en las dependencias de ésta, es recurrible en el efecto devolutivo.

La Superintendencia podrá pedir a las autoridades competentes, en el evento de toma de posesión, que declaren la caducidad de los contratos de concesión a los que se refiere esta ley.

Los ingresos de la empresa se podrán utilizar para pagar los gastos de la administración de la Superintendencia. Cuando la toma de posesión no sea una sanción para la empresa, se la indemnizará plenamente por los perjuicios que le pueda haber ocasionado.

Si después del plazo prudencial señalado por el Superintendente para la toma de posesión de una empresa de servicios públicos, para administrarla, que no podrá ser superior a dos (2) años, por razones imputables a sus administradores o accionistas, no se superan los problemas que dieron origen a la medida, la Superintendencia podrá ordenar que se liquide la empresa.

Se aplicarán, en estos casos, y en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación de instituciones financieras. Las referencias que allí se hacen respecto a la Superintendencia Bancaria y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se entenderán hechas a la Superintendencia de servicios públicos; las que se hacen al Consejo Asesor se entenderán referidas a la comisión de regulación; las hechas a los ahorradores se entenderán hechas respecto a los acreedores; y las hechas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se tratarán como inexistentes.

**ARTÍCULO 122. RÉGIMEN DE APORTES EN EVENTOS DE REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL.**

La Superintendencia, en el evento de la reducción en el valor nominal de los aportes a las empresas de servicios públicos cuyo capital esté representado en acciones, podrá disponer que sólo se emitan títulos de acciones por valores superiores a una décima parte de un salario mínimo.

**ARTÍCULO 123. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR; PROCEDIMIENTO.**

La liquidación de las empresas de servicios públicos se hará siempre por una persona que designe o contrate la Superintendencia; el liquidador dirigirá la actuación bajo su exclusiva responsabilidad, y la terminará en el plazo que señale el Superintendente. El liquidador tendrá las facultades y deberes que corresponden a los liquidadores de instituciones financieras, en cuanto no se opongan a normas especiales de esta ley.

---

Capítulo V

---

**LAS FORMULAS TARIFARIAS**

**ARTÍCULO 124. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.**

Para determinar las fórmulas tarifarias se aplicarán las normas sobre régimen tarifario de las empresas de servicios públicos previstas en esta ley, las normas del Código Contencioso Administrativo, y las siguientes reglas especiales:

124.1. La coordinación ejecutiva de la comisión de regulación respectiva impulsará toda la actuación; sin embargo, cuando corresponda a la comisión como autoridad nombrar peritos, el nombramiento corresponderá a la comisión misma.

124.2. Si la actuación se inicia de oficio, la comisión debe disponer de estudios suficientes para definir la fórmula de que se trate; si se inicia por petición de una empresa de servicios públicos, el solicitante debe acompañar tales estudios. Son estudios suficientes, los que tengan la misma clase y cantidad de información que haya empleado cualquier comisión de regulación para determinar una fórmula tarifaria.

**ARTÍCULO 125. ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS.**

Durante el período de vigencia de cada fórmula, las empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los índices de precios que las fórmulas contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince del mes que corresponda, cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en alguno de los índices de precios que considera la fórmula.

Cada vez que las empresas de servicios públicos reajusten las tarifas, deberán comunicar los nuevos valores a la Superintendencia de servicios públicos, y a la comisión respectiva. Deberán, además, publicarlos, por una vez, en un periódico que circule en los municipios en donde se presta el servicio, o en uno de circulación nacional.

**ARTÍCULO 126. VIGENCIA DE LAS FÓRMULAS DE TARIFAS.**

Las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la comisión para modificarlas o prorrogarlas por un período igual. Excepcionalmente podrán modificarse, de oficio o a petición de parte, antes del plazo indicado cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para



continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas.

Vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, continuarán rigiendo mientras la comisión no fije las nuevas.

**ARTÍCULO 127. INICIO DE LA AC-TUACIÓN ADMINISTRATIVA PARA FI-JAR NUEVAS TARIFAS.**

Antes de doce meses de la fecha prevista para que termine la vigencia de las fórmulas tarifarias, la comisión deberá poner en conocimiento de las empresas de servicios públicos las bases sobre las cuales efectuará el estudio para determinar las fórmulas del período siguiente. Después, se aplicará lo previsto en el artículo 124.

**EL CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**Capítulo I**

**NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO**

**ARTÍCULO 128. CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

Es un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados.

Hacen parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la empresa aplica de manera uniforme en la prestación del servicio. Existe contrato de servicios públicos aún cuando algunas de las estipulaciones sean objeto de acuerdo especial con uno o algunos usuarios.

Los contratos entre quienes presten el servicio de larga distancia nacional e internacional y sus usuarios se someterán a las reglas del contrato de servicios públicos que contiene esta ley.

Las comisiones de regulación podrán señalar, por vía general, los casos en los que el suscriptor podrá liberarse temporal o definitivamente de sus obligaciones contractuales, y no será parte del contrato a partir del momento en que acredite ante la empresa, en la forma en que lo determinen las comisiones, que entre él y quienes efectivamente consumen el servicio existe actuación de policía o proceso judicial relacionado con la tenencia, la posesión material o la propiedad del inmueble. En estos casos se facilitará la celebración del contrato con los consumidores.

**ARTÍCULO 129. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.**

Existe contrato de servicios públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble determinado, solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa.

En la enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio.

**ARTÍCULO 130. PARTES DEL CONTRATO.**

Son partes del contrato la empresa de servicios públicos, y los usuarios.

El propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante los jueces competentes ó bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas oficiales de servicios públicos. La factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad, prestará mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

**ARTÍCULO 131. DEBER DE INFORMAR SOBRE LAS CONDICIONES UNIFORMES.**

Es deber de las empresas de servicios públicos informar con tanta amplitud como sea posible en el territorio donde prestan sus servicios, acerca de las condiciones uniformes de los contratos que ofrecen.

Las empresas tienen el deber de disponer siempre de copias de las condiciones uniformes de sus contratos; el contrato adolecerá de nulidad relativa si se celebra sin dar una copia al usuario que la solicite.

**ARTÍCULO 132. RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

El contrato de servicios públicos se registrará por lo dispuesto en esta ley, por las condiciones especiales que se pacten con los usuarios, por las condiciones uniformes que señalen las empresas de servicios públicos, y por las normas del Código de Comercio y del Código Civil.

Quando haya conflicto entre las condiciones uniformes y las condiciones especiales, se preferirán éstas. Al definir los efectos fiscales del contrato de servicios públicos, se tendrá en cuenta que, a pesar de tener condiciones uniformes, resulta celebrado con cada usuario en particular.

**ARTÍCULO 133. ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE.**

Se presume que hay abuso de la posición dominante de la empresa de servicios públicos, en los contratos a los que se refiere este libro, en las siguientes Cláusulas:

133.1. Las que excluyen o limitan la responsabilidad que corresponde a la empresa de acuerdo a las normas comunes; o las que trasladan al suscriptor o usuario la carga de la prueba que esas normas ponen en cabeza de la empresa;

133.2. Las que dan a la empresa la facultad de disolver el contrato o cambiar sus condiciones o suspender su ejecución, o revocar o limitar cualquier derecho contractual del suscriptor o usuario, por razones distintas al incumplimiento de este o a fuerza mayor o caso fortuito;

133.3. Las que condicionan al consentimiento de la empresa de servicios públicos el ejercicio de cualquier derecho contractual o legal del suscriptor o usuario;

133.4. Las que obligan al suscriptor o usuario a recurrir a la empresa de servicios públicos o a otra persona determinada para adquirir cualquier

bien o servicio que no tenga relación directa con el objeto del contrato, o le limitan su libertad para escoger a quien pueda proveerle ese bien o servicio; o lo obligan a comprar más de lo que necesite;

133.5. Las que limitan la libertad de estipulación del suscriptor o usuario en sus contratos con terceros, y las que lo obligan a comprar sólo a ciertos proveedores. Pero se podrá impedir, con permiso expreso de la comisión, que quien adquiera un bien o servicio a una empresa de servicio público a una tarifa que sólo se concede a una clase de suscriptor o usuarios, o con subsidios, lo revenda a quienes normalmente habrían recibido una tarifa o un subsidio distinto;

133.6. Las que imponen al suscriptor o usuario una renuncia anticipada a cualquiera de los derechos que el contrato le concede;

133.7. Las que autorizan a la empresa o a un delegado suyo a proceder en nombre del suscriptor o usuario para que la empresa pueda ejercer alguno de los derechos que ella tiene frente al suscriptor o usuario;

133.8. Las que obligan al suscriptor o usuario a preparar documentos de cualquier clase, con el objeto de que el suscriptor o usuario tenga que asumir la carga de una prueba que, de otra forma, no le correspondería;

133.9. Las que sujetan a término o a condición no previsto en la ley el uso de los recursos o de las acciones que tiene el suscriptor o usuario; o le permiten a la empresa hacer oponibles al suscriptor o usuario ciertas excepciones que, de otra forma, serían inoponibles; o impiden al suscriptor o usuario utilizar remedios judiciales que la ley pondría a su alcance;

133.10. Las que confieren a la empresa mayores atribuciones que al suscriptor o usuario en el evento de que sea preciso someter a decisiones arbitrales o de amigables componedores las controversias que surjan entre ellos;

133.11. Las que confieren a la empresa la facultad de elegir el lugar en el que el arbitramento o la amigable composición han de tener lugar, o escoger el factor territorial que ha de determinar la competencia del juez que conozca de las controversias;

133.12. Las que confieren a la empresa plazos excesivamente largos o insuficientemente determinados para el cumplimiento de una de sus obligaciones, o para la aceptación de una oferta;

133.13. Las que confieren a la empresa la facultad de modificar sus obligaciones cuando los motivos para ello sólo tienen en cuenta los intereses de la empresa;

133.14. Las que presumen cualquier manifestación de voluntad en el suscriptor o usuario, a no ser que:

a. Se dé al suscriptor o usuario un plazo prudencial para manifestarse en forma explícita, y

b. Se imponga a la empresa la obligación de hacer saber al suscriptor o usuario el significado que se atribuiría a su silencio, cuando comience el plazo aludido;

133.15. Las que permiten presumir que la empresa ha realizado un acto que la ley o el contrato consideren indispensable para determinar el alcance o la exigibilidad de las obligaciones y derechos del suscriptor o usuario; y las que la eximan de realizar tal acto; salvo en cuanto esta ley autorice lo contrario;

133.16. Las que permiten a la empresa, en el evento de terminación anticipada del contrato por parte del suscriptor o usuario, exigir a éste:

a. Una compensación excesivamente alta por el uso de una cosa o de un derecho recibido en desarrollo del contrato, o

b. Una compensación excesivamente alta por los gastos realizados por la empresa para adelantar el contrato; o

c. Que asuma la carga de la prueba respecto al monto real de los daños que ha podido sufrir la empresa, si la compensación pactada resulta excesiva;

133.17. Las que limitan el derecho del suscriptor o usuario a pedir la resolución del contrato, o perjuicios, en caso de incumplimiento total o parcial de la empresa;

133.18. Las que limiten la obligación de la empresa a hacer efectivas las garantías de la calidad de sus servicios y de los bienes que entrega; y las que trasladan al suscriptor o usuario una parte cualquiera de los costos y gastos necesarios para hacer efectiva esa garantía; y las que limitan el plazo previsto en la ley para que el suscriptor o usuario ponga de presente los vicios ocultos de los bienes y servicios que recibe;

133.19. Las que obligan al suscriptor o usuario a continuar con el contrato por más de dos años, o por un plazo superior al que autoricen las comisiones por vía general para los contratos con grandes suscriptores o usuarios; pero se permiten los contratos por término indefinido.

133.20. Las que suponen que las renovaciones tácitas del contrato se extienden por períodos superiores a un año;

133.21. Las que obligan al suscriptor o usuario a dar preaviso superior a dos meses para la terminación del contrato, salvo que haya permiso expreso de la comisión;

133.22. Las que obligan al suscriptor o usuario a aceptar por anticipado la cesión que la empresa haga del contrato, a no ser que en el contrato se identifique al cesionario o que se reconozca al cediendo la facultad de terminar el contrato;

133.23. Las que obliguen al suscriptor o usuario a adoptar formalidades poco usuales o injustificadas para cumplir los actos que le corresponden respecto de la empresa o de terceros;

133.24. Las que limitan el derecho de rescisión que corresponda al suscriptor o usuario, derivado de la relación contractual;

133.25. Las que impidan al suscriptor o usuario compensar el valor de las obligaciones claras y actualmente exigibles que posea contra la empresa;

133.26. Cualesquiera otras que limiten en tal forma los derechos y deberes derivados del contrato que pongan en peligro la consecución de los fines del mismo, tal como se enuncian en el artículo 126 de esta ley.

La presunción de abuso de la posición dominante puede desvirtuarse si se establece que las cláusulas aludidas, al considerarse en el conjunto del contrato, se encuentran equilibradas con obligaciones especiales que asume la empresa. La presunción se desvirtuará, además, en aquellos casos en que se requiera permiso expreso de la comisión para contratar una de las cláusulas a las que este artículo se refiere, y ésta lo haya dado.

Si se anula una de las cláusulas a las que se refiere este artículo, conservarán, sin embargo, su validez todas las demás que no hayan sido objeto de la misma sanción.

Cuando una comisión haya rendido concepto previo sobre un contrato de condiciones uniformes, o sobre sus modificaciones, el juez que lo estudie debe dar a ese concepto el valor de una prueba pericial firme, precisa, y debidamente fundada.

---

## Capítulo II

---

### DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

#### ARTÍCULO 134. DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Cualquier persona capaz de contratar que habite o utilice de modo permanente un inmueble,

a cualquier título, tendrá derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios públicos.

**ARTÍCULO 135. DE LA PROPIEDAD DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS.**

La propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, si no fueren inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes.

Sin perjuicio de las labores propias de mantenimiento o reposición que sean necesarias para garantizar el servicio, las empresas no podrán disponer de las conexiones cuando fueren de propiedad de los suscriptores o usuarios, sin el consentimiento de ellos.

Lo aquí dispuesto no impide que se apliquen los procedimientos para imponer a los propietarios las servidumbres o la expropiación, en los casos y condiciones previstos en la ley.

---

## Capítulo III

---

### **EL CUMPLIMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**ARTÍCULO 136. CONCEPTO DE FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**

La prestación continua de un servicio de buena calidad, es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos.

El incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se denomina, para los efectos de esta ley, falla en la prestación del servicio.

La empresa podrá exigir, de acuerdo con las condiciones uniformes del contrato, que se haga un pago por conexión para comenzar a cumplir el contrato; pero no podrá alegar la existencia de controversias sobre el dominio del inmueble para incumplir sus obligaciones mientras el suscriptor o usuario cumpla las suyas.

**ARTÍCULO 137. REPARACIONES POR FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**

La falla del servicio da derecho al suscriptor o usuario, desde el momento en el que se presente, a la resolución del contrato, o a su cumplimiento con las siguientes reparaciones:

137.1. A que no se le haga cobro alguno por conceptos distintos del consumo, o de la adquisición de bienes o servicios efectivamente recibidos, si la falla ocurre continuamente durante un término de quince (15) días o más, dentro de un mismo período de facturación. El descuento en el cargo fijo opera de oficio por parte de la empresa.

137.2. A que no se le cobre el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, si en cualquier lapso de treinta días la frecuencia de recolección es inferior al cincuenta por ciento (50%) de lo previsto en el contrato para la zona en la que se halla el inmueble.

137.3. A la indemnización de perjuicios, que en ningún caso se tasarán en menos del valor del consumo de un día del usuario afectado por cada día en que el servicio haya fallado totalmente o en proporción a la duración de la falla; mas el valor de las multas, sanciones o recargos que la falla le haya ocasionado al suscriptor o usuario; mas el valor de las inversiones o gastos en que el suscriptor o usuario haya incurrido para suplir el servicio.

La indemnización de perjuicios no procede si hay fuerza mayor o caso fortuito.

No podrán acumularse, en favor del suscriptor o usuario, el valor de las indemnizaciones a las que dé lugar este numeral con el de las remuneraciones que reciba por las sanciones impuestas a la empresa por las autoridades, si tienen la misma causa.

**ARTÍCULO 138. SUSPENSIÓN DE COMÚN ACUERDO.**

Podrá suspenderse el servicio cuando lo solicite un suscriptor o usuario, si convienen en ello la empresa y los terceros que puedan resultar afectados. De la misma manera podrán las partes terminar el contrato.

**ARTÍCULO 139. SUSPENSIÓN EN INTERÉS DEL SERVICIO.**

No es falla en la prestación del servicio la suspensión que haga la empresa para:

139.1. Hacer reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos y racionamientos por fuerza mayor, siempre que de ello se dé aviso amplio y oportuno a los suscriptores o usuarios.

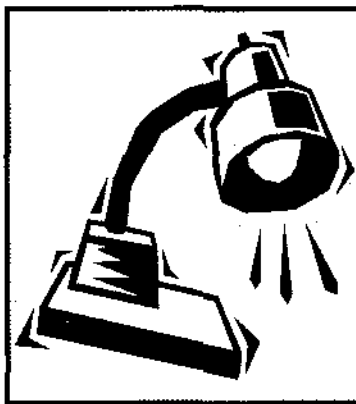
139.2. Evitar perjuicios que se deriven de la inestabilidad del inmueble o del terreno, siempre que se haya empleado toda la diligencia posible, dentro de las circunstancias, para que el suscriptor o usuario pueda hacer valer sus derechos.

**ARTÍCULO 140. SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO.**

El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de tres

períodos de facturación, y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.



Es causal también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del servicio.

Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de suspensión.

Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los demás derechos que las leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.

**ARTÍCULO 141. INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN Y CORTE DEL SERVICIO.**

El incumplimiento del contrato por un período de varios meses, o en forma repetida, o en materias que afecten gravemente a la empresa o a terceros, permite a la empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio. En las condiciones uniformes se precisarán las causales de incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto el contrato.

Se presume que el atraso en el pago de tres facturas de servicios y la reincidencia en una causal de suspensión dentro de un período de dos años, es materia que afecta gravemente a la empresa, que permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio.

La entidad prestadora podrá proceder igualmente al corte en el caso de acometidas fraudulentas. Adicionalmente, y tratándose del servicio de energía eléctrica, se entenderá que para efectos penales, la energía eléctrica es un bien mueble; en consecuencia, la

obtención del servicio mediante acometida fraudulenta constituirá para todos los efectos, un hurto.

La demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio permite a la empresa dar por terminado el contrato, sin perjuicio de sus derechos.

#### **ARTÍCULO 142. RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO.**

Para restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.

Si el restablecimiento no se hace en un plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio.

#### **ARTÍCULO 143. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.**

En todo caso, tanto las empresas como los suscriptores o usuarios podrán exigir la adopción de medidas que faciliten razonablemente verificar la ejecución y cumplimiento del contrato de condiciones uniformes.

mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente.

La empresa podrá establecer en las condiciones uniformes del contrato las características técnicas de los medidores, y del mantenimiento que deba dárseles.

No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada; pero sí será obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfacción de la empresa, cuando se establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o suscriptor, pasado un período de facturación, no tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.

Sin embargo, en cuanto se refiere al transporte y distribución de gas, los contratos pueden reservar a las empresas, por razones de seguridad comprobables, la calibración y mantenimiento de los medidores.

#### **ARTÍCULO 145. CONTROL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES.**

Las condiciones uniformes del contrato permitirán tanto a la empresa como al suscriptor o usuario verificar el estado de los instrumentos que se utilicen para medir el consumo; y obligarán a ambos a adoptar precauciones eficaces para que no se alteren. Se permitirá a la empresa, inclusive, retirar temporalmente los instrumentos de medida para verificar su estado.

## Capítulo IV

### **DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL CONSUMO**

#### **ARTÍCULO 144. DE LOS MEDIDORES INDIVIDUALES.**

Los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen,

### DE LA DETERMINACIÓN DEL CONSUMO FACTURABLE

#### ARTÍCULO 146. LA MEDICIÓN DEL CONSUMO, Y EL PRECIO EN EL CONTRATO.

La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.

La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio. La que tenga lugar por acción u omisión del suscriptor o usuario, justificará la

suspensión del servicio o la terminación del contrato, sin perjuicio de que la empresa determine el consumo en las formas a las que se refiere el inciso anterior. Se entenderá igualmente, que es omisión de la empresa la no colocación de medidores en un período superior a seis meses después de la conexión del suscriptor o usuario.

En cuanto al servicio de aseo, se aplican los principios anteriores, con las adaptaciones que exige la naturaleza del servicio y las reglas que esta ley contiene sobre falla del servicio; entendiéndose que el precio que se exija al usuario dependerá no sólo de los factores de costos que contemplen las fórmulas tarifarias sino en todo caso de la frecuencia con la que se le preste el servicio y del volumen de residuos que se recojan.

En cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en que por razones de tipo técnico de seguridad o de interés social, no exista medición individual, la comisión de regulación respectiva definirá los parámetros adecuados para estimar el consumo.

Las empresas podrán emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes servicios que hacen parte de su objeto y para aquellos prestados por otras empresas de servicios públicos, para los que han celebrado convenios con tal propósito.

En todo caso, las empresas tendrán un plazo a partir de la vigencia de la presente ley para elevar los niveles de macro y micromedición a un 95% del total de los usuarios, para lo cual deberán iniciar un plan, con un porcentaje mínimo de inversión, para la adquisición y financiación de los medidores a los estratos 1, 2, 3.



*Parágrafo:* La comisión de regulación respectiva, en un plazo no superior a tres años a partir de la vigencia de la presente ley, reglamentará los aspectos relativos a este artículo con el fin de evitar traumatismos en la prestación de los servicios objeto de esta ley.

---

## Capítulo VI

---

### DE LAS FACTURAS

#### ARTÍCULO 147. NATURALEZA Y REQUISITOS DE LAS FACTURAS.

Las facturas de los servicios públicos se pondrán en conocimiento de los suscriptores o usuarios para determinar el valor de los bienes y servicios provistos en desarrollo del contrato de servicios públicos.

En las facturas en las que se cobren varios servicios, será obligatorio totalizar por separado cada servicio, cada uno de los cuales podrá ser pagado independientemente de los demás con excepción del servicio público domiciliario de aseo y demás servicios de saneamiento básico. Las sanciones aplicables por no pago procederán únicamente respecto del servicio que no sea pagado.

En las condiciones uniformes de los contratos de servicios públicos podrá preverse la obligación para el suscriptor o usuario de garantizar con un título valor el pago de las facturas a su cargo.

*Parágrafo:* Cuando se facturen los servicios de saneamiento básico y en particular los de aseo público y alcantarillado, conjuntamente con otro servicio público domiciliario, no podrá cancelarse este último con independencia de los servicios de saneamiento básico, aseo o alcantarillado, salvo en

aquellos casos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la entidad prestataria del servicio de saneamiento básico, aseo o alcantarillado.

#### ARTÍCULO 148. REQUISITOS DE LAS FACTURAS.

Los requisitos formales de las facturas serán los que determinen las condiciones uniformes del contrato, pero contendrán, como mínimo, información suficiente para que el suscriptor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley y al contrato al elaborarlas, cómo se determinaron y valoraron sus consumos, cómo se comparan éstos y su precio con los de períodos anteriores, y el plazo y modo en el que debe hacerse el pago.

En los contratos se pactará la forma, tiempo, sitio y modo en los que la empresa hará conocer la factura a los suscriptores o usuarios, y el conocimiento se presumirá de derecho cuando la empresa cumpla lo estipulado. Corresponde a la empresa demostrar su cumplimiento. El suscriptor o usuario no estará obligado a cumplir las obligaciones que le cree la factura, sino después de conocerla. No se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario.

#### ARTÍCULO 149. DE LA REVISIÓN PREVIA.

Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso.

**ARTÍCULO 150. DE LOS COBROS INOPORTUNOS.**

Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario.

**ARTÍCULO 151. LAS FACTURAS Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS.**

Los contratos uniformes podrán establecer que una parte del pago de los servicios públicos confiera al suscriptor o usuario el derecho a adquirir acciones o partes de interés social en las empresas oficiales, mixtas o privadas.

---

Capítulo VII

---

**DEFENSA DE LOS USUARIOS  
EN SEDE DE LA EMPRESA**

**ARTÍCULO 152. DERECHO DE PETICIÓN Y DE RECURSO.**

Es de la esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos.

Las normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y aplicarán teniendo en cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el trato con su clientela, de modo que, en cuanto la ley no disponga otra cosa, se proceda de acuerdo con tales costumbres.

**ARTÍCULO 153. DE LA OFICINA DE PETICIONES Y RECURSOS.**

Todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituirán una «oficina de

peticiones, quejas y recursos», la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que presta dicha empresa.

Estas «oficinas» llevarán una detallada relación de las peticiones y recursos presentados y del trámite y las respuestas que dieron.

Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición.

**ARTÍCULO 154. DE LOS RECURSOS.**

El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo consagre la ley.

No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.

El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.

De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa que enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato.

Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque se emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la superintendencia.

#### **ARTÍCULO 155. DEL PAGO Y DE LOS RECURSOS.**

Ninguna empresa de servicios públicos podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso relacionado con ésta. Salvo en los casos de suspensión en interés del servicio, o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del servicio, tampoco podrá suspender, terminar o cortar el servicio, hasta tanto haya notificado al suscriptor o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen sido interpuestos en forma oportuna.

Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco períodos.

#### **ARTÍCULO 156. DE LAS CAUSALES Y TRÁMITE DE LOS RECURSOS.**

Los recursos pueden interponerse por violación de la ley o de las condiciones uniformes del contrato. En las condiciones uniformes de los contratos se indicará el trámite que debe darse a los recursos, y los funcionarios que deben resolverlos.

#### **ARTÍCULO 157. DE LA ASESORÍA AL SUScriptor O USUARIO EN EL RECURSO.**

Las personerías municipales deberán asesorar a los suscriptores o usuarios que deseen presentar recursos, cuando lo soliciten personalmente.

#### **ARTÍCULO 158. DEL TÉRMINO PARA RESPONDER EL RECURSO.**

La empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él.

#### **ARTÍCULO 159. DE LA NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE PETICIONES Y RECURSOS.**

La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista en esta ley. El recurso de apelación sólo puede interponerse como subsidiario del de reposición ante la superintendencia.

### **NORMAS ESPECIALES PARA ALGUNOS SERVICIOS**

#### **Capítulo I**

#### **AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

#### **ARTÍCULO 160. PRIORIDADES EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS.**

Cuando la Comisión de regulación de agua potable y saneamiento, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios apliquen las normas de

su competencia, lo harán dando prioridad al objetivo de mantener y extender la cobertura de esos servicios, particularmente en las zonas rurales, municipios pequeños y áreas urbanas de los estratos 1 y 2 ; y de tal manera que, sin renunciar a los objetivos de obtener mejoras en la eficiencia, competencia y calidad, éstos se logren sin sacrificio de la cobertura.

**ARTÍCULO 161. GENERACIÓN DE AGUAS Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS.**

La generación de agua, en cuanto ella implique la conservación de cuencas hidrográficas, no es uno de los servicios públicos a los que esta ley se refiere. Si lo es la generación de agua, en cuanto se refiere al desarrollo de pozos, la desalinización y otros procesos similares.

**ARTÍCULO 162. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO, Y DEL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y AGUA POTABLE.**

El Ministerio de Desarrollo, a través del Vice Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, ejercerá las siguientes funciones, además de las competencias definidas para los Ministerios en esta ley, en relación con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo urbano, y además todas aquellas que las complementen.

162.1. Preparar el plan de desarrollo sectorial de acuerdo con las políticas de desarrollo económico y social del país, en coordinación con los Consejos Regionales de Planificación.

162.2. Asistir técnica e institucionalmente a los organismos seccionales y locales, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y de las decisiones de la comisión de regulación de los servicios de agua potable y saneamiento.

162.3. Diseñar y coordinar programas de investigación científica, tecnológica y administrativa para el desarrollo del sector.

162.4. Apoyar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo Nacional de Planeación en el análisis de la contratación y ejecución de los créditos externos a los que la Nación haya otorgado o programe otorgar garantía.

162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico, para el sector rural, en coordinación con las entidades nacionales y seccionales.

162.6. Elaborar y coordinar la ejecución del plan nacional de capacitación sectorial.

162.7. Participar en la Comisión de regulación de los servicios de saneamiento básico. El Ministro sólo podrá delegar su representación en el Viceministro de agua potable y saneamiento básico.

162.8. Proponer a las autoridades rectoras de la gestión ambiental y de los recursos naturales renovables, acciones y programas orientados a la conservación de las fuentes de agua.

162.9. Señalar los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilizan las empresas, cuando la comisión respectiva haya resuelto por vía general que ese señalamiento es realmente necesario para garantizar la calidad del servicio, y que no implica restricción indebida a la competencia.

162.10. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían asignarse y hacer las propuestas del caso durante la preparación del presupuesto de la Nación.

*Parágrafo:* Las funciones de la Dirección de Agua Potable del Ministerio de Obras Públicas y Transporte creadas mediante el Decreto 77 de 1987, que se suprimen a partir de la vigencia de esta ley, con excepción de la de normalización, serán ejercidas por el Vice Ministro de agua potable y saneamiento básico en lo que sean compatibles con la presente ley.

**ARTÍCULO 163. FÓRMULAS TARIFARIAS PARA EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO.**

Las fórmulas tarifarias, además de tomar en cuenta los costos de expansión y reposición de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, incluirán los costos de administración, operación y mantenimiento asociados con el servicio. Además, tendrán en cuenta indicadores de gestión operacional y administrativa, definidos de acuerdo con indicadores de empresas comparables más eficientes que operen en condiciones similares. Incluirán también un nivel de pérdidas aceptable según la experiencia de otras empresas eficientes.

**ARTÍCULO 164. INCORPORACIÓN DE COSTOS ESPECIALES.**

Con el fin de garantizar el adecuado ordenamiento y protección de las cuencas y fuentes de agua, las fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado incorporarán elementos que garanticen el cubrimiento de los costos de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos. Igualmente, para el caso del servicio de asco, las fórmulas tomarán en cuenta, además de los aspectos definidos en el régimen tarifario

que establece la presente ley, los costos de disposición final de basuras y rellenos sanitarios.

Las empresas de servicios del sector de agua potable y saneamiento básico pagarán las tasas a que haya lugar por el uso de agua y por el vertimiento de efluentes líquidos, que fije la autoridad competente de acuerdo con la ley.

Cuando estas empresas produzcan, como autogeneradoras, marginalmente energía para la operación de sus sistemas, la producción de esta energía no estará sujeta al pago de ningún gravamen, tasa o contribución.

**ARTÍCULO 165. FINANCIAMIENTO DE FINDETER.**

Las entidades prestadoras de servicios públicos podrán recibir financiamiento y asesoría por parte de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) para proyectos y programas de inversión en los sectores y actividades a los que se refiere el artículo 5 de la ley 57 de 1989.

**ARTÍCULO 166. VALORIZACIÓN PARA INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.**

Los municipios podrán diseñar esquemas de financiación de inversiones en agua potable y alcantarillado, utilizando el sistema de valorización de predios de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

---

Capítulo II

---

**ENERGIA ELÉCTRICA  
Y GAS COMBUSTIBLE**

**ARTÍCULO 167. REFORMAS Y ESCISIÓN DE ISA, S.A.**

Autorízase al gobierno nacional para modificar el objeto social de Interconexión Eléctrica S.A., que en lo sucesivo será el de atender la operación y mantenimiento de la red de su propiedad, la expansión de la red nacional de interconexión y prestar servicios técnicos en actividades relacionadas con su objeto principal.

Autorízase, así mismo, al gobierno para organizar, a partir de los activos de generación que actualmente posee Interconexión Eléctrica S.A., una empresa, que se constituirá en sociedad de economía mixta, vinculada al Ministerio de Minas y Energía y dedicada a la generación de electricidad.

*Parágrafo 1:* La empresa encargada del servicio de interconexión nacional organizará el centro nacional de despacho como una de sus dependencias internas, que se encargará de la planeación y coordinación de la operación de los recursos del sistema interconectado nacional y de administrar el sistema de intercambios y comercialización de energía eléctrica en el mercado mayorista, con sujeción a las normas del reglamento de operación y a los acuerdos del consejo nacional de operación. Una vez se haya organizado el centro, el gobierno podrá constituir una sociedad anónima que se encargue de estas funciones.

*Parágrafo 2:* La empresa encargada del servicio de interconexión nacional contará con recursos propios provenientes de la prestación de los servicios de despacho, del transporte de electricidad, de los cargos por el acceso y uso de sus redes de interconexión y por los servicios técnicos relacionados con su función.

*Parágrafo 3:* La empresa encargada del servicio de interconexión nacional no podrá participar en actividades de generación, comercialización y distribución de electricidad.

*Parágrafo 4:* El personal de la actual planta de ISA será reubicado en las empresas a que dé origen, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores.

#### **ARTÍCULO 168. OBLIGATORIEDAD DEL REGLAMENTO DE OPERACIÓN.**

Las empresas que hagan parte del sistema interconectado nacional deberán cumplir con

el reglamento de operación y con los acuerdos adoptados para la operación del mismo. En caso contrario se someterán a las sanciones previstas en ésta ley.

#### **ARTÍCULO 169. DEBERES ESPECIALES POR LA PROPIEDAD DE CIERTOS BIENES.**

Las empresas que sean propietarias de líneas, subestaciones y equipos señalados como elementos de la red nacional de interconexión, los usarán con sujeción al reglamento de operación y a los acuerdos adoptados por el consejo nacional de operación, en lo de su competencia, pero podrán adoptar, según convenga, los mecanismos de venta que permitan transferir estos bienes a la empresa nacional de interconexión.

El incumplimiento de las normas de operación de la red nacional de interconexión, la omisión en la obligación de proveer el mantenimiento de las líneas, subestaciones y equipos asociados, y toda conducta que atente contra los principios que rigen las actividades relacionadas con el servicio de electricidad, tal como se expresan en la ley, dará lugar a las sanciones previstas en ella.

#### **ARTÍCULO 170. DEBER DE FACILITAR LA INTERCONEXIÓN.**

Sin perjuicio de lo dispuesto en otras partes de esta ley, las empresas propietarias de redes de interconexión, transmisión y distribución permitirán la conexión y acceso de las empresas eléctricas, de otras empresas generadoras y de los usuarios que lo

soliciten, previo el cumplimiento de las normas que rijan el servicio y el pago de las retribuciones que correspondan.

**ARTÍCULO 171. FUNCIONES DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO.**

El centro nacional de despacho tendrá las siguientes funciones específicas, que deberá desempeñar ciñéndose a lo establecido en el reglamento de operación y en los acuerdos del consejo nacional de operación:

171.1. Planear la operación conjunta de los recursos de generación, interconexión y transmisión del sistema interconectado nacional, teniendo como objetivo una operación segura, confiable y económica;

171.2. Ejercer la coordinación, supervisión, control y análisis de la operación conjunta de los recursos de generación, interconexión y transmisión incluyendo las interconexiones internacionales;

171.3. Determinar el valor de los intercambios resultantes de la operación conjunta de los recursos energéticos del sistema interconectado nacional;

171.4. Coordinar la programación del mantenimiento de las centrales de generación y de las líneas de interconexión y transmisión de la red eléctrica nacional;

171.5. Informar periódicamente al consejo nacional de operación acerca de la operación real y esperada de los recursos del sistema interconectado nacional, y de los riesgos para atender con fiabilidad la demanda;

171.6. Informar las violaciones o conductas contrarias al reglamento de operación.

**ARTÍCULO 172. CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN.**

Créase el Consejo Nacional de Operación que tendrá como función principal acordar los as-

pectos técnicos para garantizar que la operación conjunta del sistema interconectado nacional sea segura, confiable y económica, y ser el órgano ejecutor del reglamento de operación, todo con sujeción a los principios generales de esta ley y a la preservación de las condiciones de competencia.

Las decisiones del consejo nacional de operación serán apelables ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible.

**ARTÍCULO 173. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN.**

El Consejo Nacional de Operación estará conformado por representantes de las empresas de generación conectadas al sistema interconectado nacional y de las empresas comercializadoras, en la forma que establezca el acuerdo de operación. La empresa de interconexión nacional participará en sus deliberaciones con voz pero sin voto.

**ARTÍCULO 174. AREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO PARA GAS DOMICILIARIO.**

Por motivos de interés social y con el propósito de que la utilización racional del recurso gas natural, permita la expansión y cobertura del servicio a las personas de menores recursos, por un término de veinte (20) años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Ministerio de Minas y Energía podrá otorgar las áreas de servicio exclusivo para la distribución domiciliaria del gas combustible por red, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 40 de esta ley.

*Parágrafo 1:* Es obligación del Ministerio de Minas y Energía, al estudiar y otorgar los contratos de que trata el presente artículo, contemplar que en dichas áreas se incluyan programas de masificación y extensión del servicio público de gas combustible en aquellos sectores cuyos inmuebles residenciales pertenezcan a la categoría I, II ó III de

la estratificación socioeconómica vigente al momento de hacerse la instalación. En los contratos existentes al momento de entrar en vigencia la presente ley, el Ministerio de Minas y Energía propenderá porque las empresas contratistas alcancen los niveles de masificación deseables en cumplimiento del presente artículo.

*Parágrafo 2:* Para la consecución de los objetivos establecidos en el presente artículo, se aplicarán los criterios establecidos en los artículos 97 y 99 de la presente ley.

#### **ARTÍCULO 175. ESTÍMULOS A LOS USUARIOS DE GAS COMBUSTIBLE.**

Con el fin de propender por la utilización de fuentes alternativas de energía y para estimular la generación de empleo productivo, especialmente en microempresas, el gobierno nacional creará los estímulos convenientes y necesarios para favorecer a aquellos usuarios que consuman gas combustible. Dichos estímulos se orientarán, preferencialmente, a facilitar la adquisición de equipos industriales o caseros destinados a microempresas que consuman gas combustible.

#### **ARTÍCULO 176.**

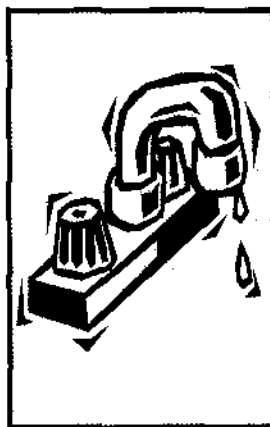
Cuando la nación lo considere necesario podrá, directamente o a través de contratos con terceros, organizar licitaciones a las que pueda presentarse cualquier empresa pública o privada, nacional o extranjera, cuando se trate de organizar el transporte, la distribución y el suministro de hidrocarburos de propiedad nacional que puedan resultar necesarios para la prestación de los servicios públicos a los que se refiere esta ley. La comisión de regulación señalará, por vía general, las condiciones de plazo, precio, y participación de usuarios y terceros

que deben llenar tales contratos para facilitar la competencia y proteger a los usuarios.

### **RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y OTRAS DISPOSICIONES**

#### **ARTÍCULO 177. PROTECCIÓN DE EMPLEADOS.**

Para proteger a los empleados públicos al cumplir esta ley, se aplicará en todo cuanto sea pertinente el capítulo IV del decreto 2152 de 1992, o las normas que lo reemplacen, aún en el evento de que por cualquier causa termine la vigencia de dicho decreto.



Las personas que desempeñan las posiciones de expertos en las comisiones de regulación que crearon los decretos 2119/92, 2152/92 y 2122/92, pasarán a ocupar las mismas posiciones en las comisiones que regula esta ley, hasta el cumplimiento del período para el que fueron inicialmente nombradas,

sin desmejorar en forma alguna las condiciones de su vinculación con el Estado.

#### **ARTÍCULO 178. EXTENSIÓN A OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES.**

Para los efectos de la presente ley, siempre que se hable de municipios, y de sus autoridades, se entenderán incluidos también los distritos, los territorios indígenas que se constituyan como entidades territoriales, y el departamento de San Andrés y Providencia; y aquellas autoridades cuyas que puedan asimilarse con más facilidad a las correspondientes autoridades municipales.



**ARTÍCULO 179. TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN EN TARIFAS.**

Las normas sobre tarifas actualmente vigentes continuarán en vigor hasta un máximo de veinticuatro meses después de iniciar su vigencia ésta ley, mientras terminan los procedimientos administrativos de señalamiento de fórmulas previstos atrás.

En algunos casos especiales, a juicio de la comisión de regulación, los límites en los factores a que se refiere el artículo 89, no se aplicarán sino luego de seis años de entrar en vigencia la ley. Sin embargo, la comisión obligará a la empresa a ajustarse progresivamente a estos límites durante ese período.

**ARTÍCULO 180. TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS EXISTENTES.**

Las entidades descentralizadas que estuvieren prestando los servicios a los que esta ley se refiere, se transformarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de esta ley, en un plazo de dos años a partir de su vigencia.

Cuando se transforme una entidad descentralizada existente en una empresa de servicios públicos, en el acto que así lo disponga se prevenirán todas las operaciones indispensables para garantizar la continuidad del servicio así como para regular la asunción

por la nueva empresa en los derechos y obligaciones de la entidad transformada. No se requerirá para ello pago de impuesto alguno por los actos y contratos necesarios para la transformación, o por su registro o protocolización.

*Parágrafo:* Se aplicará igualmente lo dispuesto en este artículo cuando la transformación y

la creación de una empresa de servicios públicos se produzca por escisión de una entidad descentralizada existente.

**ARTÍCULO 181. VIABILIDAD EMPRESARIAL.**

Todas las empresas de servicios públicos, o quienes al entrar en vigencia esta ley estén prestando servicios públicos domiciliarios, llevarán a cabo durante el período de transición de dos años, una evaluación de su viabilidad empresarial a mediano y largo plazo, de acuerdo a las metodologías que aprueben las respectivas comisiones de regulación.

Si de la evaluación se desprende que el valor patrimonial es negativo o si las obligaciones existentes exceden la capacidad operativa de la empresa para servir las, la comisión de regulación respectiva exigirá que se presente un plan de reestructuración financiero y operativo. Dentro de este plan, se autoriza a la Nación, a las entidades territoriales y a las entidades descentralizadas de aquella o de éstas, para asumir o adquirir pasivos, inclusive laborales, de las entidades que se transforman o de las empresas, así como para hacerles aportes y para condonarles deudas.

**ARTÍCULO 182. FORMACIÓN DE EMPRESAS NUEVAS.**

Cuando la nación o las entidades territoriales hayan estado prestando directamente un servicio público, deberán constituir las empresas de servicios públicos necesarias, dentro del plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la publicación de la presente ley, salvo en los casos contemplados en el artículo 6 de esta ley. A ellas podrán aportar todos los bienes y derechos que veían utilizando con ese propósito, y otros adicionales. Las nuevas empresas podrán asumir los pasivos de las entidades oficiales que prestaban el servicio, sin el consentimiento de los acreedores,

pero quienes prestaban el servicio seguirán siendo deudores solidarios.

**ARTÍCULO 183. CAPITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

Los bienes que la nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de aquella y éstas posean en las empresas de servicios públicos, de que trata la presente ley, los pasivos de cualquier naturaleza que estas entidades tengan con aquellas y los pasivos que las mismas entidades tengan a favor de cualquier otra, y que hayan sido avalados por la nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de aquella y éstas, podrán ser convertidos en acciones de las empresas de servicios.

**ARTÍCULO 184. TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN EN CUANTO A ESTRATIFICACIÓN.**

Las estratificaciones que se hayan hecho antes de la publicación de esta ley y en cumplimiento de los Decretos 2545/86, 394/87, 189/88, 196/89, 700/90 y los que se expidan con anterioridad a la vigencia de la presente ley, continuarán vigentes hasta cuando se realicen otras nuevas en base a lo que esta ley establece.

**ARTÍCULO 185. TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA.**

La Superintendencia de Industria y Comercio continuará ejerciendo las funciones señaladas en el decreto 2153 de 1992, respecto de las empresas oficiales, mixtas o privadas que presten los servicios públicos de que trata esta ley, hasta el 30 de Junio de 1995. Pero si antes de este período se organiza la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de tal manera que pueda ejercer plenamente sus funciones, la Superintendencia de Industria y Comercio dejará inmediatamente de ejercer las funciones pertinentes.

**ARTÍCULO 186. CONCORDANCIAS Y DEROGACIONES.**

Para efectos del artículo 84 de la Constitución Política, esta ley reglamenta de manera general las actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en esta ley; deroga todas las leyes que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar las leyes especiales que se dicten para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere. En caso de conflicto con otras leyes sobre tales servicios, se preferirá ésta, y para efectos de excepciones o derogaciones, no se entenderá que ella resulta contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen de modo preciso la norma de esta ley objeto de excepción, modificación o derogatoria.

Deróganse, en particular, el artículo 61, literal «f», de la ley 81 de 1988; el artículo 157 y el literal «c» del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986; el inciso segundo del artículo 14; y los artículos 58 y 59 del Decreto 2152 de 1992; el artículo 11 del Decreto 2119 de 1992; y el artículo 1 en los numerales 17, 18, 19, 20 y 21, y los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 2122 de 1992.

**ARTÍCULO 187. DIVULGACIÓN.**

Los gobiernos nacional, departamentales, distritales y municipales, tendrán la obligación de divulgar ampliamente y en forma didáctica a todos los niveles de la población colombiana, y en detalle, las disposiciones contenidas en la presente ley.

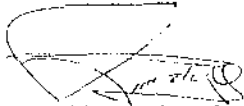
**ARTÍCULO 188. TRANSITORIO.**

Las comisiones de regulación seguirán operando y ejecutando su presupuesto hasta que entren en funcionamiento las comisiones de que trata esta ley, las cuales podrán ejecutar las apropiaciones presupuestales que queden disponibles de las primeras, y atenderán, hasta su pago total, las obligaciones ori-

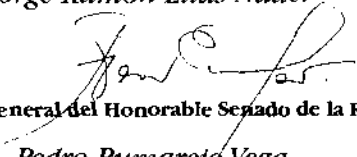
ginadas en estas. El gobierno hará las operaciones presupuestales necesarias.

**ARTÍCULO 189. VIGENCIA.**

Salvo cuando ella disponga otra cosa, esta ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

  
El Presidente del Honorable Senado de la República,

*Jorge Ramón Elías Nader*

  
El Secretario General del Honorable Senado de la República,

*Pedro Pumarejo Vega*

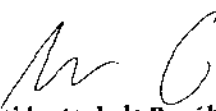
  
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,

*Francisco José Jattin Safar*

  
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,

*Diego Vivas Tafur*

Dada en Santafé de Bogotá D.C.  
a 11 de Julio de 1994

  
Presidente de la República


*César Gaviria Trujillo*

  
El Ministro de Hacienda Y Crédito Público (E)

*Héctor José Cadena Clavijo*

  
El Ministro de Desarrollo Económico

*Mauricio Cárdenas Santa-María*

  
El Ministro de Minas y Energía

*Guido Nule Amin*

  
El Ministro de Comunicaciones

*William Jaramillo Gómez*

  
El Director del Departamento Nacional de Planeación

*Armando Montenegro*



# Indice Analítico

## A

### ACCIONES

- Adquisición como parte del pago de los servicios: art. 151
- Conversión de activos y pasivos en: art. 183
- Emisión y colocación: art. 19.10
- Oferta de: art. 19.4

### ACOMETIDA

- Definición: art. 14.1
- Fraudulenta: art. 141
- Propiedad de la: art. 135

### ACUEDUCTO

- Definición: art. 14.22

### ACTAS

- De las empresas de servicios públicos: art. 19.11

### ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

- art. 14.2

### ACTO ADMINISTRATIVO

- Citación para un: art. 107
- Comunicación del: art. 107
- Contratación de las notificaciones: art. 112
- Impedimentos: art. 110
- Nulidad del acto, efecto sobre el contrato de servicios públicos: art. 38
- Para determinar fórmulas tarifarias: art. 124
- Para fijar tarifas: art. 127
- Personalidad interpuesta del: art. 37
- Plazo para decidir: art. 111
- Práctica de pruebas y decisiones de recursos: art. 109
- Pruebas incompletas: art. 113
- Recurso de apelación: art. 113
- Recurso de reposición: art. 113
- Recusación: art. 110
- Régimen de derecho privado para los: art. 32
- Unilaterales: art. 106 al 115

### ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS: art. 125, 126, 127

### ADMINISTRADORES

- Comunes: art. 21
- Obligaciones: art. 19.8, 19.13

### ADOPCIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN: art. 101.3

### ADQUISICIÓN

- De bienes o servicios no relacionados: art. 129

### AFORO INDIVIDUAL: art. 146, 149

### AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: art. 160 AL 166

### ALCALDE

- Funciones: art. 20, 27.6, 99.5, 101.1, 101.3, 101.5, 101.6
- Obligaciones con la estratificación: art. 101.1, 101.3, 101.5, 101.6
- Sanción disciplinaria al: art. 101.10
- Suspensión del: art. 99.4

### ALCANTARILLADO

- Definición: 14.23

Facturación del: art. 147, 147-P  
AUTERACIÓN  
Condiciones contractuales: art. 140  
AMPARO POLICIVO: art. 29  
APLICACIÓN DE LA LEY 142/94  
Ámbito de: art. 1  
APORTANTES  
A la componente tarifaria: art. 99.6  
APORTES  
A las empresas de servicios públicos:  
art. 19.3  
A los subsidios en caso de montos  
insuficientes: art. 89.8  
De conexión: art. 95  
De la comunidad para la expansión  
de los servicios: art. 63.2  
De la nación: art. 97, 99.9, 100, 101.9,  
162.10  
De las entidades públicas: art. 87.9  
De los departamentos: art. 97, 99.9,  
100, 101.9  
De los municipios: art. 97, 99.8, 100  
De las comisiones y de la Superinten-  
dencia: art. 85  
En especie a las E.S.P.: art. 19.7  
Para cubrir los costos conexión:  
art. 97  
Para cubrir los costos de la acometida  
y medidor: art. 97  
Reducción en el valor nominal de los:  
art. 122  
Régimen: art. 27.7, 87.9  
APOYO  
De la Superintendencia a los Comités  
de Desarrollo y Control Social:  
art. 79.2, 80.1, 80.2  
APROBACIÓN  
Previa de contratos, prohibición  
al Superintendente: art. 79  
ARANCELES: art. 23  
AREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO  
Invitación pública para: art. 40  
Para la distribución de gas combusti-  
ble por red: art. 174  
ASAMBLEAS DE LAS E.S.P.:  
art. 19.9, 19.11  
ASEO  
Definición: 14.24  
Facturación del servicio de: art. 147,  
147-P

ASESORÍA  
Al usuario: art. 157  
ASISTENCIA TÉCNICA  
Para realizar la estratificación:  
art. 101.7  
AUDITORÍA EXTERNA  
Obligación de su contratación: art. 51  
Condiciones para eximir a las  
empresas de su contratación: art. 51-P  
Publicación de las evaluaciones: art. 53  
AUMENTO DE CAPITAL  
En las E.S.P.: art. 19.4  
AUTOGENERADORES  
De energía: art. 74.1 b, 89.4, 164  
AUTONOMÍA  
Administrativa, garantía de la: art. 27.5  
De las empresas oficiales de servicios  
públicos: art. 27.5  
AUTORIDAD COMPETENTE: art. 178  
Notificación de liquidación  
de empresas: art. 61  
Decisiones de las, en relación  
con los servicios públicos: art. 3  
AUTORIDAD MUNICIPAL, FUNCIONES:  
art. 62, 65.1

---

## B

---

BENEFICIARIOS  
De los subsidios: art. 99.7  
BIENES  
De las empresas: art. 28, 169  
De la Nación y de las entidades  
territoriales: art. 27.4  
Enajenación de: art. 33

---

## C

---

CADUCIDAD  
De contratos: art. 81.5  
De las concesiones de agua: art. 39.1  
De permisos: art. 59.4  
CALAMIDAD: art. 59.5

CALIDAD DEL SERVICIO: art. 2.1, 136  
CÁMARA DE COMERCIO: art. 54  
CAPACITACIÓN DE VOCALES:  
art. 65.2, 80.2  
CAPITAL  
Adquisición: art. 44.3  
Pagado: art. 19.6  
Participación de las empresas oficiales  
de las E.S.P.: art. 27  
Suscrito: art. 19.5  
CAPITALIZACIÓN  
De las empresas de servicios públicos:  
art. 183  
CARGO  
Conexión: art. 90.3, 95, 136  
Fijo: art. 90.2  
Otros cobros tarifarios: art. 96  
Por consumo: art. 90.1  
Reconexión: art. 96  
Reinstalación: art. 96  
CARGO FIJO  
Descuento: art. 137.1  
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS:  
art. 27.3, 36.6, 44.4, 129, 130  
Con otras empresas de servicios  
públicos: art. 61  
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO: art.  
167-P1, 171  
CERTIFICADO DE ESTRATIFICACIÓN:  
art. 101.9  
CESIÓN  
De los contratos de servicios públicos:  
art. 129  
Prohibición de: art. 39-P  
CITACIÓN  
Para un acto administrativo: art. 107  
CLASIFICACIÓN DE ESTRATOS:  
art. 102  
CLÁUSULAS EXORBITANTES  
Inclusión de: art. 31  
COBERTURA  
De medición: art. 146  
Del servicio: art. 2.2, 160  
COBROS  
Aseo público: art. 137.2  
Ejecutivo: art. 130  
Inoportuno de la factura: art. 150  
No autorizados: art. 95  
Por consumo: art. 137.1  
Reconexión: art. 96

Reinstalación: art. 96  
CÓDIGO DEL COMERCIO  
Régimen de las E.S.P.: art. 19.15  
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO:  
art. 41  
COMISIÓN DE REGULACIÓN:  
art. 68 AL 73  
Aporte de información  
para la actuación: art. 124.2  
Áreas de servicio exclusivas: art. 40-P1  
Autorización previa: art. 73  
Caducidad del contrato de concesión:  
art. 39.1  
Calidad del servicio: art. 162.9  
Carácter integral de la tarifa: art. 87.8  
Claúsulas exorbitantes: art. 31  
Cobertura en medición: art. 146-P  
Composición de la: art. 71  
Concentración de la propiedad:  
art. 73.25  
Conceptos de la: art. 73.10, 133  
Consultas a la: art. 73.24  
Contratos: art. 31  
Contratos que regulan el acceso  
compartido: art. 39.4  
Contribuciones especiales: art. 85  
Control, mecanismos de: art. 45, 52  
Coordinación ejecutiva: art. 124.1  
De agua potable: art. 69.1, 162.7  
De energía: art. 69.2, 172, 176  
De telecomunicaciones: art. 69.3  
Definición de indicadores: art. 73.3  
Delegación de funciones presiden-  
ciales a la: art. 68  
Delegación de la participación del  
Ministro de Desarrollo: art. 162.7  
Derechos de los usuarios: art. 9.1, 9-P,  
73.21  
Determinación de tarifas: art. 88.1, 96  
Eficiencia: art. 73.3  
Escisión de empresas: art. 73.13  
Estatutos de la: art. 73.17  
Estimación de parámetros de consu-  
mo: art. 146  
Estratos receptores de subsidio: art. 99.7  
Estructura orgánica: art. 70, 105  
Excedentes de las contribuciones  
especiales: art. 85.3  
Expertos: art. 71-P2, 177  
Factor de subsidio: art. 89, 179

Facturas y discriminación de valores:  
art. 89  
Facultades: art. 18, 19.11, 21, 23, 28,  
31, 35, 40-P1, 40-P2, 45, 52, 73.26,  
88.1, 88.3, 89, 89.1, 89.2, 90  
Fijación de garantías: art. 73.6  
Financiación exclusiva de la: art. 85-P1  
Funciones: art. 73, 127, 9-P  
Fusión de empresas: art. 73.14  
Garantías: art. 73.6  
Imposición de servidumbre: art. 39.4  
Incompatibilidades: art. 44, 73.19  
Indicadores: art. 73.3  
Información: art. 73.26  
Información, aporte para la actuación:  
art. 124.2  
Interposición de recursos: art. 73.7  
Legalidad de actos: art. 37  
Libertad regulada: art. 73.20  
Libertad vigilada: art. 73.20  
Liquidación de empresas: art. 73.15  
Manejo de los recursos: art. 72  
Mecanismos de control: art. 45, 52  
Medición: art. 73.12  
Metodología para fijar tarifas:  
art. 87-P2, 88.1, 88.3  
Modelos de gestión: art. 73.5  
Modificación de fórmulas tarifarias:  
art. 96, 126  
Modificación de la estructura orgáni-  
ca: art. 70, 105  
Multas - Consultas a la: art. 79.11  
Naturaleza: art. 69  
Nombramiento de peritos: art. 124.1  
Normas de calidad: art. 73.4  
Obligaciones contractuales, liberación  
de: art. 128  
Organización: art. 69  
Posición dominante: art. 73.21  
Preparación de proyectos de ley:  
art. 73.1  
Prioridad de aplicación de las normas:  
art. 160  
Prohibición de reventa: art. 133.5  
Provisiones financieras obligaciones  
pensionales: art. 43  
Realización de obras: art. 73.5  
Redes, uso y acceso: art. 73.22  
Régimen transitorio de la tarifa: art. 188  
Reglamentos: art. 73.17

Regulación de monopolios: art. 73.2  
Reparto de superávits oficiales: art. 89.2  
Reparto de superávits en E.S.P.  
privadas o mixtas: art. 89.2  
Resolución de conflictos:  
art. 73.8, 73.9, 83  
Restricciones a la recuperación de  
costos y gastos de la tarifa: art. 92  
Revisión y actualización de tarifas:  
art. 87-P1, 127  
Servicios sin medición individual:  
art. 146  
Solicitud de investigaciones  
a la Superintendencia: art. 73.18  
Subsidios: art. 73.23, 89, 99.7  
Tarifas:  
art. 39-P, 73.11, 87-P2, 88.1, 96, 127  
Topes tarifarios: art. 88.1  
Transformación de productores  
marginales en E.S.P.: art. 16  
Transferencia de superávits: art. 89.2  
Usuarios, derechos de los: art. 73.21  
Viabilidad empresarial: art. 181  
Y los mecanismos de control:  
art. 45, 52  
COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN:  
art. 101.5, 104  
COMITÉS DE DESARROLLO  
Y CONTROL SOCIAL  
Aportes de la comunidad: art. 63.2  
Apoyo de la Superintendencia al:  
art. 79.2  
Estudio y análisis de los subsidios:  
art. 63.4  
Funciones: art. 63  
Organización: art. 62  
Reglamento: art. 62  
Requisitos: art. 62  
Solicitud de imposición de multas:  
art. 63.5  
Solicitud de revisión de la estratifica-  
ción: art. 63.3  
Vocal de control: art. 62, 64  
COMPETENCIA ECONÓMICA: art. 2.6,  
26, 73.16, 86.3, 88.3, 162.9  
Restricciones indebidas a la: art. 34  
COMPETENCIA DE LOS  
DEPARTAMENTOS  
Prestación de servicios públicos: art. 7  
COMPONENTES DE LA TARIFA: art. 99.6

## COMPRAS

Al por mayor: art. 93  
Invitación pública: art. 93

## COMUNICACIÓN

Del acto administrativo: art. 107

## COMUNIDAD

Aportes al programa de expansión:  
art. 63.2  
Apoyo de la superintendencia: art. 80.3  
Concertación con la autoridad  
municipal: art. 65.1

## CONCEJO MUNICIPAL

Fondo de solidaridad y redistribución  
de ingresos: art. 89, 99.8  
Junta administradora para prestación  
directa del servicio: art. 6  
Presupuesto para los subsidios: art. 99.5

## CONCERTACIÓN

Entre autoridades municipales  
y la comunidad: art. 65.1

## CONCESIÓN DE AGUA

Caducidad de la: art. 39.1

## CONCORDANCIAS

De la ley 142/94: art. 186

## CONDICIONES UNIFORMES

Del contrato a la E.S.P.: art. 132

## CONDONACIÓN DE DEUDA A LA E.S.P.:

art. 181

## CONEXIÓN

Disponibilidad: art. 135  
Pago por: art. 90.3, 95, 136

## CONGRESO DE LA REPUBLICA:

art. 17-P1, 89.3

## CONSEJO

### CONSEJO NACIONAL DE OPERACION

Creación: art. 172  
Deber de información: 171.5  
Integración: art. 173

### CONSEJO REGIONAL

DE PLANIFICACIÓN: art. 162.1

## CONSUMO

Cargo por: art. 90.1  
Promedio, facturación por: art. 146

## CONTINUIDAD DE LA GESTION

GERENCIAL: art. 27.5

## CONTINUIDAD DEL SERVICIO:

art. 2.4, 136

## CONTRADICCIÓN

Entre los criterios de eficiencia  
y suficiencia financiera: art. 87.7

## CONTRALORÍA: art. 27.4

## CONTRATACIÓN

De la estratificación: art. 101.2  
De la notificación de actos administra-  
tivos: art. 112  
Por licitación de transporte, distribu-  
ción y suministro de hidrocarburos:  
art. 176

## CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Adquisición de acciones  
de las empresas: art. 151  
Celebración del: art. 129  
Cesión del: art. 129  
Cumplimiento del: art. 143  
Definición: art. 128  
Especial para la gestión de los  
servicios públicos: art. 39, 40  
Nulidad de acto sobre el: art. 38  
Partes del: art. 130  
Régimen legal: art. 132

## CONTRATOS DE LAS EMPRESAS:

art. 30 AL 44

Caducidad: art. 81.5  
Celebración de:  
art. 27.3, 36.6, 44.4, 129, 130  
Cesión de: art. 39-P, 129  
Cláusulas exorbitantes: art. 31  
Con el municipio por el pago  
de subsidios: art. 99.8  
Condiciones objetivas del: art. 35  
Condiciones uniformes del: art. 132  
Constitución en mora: art. 36.1  
Copia del: art. 31  
De administración profesional  
de acciones: art. 39.2  
De concesión: art. 25, 39.1, 121  
De concesión de aguas: art. 39.1  
De concesión de gas con cláusulas de  
áreas de servicios exclusivos: art. 40-P2  
De entidades estatales: art. 44.4  
De fiducia: art. 27.3, 39.2, 60.1, 72  
De garantía: art. 36.5  
De las entidades oficiales para  
transferir la propiedad o el uso  
y goce de bienes: art. 39.3  
De servicios públicos: art. 129  
Donaciones a empresas de servicios  
públicos: art. 36.2  
En áreas de servicio exclusivas: art. 40  
Interpretación de los principios: art. 30

## Modificación de las condiciones

de los: art. 36.5, 73.10, 133  
Naturaleza del: art. 128  
Para la extensión de la prestación  
de un servicio: art. 39.5  
Partes del: art. 130  
Permiso para contratar: art. 73  
Personalidad interpuesta de: art. 37  
Principios de interpretación: art. 30  
Publicación de las condiciones del:  
art. 131  
Régimen de derecho privado de los:  
art. 32  
Reglas a aplicar: Art. 36, 44.4, 87-P1  
Renuncia a derechos contractuales:  
art. 36.4  
Resolución de: art. 137  
Terminación anticipada: art. 133.16  
Terminación:  
art. 133.21, 133.22, 138, 141, 146  
Vigilancia y control: art. 79.2  
CONTRATOS ESPECIALES: art. 39  
Para áreas de servicio exclusivo:  
art. 40, 174  
Para el acceso compartido  
o de interconexión: art. 39.4  
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL  
DE LA EMPRESA: art. 79.4, 85  
Aportes del contribuyente a la: art. 85.4  
Componentes de costos de la: art. 85.1  
Excedentes: art. 85.3  
Liquidación de los aportes: art. 85.5  
Recaudo de los aportes: art. 85.5  
Sanción por mora: art. 85.6  
Tope máximo: art. 85.2  
CONTROL  
Auditoría externa: art. 51  
De gestión y resultados: art. 50, 51, 52  
De la jurisdicción en los contenciosa  
administrativo: art. 33  
Financiero: art. 50  
Fiscal: art. 50  
Interno: art. 46, 49  
Principios rectores del: art. 45  
Privado: art. 27.4, 48  
Responsabilidad del: art. 49  
Tránsito de legislación: art. 185  
CONVENIOS DE ESTRATIFICACIÓN:  
art. 101.6  
COPIA DEL CONTRATO DE S.P.: art. 131



CORTE DEL SERVICIO: art. 141  
COSTO MÍNIMO OPTIMIZADO: art. 14.3  
COSTOS

Componentes de: art. 163  
Conexión domiciliaria: art. 97  
De administración: art. 163  
De la información: art. 79.13  
Especiales: art. 164  
Económico: art. 89.5  
Expansión: art. 163  
Mantenimiento: art. 163  
Operación: art. 163  
Protección de las fuentes de agua:  
art. 164  
Recol, transp. tratam. de residuos  
líquidos: art. 164  
Relleno sanitario: art. 164  
Reposición de sistemas: art. 163

#### CRITERIOS

De solidaridad y redistribución  
de ingresos: art. 89  
Para definir el régimen tarifario: art. 87  
Para fijar tarifas: art. 87

CRÍTICA DE LOS CONSUMOS: art. 149

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

DE S.P.: art. 143

## D

#### DECISIÓN ARBITRAL

En las E.S.P.: art. 19.14

#### DECLARACIÓN

De utilidad pública e interés social:  
art. 56

#### DEDUCCIONES

De las inversiones en E.S.P.: art. 24.4

#### DELEGACIÓN

De la participación en los Comités  
de Desarrollo y Control Social: art. 62

#### DEPARTAMENTO

Amparo policivo del: art. 29  
Aportes a costos de conexión: art. 97  
Asistencia técnica para estratificación:  
art. 101.7, 101.11  
Capacitación de vocales: art. 65.2

Competencia en la prestación  
del servicio: art. 7

Gobernador:

art. 27.6, 99.4, 101.11, 101.12  
Promoción y coordinación del sistema  
de participación de usuarios: art. 65.2  
Sanción disciplinaria al gobernador:  
art. 101.12  
Subsidios, con recursos del:  
art. 99.9, 101.9

#### DERECHO

De la empresa a construir, modificar  
y operar las redes: art. 28

Del usuario a la libre elección  
del prestador del servicio: art. 9.2

A la medición: art. 9.1, 146

Al servicio: art. 134

A adquirir acciones de la empresa:  
art. 151

De los usuarios: art. 9, 137, 151

De petición: 152, 153

De servidumbre: art. 33, 119, 120

De los prestadores de servicios  
públicos: art. 28, 33

Obtener bienes y servicios en calidad  
o cantidad superior: art. 9.3

Reconocidos por la ley: art. 9-P

Solicitar y obtener información  
completa y oportuna: art. 9.4

#### DEROGACIONES

Establecidas en la ley 142/94: art. 186

#### DESTINO

De los subsidios: art. 89

De superávits de subsidios: art. 89.2

#### DEUDA

Condonación de: art. 181

#### DISCRIMINACIÓN

Prohibición de prácticas de: art. 34

#### DISOLUCIÓN

De las E.S.P.: art. 19.12

#### DIVULGACIÓN

De la ley 142/94: art. 187

#### DONACIONES

A empresas de servicios públicos:  
art. 36.2

#### DURACIÓN

De las E.S.P.: art. 19.2

## E

#### ECONOMÍAS

De aglomeración: art. 14.4

De escala: art. 2.7

#### EFICIENCIA

Del servicio: art. 2.5

Económica: art. 87.1, 87.7

#### ELEMENTOS

De la factura: 147

De las fórmulas de tarifas: art. 90

#### EMPLEADOS

Públicos: art. 177

#### EMPRESA

De generación de electricidad: art. 167

#### EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Aportes en especie a las: art. 19.7

Arbitramento: art. 19.14

Asambleas de las: art. 19.9, 19.11

Auditoría externa: art. 51

Aumento de capital: art. 19.4

Bienes de las: art. 28, 169

Capital pagado: art. 19.6

Capital suscrito: art. 19.5

Capitalización de las: art. 183

Con aportes oficiales: art. 27.4

Constitución por documento privado:  
art. 20.1

Derechos, a construir, modificar  
y operar las redes: art. 28

Disolución de las: art. 19.12

Donaciones a las: art. 36.2

Duración de las: art. 19.2

En municipios menores:

art. 20, 20.1-20.2

En zonas rurales: art. 20

Escisión: art. 73.13, 180-P

Estatutos, modificación: art. 17-P1

Excepción de organizarse como E.S.P.:  
art. 16

Exención de impuestos: art. 24.2, 180

Financiamiento de Findeter: art. 165

Gravamen de las: art. 24.1

Libertad para fijar tarifas: art. 88.2, 88.3

Liquidación: art. 60.2, 61, 73.15, 121

Mixta: art. 14.6

Multas: art. 63.5

Naturaleza: art. 17

- Objeto: art. 18  
Objeto exclusivo: art. 18  
Objeto social múltiple: art. 18  
Oficial: art. 14.5  
Pago del servicio en acciones: art. 151  
Participación de entidades públicas en E.S.P.: art. 27  
Participación en otras empresas de servicios públicos: art. 18  
Petición de fórmulas tarifarias: art. 124.2  
Prácticas discriminatorias: art. 34  
Privada: art. 14.7  
Prohibiciones: art. 95, 155  
Recuperación del patrimonio: art. 94  
Régimen jurídico: art. 19  
Régimen tributario: art. 24  
Servidumbre, ejercicio del derecho de: art. 119  
Sistemas de información: art. 53  
Subsidios a otras empresas de servicios públicos: art. 100  
Suspensión de: art. 81.7  
Viabilidad empresarial: art. 181
- EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO:** art. 17-P1  
**EMPRESAS DISTRIBUIDORAS:** art. 93  
**EMPRESAS OFICIALES DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
Autonomía: art. 27.5  
Junta directiva, selección de miembros: art. 27.6  
Obligaciones: art. 17-P2
- ENAJENACIÓN DE BIENES:** art. 33, 129  
**ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS**  
Administración y control de los recursos: art. 171.2  
Áreas de servicio exclusivo: art. 174  
Autogeneradores de energía: art. 89.4, 164  
Bienes de empresas: art. 169  
Centro Nacional de Despacho: art. 167-P1, 171  
Consejo Nacional de Operación: art. 171.5, 172, 173  
Contratación del transporte, distribución y suministro de hidrocarburos: art. 176  
Empresa de generación: art. 167  
Empresa de interconexión: art. 167  
Estímulos a usuarios de gas: art. 175
- ISA: art. 167  
Mantenimiento de centrales: art. 171.4  
Masificación del servicio de gas: art. 174-P1  
Operación del sistema: art. 171.1  
Permiso de acceso a redes: art. 170  
Reubicación del personal de ISA: art. 167-P4  
Reglamento de operación: art. 168.169, 171.6, 172  
Valor de intercambios de electricidad: art. 171.3  
Violación de normas: art. 171.6
- ENTIDAD REPARTIDORA DEL SUBSIDIO:** art. 99.2  
**ENTIDADES DESCENTRALIZADAS**  
Régimen especial de las: art. 27  
Transformación: art. 17, 180
- ENTIDADES PÚBLICAS**  
Control privado: art. 27.4  
Derechos: art. 27.3  
Participación en E.S.P.: art. 27
- ENTIDADES TERRITORIALES**  
Bienes de las: art. 27.4  
Expropiación: art. 116  
Imposición de servidumbre: art. 118  
Formación de empresas nuevas: art. 182
- ESCISIÓN DE EMPRESAS:** art. 73.13, 180-P  
**ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO:** art. 39.1  
**ESTATUTOS**  
Modificación: art. 17-P1
- ESTÍMULOS A USUARIOS DE GAS:** art. 175  
**ESTRATIFICACIÓN:** art. 101  
Adopción de la: art. 101.3  
Alcalde, obligación con la: art. 101.1, 101.3, 101.5, 101.6  
Asistencia técnica: art. 101.7  
Certificado de: art. 101.9  
Comité de: art. 101.5, 104  
Contratación de la: art. 101.2  
Convenios de: art. 101.6  
Definición: art. 14.8  
Impuesto predial unificado y la: art. 101.8  
Metodología de: art. 102  
Modificación de la: art. 63.3
- Municipio, funciones en relación con la: art. 101.1  
Plazos para la: art. 101-P  
Reclamos por: art. 104  
Régimen de la: art. 101  
Sanciones en relación con la: art. 101.10, 101.12, 101.13  
Socioeconómica: art. 14.8  
Subsidios con recursos nacionales: art. 101.9  
Unicidad de la: art. 101.4  
Unidad espacial de: art. 103  
Tránsito: art. 184
- ESTRATOS:** art. 99.7  
Clasificación de: art. 102
- ESTRUCTURA TARIFARIA:** art. 90
- EXCEDENTES**  
De las contribuciones especiales: art. 85.3
- EXENCIÓN**  
De impuestos por efectos de la transformación: art. 180  
De impuestos de renta y complementarios: art. 24.2  
Del impuesto de timbre: art. 24.5
- EXIGENCIA DE CANCELACIÓN DE LA FACTURA:** art. 155
- EXISTENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS:** art. 129
- EXONERACIÓN**  
De pago del servicio: art. 99.9
- EXPERTOS**  
De las comisiones de regulación: art. 71.2, 71-P2, 177
- EXPROPIACIÓN:** art. 56, 116, 135
- EXTENSIÓN**  
De la Ley 142/94 a otras entidades territoriales: art. 178
- EXTINCIÓN**  
Del cobro de la factura: art. 150
- 
- F**
- 
- FACTOR DE SUBSIDIO:** art. 89, 89.1, 179
- FACTURA**  
Conjunta: art. 146, 147-P

De servicios públicos: art. 14.9  
Descuento en la: art. 99.3  
Determinación del consumo: art. 146  
Discriminación de valores en la: art. 89  
Elementos de la: art. 147  
Energía eléctrica y gas combustible:  
art. 89.3  
Extinción del cobro de la: art. 150  
Garantía o depósito de pago de la:  
art. 147  
Mérito ejecutivo de la: art. 130  
Naturaleza: art. 147  
Prohibición de la exigencia de  
cancelación de la: art. 155  
Requisitos: art. 148  
Revisión previa: art. 149

**FACTURACIÓN**  
Aseo: art. 147-P  
De alcantarillado: art. 147  
Por aforo individual: art. 149  
Por consumo promedio: art. 146  
Sin medición: art. 146

**FALLA**  
Del servicio: art. 136, 142  
En la continuidad del servicio: art. 137.1  
En la prestación del servicio, reparaciones: art. 137.1-137.2  
Eventos de no falla en la prestación del servicio: art. 139

**FIDUCIA**  
Contrato de: art. 27.3, 39.2, 60.1, 72  
Régimen de incompatibilidades e inhabilidades: art. 39.2

**FINANCIACIÓN DE INVERSIONES POR VALORIZACIÓN:** art. 166

**FINANCIAMIENTO**  
De Findeter: art. 165

**FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS**  
Autogeneradores de energía: art. 89.4  
Contrato con el municipio: art. 99.8  
Departamentales: art. 89  
Destino de los recursos: art. 89, 89.2  
Distritales: art. 89  
Energía eléctrica y gas: art. 89.3, 99-P1  
Factor de subsidio: art. 89, 89.1, 89.3  
Gas combustible: art. 89.5  
Naturaleza de los recursos: art. 89, 89.6  
Recursos insuficientes: art. 89.8  
Superávit de los: art. 89.2

Transferencia de recursos: art. 99.8, 101.9

**FONDOS PÚBLICOS:** art. 89.6

**FORMAS**  
de subsidiar: art. 99

**FÓRMULAS TARIFARIAS:** art. 91, 92, 93, 124.2, 125, 126, 163  
Elementos de las: art. 90  
Etapas del servicio: art. 91  
Indexación: art. 87-P1  
Modificación de las: art. 87-P1, 96, 126

**FUENTES DE LOS SUBSIDIOS:** art. 100

**FUGAS IMPERCEPTIBLES:** art. 146

**FUNCIÓN SOCIAL**  
De los prestadores de servicios públicos: art. 11

**FUNCIONES**  
Del vocal de control: art. 64  
De los Comités de Desarrollo y Control Social: art. 63

## G

**GARANTÍA O DEPÓSITO DE PAGO DE LA FACTURA:** art. 147

**GAS COMBUSTIBLE**  
Costo económico: art. 89.5  
Masificación del servicio: art. 174-P1

**GAS DOMICILIARIO**  
En áreas de servicio exclusivo: art. 40-P2, 174

**GENERACIÓN**  
De agua: art. 161  
De electricidad: art. 167

**GESTIÓN**  
Programa de: art. 79.10

**GOBERNADOR**  
Funciones: art. 27.6, 99.4, 101.11  
Sanción disciplinaria al: art. 101.12

**GRAVAMEN**  
Exención: art. 164

**GRAVÁMENES**  
De las E.S.P.: art. 24.1

## I

**IMPOSICIÓN**  
De multas: art. 63.5

**IMPUESTO**  
De renta, exención: art. 24.2  
De timbre: art. 24.5  
Predial unificado: art. 101.8

**INCENTIVOS**  
A las empresas: art. 92  
Laborales: art. 42

**INCOMPATIBILIDADES:** art. 44, 105.1, 66  
Del vocal del control: art. 66

**INDEMNIZACIÓN**  
Por imposición de servidumbres: art. 57  
Por perjuicios por falla en el servicio: art. 137.3  
Por toma de posesión: art. 121

**INDEXACIÓN:** art. 87-P1

**ÍNDICE**  
De precios: art. 92

**INFORMACIÓN**  
A los usuarios: art. 64.1  
Costos de: art. 79.13  
Derecho de los usuarios a la: art. 9  
Rehusar suministro de: art. 59.3  
Secreta o reservada por la ley: art. 9.4  
Sistemas de: art. 3.5, 53, 67.5, 79.3  
Sistemas uniformes: art. 79.3

**INFORMES**  
Presentación: art. 64.4

**INFRACTORES**  
Prohibiciones a los: art. 81.4, 81.6

**INHABILIDADES:** art. 44, 66  
Del vocal de control: art. 66

**INMUEBLES**  
Sellamiento de: art. 16-P  
Inestabilidad del: art. 139.2

**INSPECTORES DE POLICÍA:** art. 20

**INSTITUCIONES FINANCIERAS**  
Prohibiciones: art. 36.6  
Servicio de centrales de valores: art. 55

**INSTRUMENTOS**  
De intervención estatal: art. 3

**INTEGRABILIDAD**  
De las tarifas: art. 87.8

**INTERCONEXIÓN**  
Acceso compartido: art. 39.4

Empresa de: art. 167

#### INTERESES

Corrientes: art. 36.3

De mora: art. 36.3, 96

#### INTERVENCIÓN ESTATAL

Acceso de los usuarios al servicio:  
art. 2.8

Calidad del servicio: art. 2.1

Cobertura: art. 2.2

Competencia: art. 2.6

Continuidad del servicio: art. 2.4

Economías de escala: art. 2.7

Eficiencia del servicio: art. 2.5

Evitar abusos de posición dominante:  
art. 2.6

Fines La Intervención: art. 2

Gestión y fiscalización, participación  
de los usuarios: art. 2.8

Instrumentos de la: art. 3

Necesidades básicas insatisfechas de  
agua potable y saneamiento básico:  
art. 2.3

Régimen tarifario: art. 2.9

#### INVITACIÓN PÚBLICA

Celebración de contratos mediante:  
art. 87-P1

Condiciones objetivas del contrato:  
art. 35

De los municipios para prestar el  
servicio: art. 6.1

De los municipios a otros municipios,  
departamentos, nación y otros: art. 6.2

Para asignar áreas de servicio exclusi-  
vo: art. 40, 40-P2

Para asignar costos de compras al por  
mayor de bienes o servicios: art. 93

#### ISA

Reforma y escisión: art. 167

Reubicación del recurso humano: art.  
167-P4

## J

#### JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.P.

Aprobación presupuesto: art. 17-P1

Aumento de capital: art. 19.4

Composición: art. 19.16

Designación de miembros de la: art.  
27.6

## L

LEGALIDAD DE ACTOS: art. 37

LEY 80 DE 1993: art. 31

#### LIBERTAD

De empresa: art. 10

Regulada: art. 14.10, 88

De tarifas: art. 88.2, 88.3

Vigilada: art. 14.11, 88

#### LIQUIDACION

De empresas: art. 60.2, 61, 73.15, 121

Notificación a la autoridad competen-  
te: art. 61

Procedimiento: art. 121

Toma de posesión para: art. 59.8

#### LIQUIDADOR

Nombramiento del: art. 123

## M

#### MANTENIMIENTO

De centrales: art. 171.4

#### MASIFICACION

Del servicio de gas combustible: art. 97

Del servicio de gas: art. 174-P1

#### MEDICION

Cobertura: art. 146

Derecho a la: art. 144

Control sobre los medidores: art. 145

Facturación sin: art. 146

#### MEDIDOR

Características del: art. 144

Control de funcionamiento: art. 145

Omisión en la colocación del: art. 146

Plazo de instalación: art. 146

Reparación o reemplazo: art. 144

Retiro del: art. 145

#### METODOLOGÍA

De estratificación: art. 102

#### MINISTERIO DE DESARROLLO

#### ECONOMICO

Apoyo en la contratación de créditos  
externos: art. 162.4

Asistencia técnica: art. 162.2

Conservación de fuentes de agua:  
art. 162.8

Funciones: art. 162

Investigación científica: art. 162.3

Señalamiento de normas técnicas:  
art. 162.9

Participación en la Comisión de  
Regulación: art. 162.7

Plan de Desarrollo Sectorial: art. 162.1

Plan Nacional de Capacitación  
Sectorial: art. 162.6

Programas sector rural: art. 162.5

Subsidios montos: art. 162.10

Viceministerio de Vivienda y Desarro-  
llo Urbano: art. 162.10

#### MINISTERIOS: art. 67

Competencia en desarrollo de  
funciones: art. 67

Financiamiento: art. 67.3

Funciones: art. 67

Identificación de Subsidios: art. 67.4

Información: art. 67.5

Modificación de la estructura orgáni-  
ca: art. 105

Negociaciones internacionales: art. 67.6

Plan de expansión: art. 67.2

Requisitos técnicos: art. 67.1

Sistema de información sectorial:  
art. 67.7

#### MODIFICACIÓN

De estatutos de las entidades descen-  
tralizadas: art. 17-P1

De la estratificación: art. 63.3

De la estructura orgánica de ministe-  
rios y otras entidades públicas,  
comisiones de regulación: art. 105

De la ley 142/94 por leyes posterio-  
res: art. 186

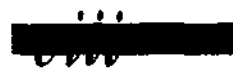
De las condiciones de los contratos:  
art. 73.10

De las fórmulas tarifarias: art. 87-P1,  
96, 126

De los contratos de garantía: art. 36.5

De redes e instalaciones: art. 28

Del objeto social de ISA: art. 167



MONTOS DE LOS SUBSIDIOS: art. 162.10

#### MORA

No requerimiento judicial  
para la constitución en: art. 36.1

#### MULTAS

Adjudicación a las personas: art. 79.11  
Imposición de: art. 63.5, 81.2, 82  
Por negativa a restituir inmuebles:  
art. 29  
Por falla del servicio: art. 137.3

#### MUNICIPIOS

Alcalde: art. 20.2, 27.6, 99.5, 101.1,  
101.3, 101.5, 101.6  
Amparo policivo: art. 29  
Aportes a los costos de conexión:  
art. 97  
Capacitación de vocales: art. 65.2  
Comités de Desarrollo y Control  
Social: art. 62  
Competencia en la prestación de  
servicios públicos: art. 5  
Concertación: art. 65.1  
Consejos municipales, obligaciones:  
art. 6.4, 89, 99.5, 99.8  
Estratificación: art. 101.1  
Impuesto de valorización: art. 166  
Inspectores de policía: art. 20.2  
Permiso municipal: art. 26  
Personero: art. 20, 63.5, 82  
Prestación directa de servicios: art. 6  
Régimen de empresas de servicios  
públicos en municipios menores y  
áreas rurales: art. 20  
Suspensión del alcalde: art. 99.4

#### MUTUO ACUERDO

Suspensión del servicio: art. 138

---

## N

---

#### NACIÓN

Amparo policivo: art. 29  
Aportes a los costos de conexión:  
art. 97  
Asistencia técnica para estratificación:  
art. 101.7

Competencia en la prestación

de servicios públicos: art. 8

Contratación por licitación en relación  
con hidrocarburos: art. 176

Expropiación: art. 116

Imposición de servidumbre: art. 118

Participación de las empresas oficiales  
de S.P.: art. 27

Subsidios con recursos de la: art. 99.9,  
101.9

Transformación de empresas: art. 182

#### NATURALIEZA

De las empresas de servicios públicos:  
art. 17

#### NECESIDADES

Básicas insatisfechas: art. 2.3

#### NEUTRALIDAD

En la definición de tarifas: art. 87.2

En la prestación del servicio: art. 3.9

#### NORMAS

Prioridad de aplicación de las: art. 160

#### NOTIFICACIONES

Contratación de las: art. 112

#### NULIDAD DE ACTOS: art. 38

---

## O

---

#### OBJETO

De las empresas de servicios públicos:  
art. 18

Exclusivo de las empresas de servicios  
públicos: art. 18

Social múltiple de las empresas de  
servicios públicos: art. 18

#### OFERTA

De acciones: art. 19.4

#### OFICINA

De peticiones y recursos: art. 153

#### OMISIÓN

Colocación de medidores: art. 146

#### OPERACIÓN

Del sistema: art. 171.1

Ámbito territorial de la: art. 23

#### ORDEN PÚBLICO

Perturbación del: art. 59.5

---

## P

---

#### PAGO

Falta de: art. 140, 141, 146

De obligaciones mercantiles: art. 59.7

#### PARÁMETROS

Para estimar consumo en ausencia de  
medición individual: art. 146

#### PARTES

Del contrato: art. 130

#### PARTICIPACIÓN DE LA E.S.P.

En el capital de las E.S.P.: art. 27

En la administración, de comisiones  
de regulación: art. 44.1, 44.3

En otras empresas de servicios  
públicos: art. 18

#### PASIVOS

Adquisición de: art. 181

#### PATRIMONIO

Recuperación de pérdidas del: art. 94

#### PEAJES: art. 39.4, 85-P2

#### PERÍODO

Probatorio en los actos administrati-  
vos: art. 108

#### PERITOS: art. 124.1

#### PERJUICIO

Indemnización por: art. 137.3

#### PERMISO

Ambientales y sanitarios: art. 25

Caducidad de los: art. 59.4

De acceso a redes: art. 170

De servidumbre: art. 57

De funcionamiento: art. 19.8 22

Municipal: art. 26

No negación de: art. 26

Para operar en el exterior: art. 23

Para las E.S.P.: art. 22

#### PERSONAS JURÍDICAS

Inversiones en E.S.P.: art. 18-P

#### PERSONERO

Custodia de Títulos: art. 20

Imposición multas: art. 82

Solicitud imposición multas: art. 63.5

#### PLAN

De desarrollo sectorial: art. 162.1

De expansión de costo mínimo: art.  
14.12, 90.3

De expansión de la cobertura del servicio: art. 67.2  
De gestión y resultados: art. 52-P  
De incentivos: art. 42  
De recuperación con la comisión de regulación respectiva: art. 36.6  
De reestructuración financiero y operativo: art. 181  
Nacional de Capacitación Sectorial: art. 162.6  
Oficial de Inversión: art. 14.12  
Para elevar niveles de medición: art. 146  
**PLAZOS**  
Para amortizar los cargos de conexión domiciliaria: art. 97  
Para decidir sobre una actuación administrativa: art. 111  
Para la estratificación urbana: art. 101  
Para la reparación de fugas: art. 146  
Para transferir recursos municipales a los fondos de solidaridad: art. 99.8  
Por instalación de medidores: art. 146  
**POSICIÓN DOMINANTE:** art. 2.6, 14.13, 30, 87-P1, 35, 86.3, 88.2, 93, 133  
**POZOS DE AGUA:** art. 161  
**PRÁCTICA DE PRUEBAS**  
En la actuación administrativa: art. 109  
**PRESIDENTE DE LA REPUBLICA**  
Delegación de funciones a las comisiones de regulación: art. 68  
Funciones presidenciales de la Superintendencia de Servicios Públicos: art. 75  
Modificación de la estructura orgánica de las comisiones de regulación: art. 70  
Modificación estructura orgánica de ministerios: art. 105  
Nombramiento de expertos de las comisiones de regulación: art. 71  
Nombramiento de miembros de empresas oficiales nacionales de servicios públicos: art. 27.6  
Nombramiento del Superintendente de Servicios Públicos: art. 77  
Resolución de conflictos entre las funciones de regulación y control: art. 83

Sanción disciplinaria a los gobernadores en relación con estratificación: art. 101.12  
Suspensión de alcaldes en relación con negligencia en el pago de los subsidios: art. 99.4  
**PRESTACIÓN**  
Directa de servicios por un municipio: art. 14.14  
**PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS:** art. 15  
Control: art. 33  
Derechos: art. 33  
Espacio público, uso del: art. 33  
Financiamiento de Findeter: art. 165  
Función social: art. 11  
**PRINCIPIOS DEL CONTROL:** art. 45  
**PROCEDIMIENTO**  
Para la toma de posesión: art. 121  
**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:** art. 82, 105.6  
**PRODUCTOR MARGINAL:** art. 14.15, 16  
**PROHIBICIÓN**  
A las entidades financieras: art. 36.6  
A infractores para prestar servicios públicos: art. 81.6  
A infractores para trabajar en empresas: art. 81.4  
De cesión de contratos: art. 39  
De obtener rendimiento de los aportes de entidades públicas: art. 87.9  
De otros cobros: art. 95  
De prácticas discriminatorias, abusivas o restrictivas: art. 34  
De prácticas tarifarias restrictivas de la competencia: art. 98  
**PROPIEDAD**  
De la conexión domiciliaria: art. 135  
**PRUEBAS INCOMPLETAS**  
Durante la actuación administrativa: art. 113  
**PUBLICACION**  
De tarifas: art. 125  
De las auditorías a las empresas de servicios públicos: art. 53

---

## Q

---

**QUEJAS:** art. 64.3

---

## R

---

**RAZÓN SOCIAL**  
de las E.S.P.: art. 19.1  
**RECAUDOS**  
Del factor de subsidio: art. 89.2  
**RECLAMOS**  
Sobre estratificación: art. 104  
**RECONEXIÓN:** art. 96  
**RECUPERACIÓN**  
De costos y gastos: art. 87.4, 92, 96  
De las inversiones: art. 90.3, 99.6  
De los costos del servicio de regulación: art. 85  
De los recursos naturales o ambientales: art. 8.5  
De pérdidas patrimoniales: art. 94  
Del bien público: art. 25  
Plan de recuperación con la comisión de regulación respectiva: art. 36.6  
**RECURSO**  
Causales y trámite del: art. 156  
De anulación, estatutos E.S.P.: art. 19.14  
De apelación: art. 113, 154  
De reposición: art. 113, 154  
Del usuario: art. 152, 153  
Extraordinario de revisión: art. 19.14  
Improcedencia del: art. 154  
Notificación de la decisión del: art. 159  
Plazo del: art. 154  
Presentación personal del: art. 114  
Término para responder: art. 158  
**RECURSOS**  
De generación: art. 171.2  
**RECUSACIÓN**  
Nombramiento de funcionarios: art. 110  
**RED**  
Interna: art. 14.16  
Local: art. 14.17

## REDES

Derecho a construir, modificar y operar las: art. 28  
Mantenimiento y reparación: art. 28  
Permiso de acceso: art. 170  
Propiedad de las: art. 135

## REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS:

art. 87.3

## REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL: art. 60.3

## RÉGIMEN

De derecho privado: art. 32  
De E.S.P. con operación exclusiva: art. 20  
De empresas de servicios públicos en municipios y zonas rurales: art. 20  
De estratificación: art. 101  
De funcionamiento de las empresas de servicios públicos: art. 22, 25, 26  
De regulación: art. 88  
Jurídico de las empresas de servicios públicos: art. 19  
Laboral aplicable a empresas de servicios públicos: art. 41  
Pensional -obligaciones pensionales: art. 43  
Presupuestal de las comisiones de regulación y de la Superintendencia: art. 84  
Tarifario: art. 2.9, 86, 87  
Transitorio: art. 188  
Tributario de las empresas de servicios públicos: art. 24

## REGISTRO

Para funcionamiento de las E.S.P.: art. 19.8

## REGIAMENTO

De operación: art. 168, 169, 171.6, 172

## REGLAS

De los contratos especiales: art. 36

## REGULACIÓN

De acceso compartido o de interconexión de bienes: art. 39.4  
De empresas que no sean de servicios públicos: art. 73.2  
De la prestación de los servicios públicos: art. 3.3, 73  
De las actividades de los sectores de energía y gas: art. 74.1-a

De las obligaciones del usufructuario: art. 19.17

De los servicios públicos domiciliarios: art. 14.18, 69.3

De monopolios en la prestación de los servicios públicos: art. 73, 74.2-a

De tarifas: art. 73.26, 74.1, 88

Funcionamiento del mercado mayorista de energía y gas: art. 74.1-c  
Para la autogeneración y cogeneración de electricidad: art. 74.1-b

Régimen de: art. 88

## REINSTALACIÓN: art. 96

## RELLENO SANITARIO

Costos: art. 164

## RENTA PRESUNTIVA

De las E.S.P.: art. 24.3

## RENUENCIA

De administradores: art. 59.6

## RENUNCIA

A derechos contractuales: art. 36.4

## REPARACIONES

Por fuerza mayor: art. 139.1

## REPRESENTANTE

Legal: art. 32, 61

## RESOLUCIÓN

Del contrato de S.P.: art. 137

## RESPONSABILIDAD

Del control interno: art. 49

## REESTABLECIMIENTO

Del servicio: art. 142

## RESTRICCIONES

De la estratificación: art. 102

Indebidas a la competencia: art. 34

## RETENEDORES

normas a las cuales están sujetos los: art. 89.6

## REVISIÓN

De la estratificación: art. 63.3

De estratos: art. 104

---

## S

---

## SANCIONES

A las empresas: art. 80.4

A los alcaldes: art. 99.4, 101.10

A los gobernadores: art. 101.12

Por mora: art. 85.6

Por no actualización de la estratificación: art. 101.13

Por renuencia a suministrar información: art. 73.26

Por violación de normas: art. 80, 81

## SANFAMIENTO BÁSICO: art. 14.19

## SELLAMIENTO

De inmuebles: art. 16-P

## SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO

Calidad del: art. 2.1, 136

Continuidad del: art. 2.4, 136

Corte del: art. 141

De acueducto: art. 14.22

De alcantarillado: art. 14.23

De aseo: art. 14.24

De energía eléctrica: art. 14.25

De gas combustible: art. 14.28

De larga distancia nacional e internacional: art. 14.27

De telefonía pública básica

conmutada: art. 14.26

Derecho al: art. 134

Eficiencia del: art. 2.5

Esencial: art. 4

Etapas del: art. 91

Exoneración de pago del: art. 99.9

Falla del: art. 142

Indemnización por falla del: art. 137.3

Masificación del: art. 97, 174-P1

Restablecimiento del: art. 142

Sin medición individual: art. 146

Suspensión por mutuo acuerdo: art. 138

Tipo de: art. 99.1

## SERVIDUMBRE

Adquisición de la: art. 117

Constitución de la: art. 33

Ejercicio del derecho de: art. 119

Entidad facultada para imponer la: art. 118

Extinción de la: art. 120

Imposición de la: art. 57, 135

## SISTEMA DE INFORMACIÓN

De las empresas de servicios públicos: art. 53

Sectorial: art. 67.5, 67.7, 79.3

## SOCIEDAD

Por acciones: art. 17

## SOLICITUD DE SERVICIO: art. 95

**SOLIDARIDAD: art. 87.3****SUBSIDIOS**

A otras E.S.P.: art. 100  
Aportantes a la componente tarifaria:  
art. 99.6  
Aportes al: art. 97  
Aportes de la nación: art. 97, 99.9,  
101.9, 162.10  
Aportes de los departamentos: art. 97,  
99.9, 101.9, 162.10  
Aportes de los municipios: art. 97  
Aportes en caso de montos insuficien-  
tes: art. 89.8  
Beneficiarios: art. 99.7  
Con recursos del crédito: art. 100  
Con recursos del departamento:  
art. 99.9, 101.9  
Con recursos nacionales:  
art. 99.9, 101.9  
Contratos con el municipio: art. 99.8  
Déficit de: art. 89.8  
Definición: art. 14.29  
Destino de los: art. 89  
En el régimen tarifario: art. 86.2  
Entidad repartidora del: art. 99.2  
Especificación del servicio a subsidiar:  
art. 99.1  
Estratificación y: art. 99.7, 101.9  
Exoneración del pago del: art. 89.7  
Factor de: art. 89.1, 179  
Formas de: art. 99  
Fuentes de los: art. 100  
Función de los comités de desarrollo  
en relación con los: art. 63.4  
Montos de los: art. 162.10  
Pago de: art. 89.2  
Presupuestales: art. 53  
SalDOS de los, a favor de prestadores  
de servicios: art. 97  
Sanciones: art. 99.4  
Superávits de los: art. 89.2  
Topes máximos: art. 99.5  
Topes mínimos de aportes de la nación  
y entidades territoriales: art. 89.8  
Tránsferencia de los recursos de los:  
art. 99.8, 101.9  
Vigilancia: art. 79.5  
Zonas rurales: art. 89.3

**SUFICIENCIA FINANCIERA:**

art. 87.4, 87.7

**SUPERÁVIT**

De los Fondos de Solidaridad: art. 89.2

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS****PÚBLICOS**

Amonestación: art. 81.1  
Apoyo a la comunidad: art. 80.3  
Apoyo a los comités de desarrollo  
y control social: art. 79.2  
Aprobación previa de actos o  
contratos: art. 79.16  
Asignación de funciones: art. 105.5  
Atribuciones: art. 110, 122  
Auditoría externa: art. 53  
Autonomía de la: art. 76  
Caducidad de contratos: art. 81.5  
Capacitación de vocales: art. 65.2  
Comités municipales de desarrollo  
y control: art. 79.2  
Conceptos a las comisiones  
y ministerios: art. 79.5  
Conceptos a partes interesadas:  
art. 79.15  
Contribuciones especiales: art. 85  
Costos de la información: art. 79.13  
Creación de la: art. 76  
Delegación de funciones: art. 105.4  
Desarrollo de procedimientos  
administrativos: art. 115  
Entidades de control: art. 55  
Estructura orgánica: art. 78  
Evaluación de gestión: art. 79.10  
Excedentes de las contribuciones  
especiales: art. 85.3  
Facultades: art. 17-P1, 19.11  
Fuentes de financiación: art. 46-P1, 85  
Funciones: art. 53, 58, 65.2, 79, 109  
Funciones control interno: art. 47  
Funciones en relación con los  
usuarios: art. 80  
Incompatibilidades: art. 44  
Información: art. 79.3, 79.7  
Inhabilidades: art. 44  
Legalidad de actos: art. 37  
Modificación de estatutos de entida-  
des descentralizadas: art. 17-P1  
Modificación de la estructura orgáni-  
ca: art. 70, 105.2  
Multas: art. 79.11, 81.2, 82  
Naturaleza: art. 76  
Nombramiento del liquidador: art. 123

Oficinas delegadas: art. 105.4

Organización interna: art. 79.14

Participación en las comisiones:  
art. 71.3

Prioridad de aplicación de normas:  
art. 160

Reemplazo del Superintendente  
en caso de ser investigado: art. 115

Régimen presupuestal: art. 84

Registro de empresas de servicios  
públicos: art. 79.8

Reparto de multas: art. 79.11

Representante legal: art. 77

Resolución de conflictos: art. 83

Sanciones: art. 80.4, 81

Separación de cargos: art. 58

Sistemas de información: art. 53

Suspensión: art. 81.7

Suspensión de actividades

del infractor: art. 81.3, 81.6

Suspensión de cargos: art. 81.4

Tarifa de contribución: art. 79.4

Toma de posesión de las E.S.P.:

art. 58, 59, 60, 79.9, 81.7

Tránsito de legislación: art. 185

Verificación de normas: art. 79.12

Vigilancia de los subsidios: art. 79.6

Vigilancia y control: art. 65.3

Vigilancia y control de actos adminis-  
trativos: art. 79.1

Vigilancia y control de contratos:  
art. 79.2

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA**

**Y COMERCIO: art. 185**

**SUSCRIPTOR**

Definición: art. 14.31

Potencial: art. 14.32

**SUSPENSIÓN**

De mutuo acuerdo: art. 138

Del alcalde: art. 99.4

Del servicio: art. 138, 139, 140, 146

Del servicio por falta de pago: art. 140

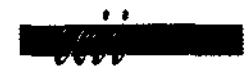
Del servicio por inestabilidad del  
inmueble: art. 139.2

Del servicio por reparaciones: art. 139.1

En interés del servicio: art. 139

Por incumplimiento: art. 140

Temporal o definitiva de empresas:  
art. 81.7





# T

## TARIFA

Actualización: art. 125, 127  
Aportantes a la componente tarifaria: art. 99.6  
Aportes de las entidades públicas: art. 87.9  
Cargo fijo: art. 90.2  
Como elemento de base para otorgar contratos: art. 87-P1  
Competencia: art. 86.3, 88.3, 95  
Competencia de la actuación administrativa: art. 124.1  
Componentes de costos de la: art. 163  
Componentes de la: art. 99.6  
Compras al por mayor: art. 93  
Conexión: art. 90.3, 95  
Contribución de: art. 79.4  
Costos de administración: art. 163  
Costos de disposición final de basuras: art. 164  
Costos de expansión: art. 163  
Costos de mantenimiento: art. 163  
Costos de operación: art. 163  
Costos de protección de las fuentes de agua: art. 164  
Costos de recolección, transporte y tratamiento de residuos líquidos: art. 164  
Costos de reposición de sistemas: art. 163  
Costos del relleno sanitario: art. 164  
Criterios para definir el régimen tarifario: art. 87  
De las fórmulas tarifarias: art. 87-P1, 96, 126  
Del uso del agua: art. 164  
Eficiencia económica: art. 87.1  
Elementos de las fórmulas de: art. 90  
Empresas distribuidoras: art. 93  
Especial: art. 89.7  
Estructura: art. 90  
Exoneración de pago: art. 99.9  
Fórmulas de: art. 91, 92, 93, 125, 126, 163  
Fórmulas tarifarias por petición de las E.S.P.: art. 124.2  
Incentivos: art. 92

Índice de precios: art. 92  
Integrabilidad de la: art. 87.8  
Intereses por mora: art. 96  
Libertad: art. 86.1, 88  
Metodología: art. 87-P2, 88.1  
Neutralidad: art. 87.2  
Otros cargos: art. 96  
Por consumo: art. 90.1  
Por solicitud de servicios: art. 96  
Por uso de vertimientos: art. 164  
Por uso del agua: art. 164  
Posición dominante: art. 86.4, 88.2, 93  
Prioridad en la aplicación de los criterios del régimen tarifario: art. 87.7  
Prohibiciones: art. 95  
Publicación: art. 125  
Reconexión: art. 96  
Recuperación de pérdidas: art. 94  
Redistribución: art. 87.5  
Régimen de regulación: art. 86.1, 88  
Régimen tarifario: art. 2.9, 86, 87  
Reinstalación: art. 96  
Revisión y actualización: art. 87-P1, 125  
Simplicidad: art. 87.5  
Solidaridad: art. 87.3  
Subsidios: art. 86.2, 89.2  
Suficiencia financiera: art. 87.4  
Sujeción a fórmulas: art. 88.1  
Topes: art. 88.1  
Transparencia: art. 87.6  
Valor necesario: art. 85.2  
Vertimiento de afluentes: art. 164  
Vigencia: art. 126, 179

## TASA

Exención: art. 164

## TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

art. 133.16, 133.21, 133.22, 138, 141, 146

## TÍTULOS: art. 20.2

## TOMA DE POSESION: art. 79.9, 81.7

Caducidad de permisos: art. 59.4  
Calamidad: art. 59.5  
Causales, modalidad y duración: art. 59  
Celebración de contratos con otras empresas de servicios públicos: art. 61  
Contrato de concesión: art. 121  
Efectos de la: art. 60  
Indemnización: art. 121  
Liquidación: art. 59.8, 121  
Liquidación definitiva: art. 60.2  
Orden público: art. 59.5

Pago de obligaciones: art. 59.7  
Prestación del servicio: art. 59.1  
Procedimiento: art. 121  
Reducción del capital social: art. 60.3  
Rehusar suministro de información: art. 59.3  
Renuncia de administradores: art. 59.6  
Violación de normas: art. 59.2

## TOPES

En la tarifa de contribución: art. 85.2  
Máximos de los subsidios: art. 99.5  
Tarifarios: art. 88.1

## TRANSFERENCIA

De recursos de los fondos de solid. y redistrib. de ingresos: art. 99.8

## TRANSFORMACIÓN

De empresas: art. 180  
De entidades descentralizadas: art. 17-P1  
De empresas de la nación o entidades territoriales: art. 182  
Escisión de empresas: art. 180-P

## TRANSPARENCIA: art. 87.6

# U

## USO DEL AGUA

Tarifa Por: art. 164

## USUARIO

Acceso al servicio: art. 2.8  
Aceptación de la cesión del contrato: art. 133.22  
Adopción de formalidades poco usuales: art. 133.23  
Adquisición de acciones de las empresas: art. 151  
Adquisiciones no relacionadas con el contrato: art. 133.4  
Asesoría al: art. 157  
Autorización para usar las redes: art. 135  
Cláusulas sobre terminación del contrato: art. 133.16  
Compras a proveedores: art. 133.5  
Concesión a la empresa para modificar obligaciones: art. 133.13  
Concesión de mayores derechos: art. 133.10

Concesión de plazos excesivos  
a la empresa: art. 133.12  
Consentimiento de la E.S.P.: art. 133.3  
Defensa del: art. 155  
Derechos de los: art. 9, 137, 151  
Elección del lugar de arbitramento:  
art. 133.11  
Estímulos: art. 175  
Impedimento de Compensación  
de obligaciones: art. 133.25  
Impedimento para terminar  
el contrato: art. 133.17  
Imposición de términos para el uso  
del recurso: art. 133.9  
Limitación de contratos con terceros:  
art. 133.5  
Limitación del derecho de retención:  
art. 133.24  
Limitación en las obligaciones  
con la E.S.P.: art. 133.18  
Obligación de dar preaviso: art. 133.21  
Participación en la gestión y fiscaliza-  
ción de las E.S.P.: art. 2.8  
Plazo para reparar fugas: art. 146  
Presunción de manifestación de  
voluntad: art. 133.14  
Presunción de obligaciones realizadas  
por la empresa: art. 133.15  
Reclamos sobre la factura: art. 155  
Renovación tácita del contrato:  
art. 133.20  
Renuncia anticipada a derechos:  
art. 133.6  
Sector rural: art. 162.5  
Sellamiento de inmuebles: art. 16-P  
Vinculación de: art. 16-P

UTILIDAD PÚBLICA  
Declaración de: art. 56

---

## V

---

VALOR DE INTERCAMBIOS: art. 171.3  
VALORIZACIÓN  
Financiación de inversiones por:  
art. 166  
VEEDURÍA A E.S.P.: art. 64.2

## VERTIMIENTOS

Tarifa: art. 164  
VIABILIDAD EMPRESARIAL: art. 181  
VIGENCIA  
De la estratificación: art. 184  
De la ley 142/94: art. 189  
De las tarifas: art. 179  
VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS  
CONTRATOS: art. 79.2  
VINCULACIÓN  
De usuarios: art. 16-P  
Económica: art. 14.34  
VIOLACIÓN  
Al reglamento de operación: art. 171.6  
De normas de los administradores:  
art. 59.2  
VOCAL DE CONTROL: art. 62  
Capacitación del: art. 65.2, 80.2  
Funciones del: art. 64  
Incompatibilidades del: art. 66  
Inhabilidades del: art. 66  
VOTACIÓN  
En las asambleas de las E.S.P.: art. 19.9

---

## Z

---

ZONAS RURALES  
Subsidios: art. 89.3



